

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL MÉRITO EJECUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE SALDO
DEUDOR QUE PROVIENE DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO
PERSONAL”**

Presentada por:

Bach. Diana Carolina Mijahuanca Labán

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

**Línea de Investigación Institucional:
Legislación y Ciencias Políticas**

**Sub Línea De Investigación:
Derecho civil: Nuevas Tendencias**

**PIURA - PERÚ
2019**

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



TESIS

**“EL MÉRITO EJECUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE SALDO
DEUDOR QUE PROVIENE DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO
PERSONAL”**

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE ABOGADA

Bach. Diana Carolina Mijahuanca Labán

Ejecutor

Mg. Fidencio Francisco Cunya Celi

Asesor

Línea de Investigación Institucional:

Legislación y Ciencias Políticas

Sub línea de Investigación:

Derecho civil: Nuevas Tendencias

PIURA – PERÚ

2019

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD DE TRABAJO DE INVESTIGACION

Yo: **DIANA CAROLINA MIJAHUANCA LABÁN** identificada con DNI Nº 75415937, en la condición de Egresada, de la Facultad de DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, Escuela Profesional de DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS y domiciliado en A.H. CUIDAD DEL SOL, Mz. "D" LOTE 10, Distrito 26 de octubre, Provincia de Piura, Departamento de Piura, Celular: 952532394, Email: dianamlaban@gmail.com.

DECLARO BAJO JURAMENTO: que el trabajo de investigación que presento a la Oficina Central de Investigación (OCIN), es original, no siendo copia parcial ni total de un trabajo de investigación desarrollado, y/o realizado en el Perú o en el Extranjero, en caso de resultar falsa la información que proporciono, me sujeto a los alcances de lo establecido en el Art. Nº 411, del código Penal concordante con el Art. 32º de la Ley Nº 27444, y Ley del Procedimiento Administrativo General y las Normas Legales de Protección a los Derechos de Autor. En fe de lo cual firmo la presente.



Piura, 26 junio del 2019


DNI Nº 75415937

Artículo 411.- El que, en un procedimiento administrativo, hace una falsa declaración en relación a hechos o circunstancias que le corresponde probar, violando la presunción de veracidad establecida por ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años.

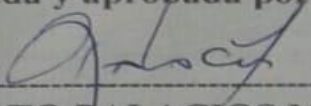
Art. 4. Inciso 4.12 del Reglamento del Registro Nacional de Trabajos de Investigación para optar grados académicos y títulos profesionales –RENATI Resolución de Consejo Directivo Nº 033-2016-SUNEDU/CD

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**

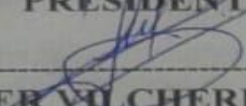


**“EL MÉRITO EJECUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE SALDO
DEUDOR QUE PROVIENE DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO
PERSONAL”**

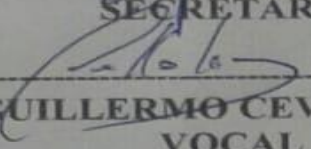
Tesis revisada y aprobada por el jurado:



Dr. ROBERTO PALACIOS MÁRQUEZ
PRESIDENTE



DR. DEIVER VILCHERREZ VILELA
SECRETARIO



MAG. GUILLERMO CEVALLOS LÓPEZ
VOCAL

**PIURA-PERÚ
2019**



UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS
086-UI-FDCCP-UNP-2019

Los miembros del Jurado Calificador que suscriben, reunidos para evaluar la Tesis titulada "EL MÉRITO EJECUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE SALDO DEUDOR QUE PROVIENE DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO PERSONAL" presentada por la Bachiller **MIJAHUANCA LABAN DIANA CAROLINA** para optar el Título Profesional de Abogado, con el asesoramiento del Mag. Fidencio Francisco Cunya Celi; oídas las observaciones y respuestas a las preguntas formuladas y, de conformidad al Reglamento de Tesis para la obtención del Título Profesional, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la declaran:

APROBADA ☒ ()

DESAPROBADA ()

Con la mención de:

Muy Buena

- ☒ En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por Consejo de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado.
- () En consecuencia, queda en condición de ser ratificada por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional de Piura y recibir el Título Profesional de Abogado, después de que la sustentante incorpore las sugerencias del Jurado Calificador.

Piura, 08 de diciembre de 2019

DR. ROBERTO PALACIOS MARQUEZ
PRESIDENTE

DR. DEIVER VILCHERREZ VILELA
SECRETARIO

MAG. GUILLERMO ENRIQUE CEVALLOS LOPEZ
VOCAL

DEDICATORIA

A mi madre por su gran corazón,
fortaleza y valentía.

AGRADECIMIENTO

A mi tía Vilma, por su cariño y cuidados.

A los Abogados Julio Gil y Adriana Bustamante por sus enseñanzas y amistad.

Y finalmente a todos aquellos que siempre estuvieron dispuestos a brindarme su ayuda en el momento en que más lo he necesitado.

INDICE GENERAL

DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
INDICE GENERAL.....	IV
RESUMEN.....	VIII
ABSTRACT	IX
INTRODUCCIÓN.....	8
CAPÍTULO I	9
ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA.....	9
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	9
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	11
1.2.1. Problema General:.....	11
1.2.2. Problema específico:	11
1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN.....	11
1.4. OBJETIVOS.....	11
1.4.1. Objetivo General:.....	11
1.4.2. Objetivos Específicos:	12
1.5. DELIMITACIÓN	12
1.5.1. Espacial.....	12
1.5.2. Temporal.....	12
1.5.3. Económica.....	12
CAPÍTULO II.....	13
MARCO TEÓRICO	13
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	13
2.2. BASES TEÓRICAS	14
2.2.1. Contrato	14
2.2.2. Contrato de mutuo	14
2.2.3. Contrato de préstamo personal	14
2.2.4. La obligación de dar suma de dinero	14
2.2.5. Proceso único de ejecución	15

2.2.6. Título ejecutivo.....	15
2.2.7. El Pagaré.....	16
2.2.8. Liquidación de saldo deudor.....	16
2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. OSSORIO (s.f).....	17
2.4. MARCO REFERENCIAL.....	18
2.4.1. Título Ejecutivo.....	18
2.4.1.1. Elementos y presupuestos del título para su ejecución.....	19
2.4.1.2. Clasificación los títulos ejecutivos	21
2.4.1.3. Títulos ejecutivos en nuestro ordenamiento procesal.....	22
2.4.1.4. Títulos ejecutivos en el código procesal vigente	24
2.4.2. El contrato de préstamo personal.....	31
2.4.2.1. El contrato de mutuo	31
2.4.2.2. La contratación masiva	32
2.4.2.3. Contrato de consumo.....	33
2.4.2.4. Cláusulas generales de contratación	33
2.4.2.5. Contratos de adhesión	36
2.4.3. Liquidación de saldo deudor emitida por las entidades del sistema financiero	38
2.4.3.1. El ahorro.....	39
2.4.3.2. Clasificación del ahorro.....	39
2.4.3.3. Garantía del ahorro	39
2.4.3.4. La liquidación de saldo deudor como título ejecutivo	41
2.4.4. Regulación legal del pagaré.....	43
2.4.4.1. Origen y desarrollo histórico del pagaré	43
2.4.4.2. Características del título valor.....	44
2.4.4.3. Principios que rigen en los títulos valores.....	45
2.4.4.4. Concepto del pagaré	48
2.4.4.5. Contenido del pagaré.....	49
2.4.4.6. Formas del vencimiento del pagaré.....	52
2.4.4.7. Obligaciones del emitente del pagaré.....	52
2.4.4.8. Aplicación al pagaré de la normatividad correspondiente a la letra de cambio	53
2.4.4.9. El pago y el protesto	53
2.4.4.10. Acciones Cambiarias	55
2.4.5. Proceso único de ejecución.....	58

2.4.5.1. Evolución Histórica	58
2.4.5.2. Concepto	61
2.4.5.3. Legitimación en el proceso de ejecución	62
2.4.5.4. Fases o etapas del proceso de ejecución	63
2.5. HIPÓTESIS	75
2.5.1. Hipótesis General:.....	76
2.5.2. Hipótesis Específicas:.....	76
 CAPÍTULO III.....	 77
MARCO METODOLÓGICO.....	77
3.1. ENFOQUE.....	77
3.2. DISEÑO	77
3.3. NIVEL.....	77
3.4. TIPO.....	78
3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS	78
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.....	78
 CAPÍTULO IV	 80
PROBANZA DE HIPÓTESIS	80
4.1. PROBANZA JURÍDICO - SOCIAL – DOCTRINAL	80
4.1.1. Hipótesis General	80
4.1.2. Hipótesis específica	91
 CONCLUSIONES	 98
RECOMENDACIONES	99
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:.....	100

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1	108
ANEXO 2.	109
ANEXO 3.	110
ANEXO 4	111
ANEXO 5	115
ANEXO 6	118
ANEXO 7	120
ANEXO 8	121
ANEXO 9	124

RESUMEN

La presente investigación ha tenido como objetivo general establecer qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo que proviene de un contrato de préstamo personal. Metodológicamente se aplicó un enfoque cualitativo con diseño exploración-acción. Esta investigación ha recabado contratos de las entidades financieras, a recurrido a la doctrina y a la jurisprudencia. Asimismo, se ha llegado a los resultados más relevantes: es necesaria la estipulación del uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor para no vulnerar el derecho a la información, así como el principio de la buena fe.

Palabras Clave: liquidación de saldo deudor, contrato de préstamo personal, derecho a la información, buena fe.

ABSTRACT

The general objective of this research has been to establish what is needed to use the executive merit of balance settlement that comes from a personal loan contract. A qualitative approach with exploration-action design was applied methodologically. This investigation has gathered contracts from financial entities, has resorted to doctrine and jurisprudence. Likewise, the most relevant results have been reached: it is necessary to stipulate the use of the debtor balance settlement when the debtor fails to pay in order not to violate the right to information, as well as the principle of good faith.

Keywords: debit balance settlement, personal loan contract, right to information, good faith.

INTRODUCCIÓN

LEDESMA define al proceso único de ejecución como aquel que, partiendo de la pretensión del ejecutante, realiza un cambio real en el mundo exterior para acomodarlo a lo establecido en el título que sirve de fundamento a la pretensión de la parte y a la actuación jurisdiccional.

De la definición ofrecida en el párrafo anterior, debemos resaltar dos características esenciales de este proceso: la primera, es la generación de un cambio en el mundo exterior y la segunda, la existencia de un título ejecutivo para generar ese cambio.

Los títulos ejecutivos se encuentran regulados el art. 688° del Código Procesal Civil y únicamente a través de ellos se podrá acceder a la vía ejecutiva. Pero no todos los títulos ejecutivos se encuentran previstos dentro de este artículo, ya que el inc. 11° del artículo en mención permite que otras leyes puedan dar mérito ejecutivo a otros títulos; tal es el caso de la Ley 26702 que en su artículo 132, inciso 7 otorga mérito ejecutivo a la liquidación de saldo deudor.

Pese al mérito ejecutivo otorgado a la liquidación de saldo deudor por la ley, los Jueces del país, en un inicio, eran del criterio que la liquidación de saldo deudor no era un título ejecutivo, porque consideraban que no cumplía los requisitos comunes exigidos en el artículo 689° del Código Procesal Civil¹. Sin embargo, esta situación cambió pues actualmente se permite acceder a la vía ejecutiva utilizando la liquidación de saldo deudor como título ejecutivo, siempre y cuando se acompañe del contrato que originó la obligación; así lo han establecido las casaciones CAS N° 2024-2000-LIMA, CAS N° 1706-98-LIMA, CAS N° 1674-02, CAS 4087-2009-LIMA, entre otras.

En mi opinión, el criterio establecido en las casaciones mencionadas, no han tenido en cuenta: la particular naturaleza de la liquidación de saldo deudor; que la entidad financiera puede hacer uso irregular del título en mención; y, por último, la vulneración al derecho a la información que se genera al no estipularse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor en un eventual proceso ejecutivo.

Debo mencionar que, esta investigación solo se centrará en la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal, por lo que, el presente estudio tendrá como objetivo general determinar qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal.

Asimismo, este trabajo analizará el VI Pleno Casatorio civil, pero solo referido la liquidación de saldo deudor en los procesos únicos de ejecución de obligación de dar suma de dinero; esto porque el Pleno en mención se haya dentro de un proceso de ejecución de garantías.

Por otro lado, esta investigación desarrollará instituciones jurídicas como los procesos únicos de ejecución, los títulos ejecutivos, el pagaré, la liquidación de saldo deudor, etc.

La presente investigación consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo, se describe la problemática; se formula la pregunta que será materia de investigación; se establecen las razones por las cuales se investigó; se determinará cuáles son los objetivos que nos guiará en todo este trabajo y se delimita la investigación. En el segundo capítulo, se aborda el marco teórico, en donde se detallan los antecedentes de la investigación; las bases teóricas; la hipótesis; la definición y la operacionalización de

¹ Estos requisitos son que la obligación contenida en el título valor sea cierta, expresa y exigible y tratándose de obligaciones de dar suma de dinero sea líquida o liquidable mediante operación aritmética.

las variables. En el tercer capítulo, trataremos acerca del marco metodológico. Finalmente, en el cuarto capítulo, se realizará la probanza de la hipótesis.

CAPÍTULO I

ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Los contratos de crédito o préstamo que puede celebrar una entidad financiera con su cliente son muchos, por esa razón esta investigación se centrará en la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal.

Por otro lado, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-Ley N° 26702, en su artículo 132° establece las formas mediante las cuales se atenúa el riesgo para el ahorrista; por lo que en su inciso 7 otorga mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldos deudores emitidas por las empresas del sistema financiero. Con ello, se permite promover un proceso ejecutivo en virtud a un título extrajudicial contemplado dentro del supuesto del inciso 11 del art. 688° del Código Procesal Civil². Se debe agregar que, la liquidación de saldo deudor, es definida como un documento emitido unilateralmente por las entidades financieras, a través del cual se precisa cuánto debe su deudor.

En atención a lo expuesto, las casaciones CAS N° 2024-2000-LIMA, CAS N° 1706-98-LIMA, CAS N° 1674-02, CAS 4087-2009-LIMA, entre otras, han establecido que la sola presentación de la liquidación de saldo deudor no viabiliza el proceso único de ejecución; por lo que para habilitar esta vía se requiere de la presencia indispensable del contrato que originó la obligación. De esta manera, la Corte Suprema ha establecido un criterio que debe ser tomado en cuenta por los jueces del país, ello en atención a que finalidad de la casación, es la unificación de la jurisprudencia y por tanto la predictibilidad de la justicia.

En este sentido, se está permitiendo acceder al proceso único de ejecución de obligación de dar suma de dinero, en virtud del mérito ejecutivo otorgando a la liquidación de saldo deudor por la ley 26702; pese a que, ni dicha ley ni las casaciones mencionadas establecen en qué tipo de contrato se debe utilizar la liquidación de saldo deudor ni qué se necesita para utilizar dicho título. Es por ello que, por la diversidad de productos activos³ que ofrecen las entidades del sistema financiero, es necesario establecer que el presente estudio desarrollará la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal, ya que en la realidad dicho título ejecutivo se viene utilizando de manera irregular en los dos siguientes casos: ⁴

² Art. 688°. - Títulos ejecutivos: solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso. Son títulos ejecutivos los siguientes:
(...) Inciso 11.- otros títulos a los que la ley les da el mérito ejecutivo.

³ Los productos activos: son instrumentos financieros mediante los cuales los bancos prestan sus recursos a los agentes deficitarios de financiación a cambio de un interés. Entre ellos tenemos: al préstamo, crédito hipotecario, tarjetas de crédito, leasing, entre otras.

⁴ A pesar de no tocar el tema de contrato de cuenta corriente y de contratos de tarjeta de crédito, es necesario mencionar que aquí también se viene utilizando el mérito ejecutivo de liquidación de saldo deudor, a pesar de que la ley 26702 en su artículo 228°, ha previsto un procedimiento a seguir, el cual consiste en remitir una comunicación al cliente, advirtiéndole de la existencia de saldos deudores en su cuenta y requiriéndole el pago. Transcurridos quince (15) días hábiles de la recepción de la

El primero, para la ejecución créditos representados por pagarés completos o ante contratos de préstamo personal, donde el deudor ha autorizado la emisión de un pagaré incompleto que posteriormente será llenado por la entidad financiera de acuerdo a lo estipulado por las partes. En estos casos el único título a ejecutarse en un proceso de ejecución debería ser el pagaré y no la liquidación de saldo deudor.

El segundo, para ejecutar obligaciones exigibles representadas por pagarés y estos se hayan deteriorado parcial o totalmente, se hayan extraviado o sustraído. Ante estos casos, la Ley de Títulos Valores ha previsto en su artículo 101^{o5} y 102^{o6} que se puede solicitar al Juez que se declare ineficacia del pagaré, y que se le autorice a exigir el cumplimiento de las obligaciones principal y accesorias inherentes a dicho título valor.

A los supuestos antes mencionados se debe añadir que, en estos casos el uso de la liquidación de saldo deudor ni siquiera se estipuló en el contrato de préstamo personal que celebró la entidad financiera con el cliente. Esta situación genera la vulneración en el derecho a la información que le asiste al usuario del producto financiero.

Por otro lado, y no aislado de la problemática que nos ocupa, debemos hacer mención que el art. 400° del Código Procesal Civil regula el Pleno Casatorio civil, estableciendo que las decisiones adoptadas en mayoría absoluta por parte de los jueces asistentes al pleno, constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales del país, incluidos a los Jueces Supremos.

Acorde con el párrafo anterior, el VI Pleno casatorio Civil publicado el 24 de octubre de 2014, ha establecido los requisitos que deben cumplir los particulares y las entidades del sistema financiero para ejecutar una garantía. Asimismo, ha regulado que debe contener el estado de cuenta de saldo deudor. Si bien el pleno se desarrolla dentro de un proceso de ejecución de garantía y no en uno de obligación de dar suma de dinero, utiliza indistintamente el término liquidación de saldo deudor. Es por ello que, un punto criticable al Pleno, es utilizar como sinónimos liquidación de saldo deudor, estado de cuenta de saldo deudor y saldo deudor, cuando son palabras que, aunque tengan en común expresar el monto de la deuda del cliente de la entidad, provienen de distintos contratos y procedimientos.

A causa de la problemática existente en la ley, la jurisprudencia y el VI Pleno Casatorio civil, a continuación, formulamos las siguientes interrogantes.

comunicación sin que hubiere observaciones, la empresa está facultada para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho período, una letra a la vista, con expresión del motivo por el que se la emite.

⁵ Ley 27287-Artículo 101.- Deterioro notable o destrucción parcial:

101.1 Si un título valor se deteriora notablemente o se destruye en parte, subsistiendo los datos necesarios para su identificación, el obligado principal debe reponerlo por otro, si el tenedor lo exige mediante comunicación notarial, contra entrega del título original debidamente anulado.

101.2. Si cualquiera de los requerimientos notariales señalados en los párrafos anteriores no fuese atendido en el plazo de tres días hábiles por el requerido, a petición del tenedor, el Juez ordenará el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, en proceso sumarísimo, por el sólo mérito de la presentación del título original; sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por la negativa injustificada de sustituir el título o intervenir en él.

⁶ Art. 102.- (...) quien se considere con legítimo derecho sobre el título valor, puede solicitar al Juez que se declare la ineficacia del título respectivo; y, que se le autorice a exigir el cumplimiento de las obligaciones principal y accesorias inherentes a dicho título valor, salvo que no resulten aún exigibles, en cuyo caso podrá solicitar se ordene la emisión de un duplicado quedando anulado el original, bajo responsabilidad del peticionario

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema General:

¿Qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal?

1.2.2. Problema específico:

¿Por qué razón debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor?

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

La liquidación de saldo deudor es una institución jurídica aún en desarrollo, en consecuencia, existe escasa investigación sobre el tema a pesar de su gran relevancia; por lo que este trabajo constituirá un valioso aporte para la doctrina nacional y para que otros investigadores profundicen más acerca del tema.

Por otro lado, el presente estudio dará a conocer la casi inexistente regulación legal sobre la liquidación de saldo deudor y la necesidad apremiante de que el poder legislativo regule este novísimo título ejecutivo, pues solo la ley se limita darle mérito ejecutivo.

Además de ello, esta investigación permitirá poner en evidencia una situación no prevista por la Corte Suprema quien a través de diversas casaciones, establece que, la liquidación de saldo deudor constituye un título ejecutivo, siempre que se acompañe del contrato que le dio origen. Dicha situación permite que las entidades del sistema financiero puedan usar la liquidación de saldo deudor cuando no se estipuló en el contrato y para ejecutar obligaciones que provienen de títulos valores o de contratos de préstamo donde la ley ha previsto un procedimiento a seguir ante el incumplimiento de pago del deudor. Asimismo, el presente estudio permitirá determinar si el VI Pleno Casatorio reglamenta la liquidación de saldo deudor otorgándole la calidad de título ejecutivo.

En vista de la problemática encontrada, esta investigación pretende establecer qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo que proviene de un contrato de préstamo personal. Con ello, estamos contribuyendo a la existencia de un orden social, pues evitamos que se haga uso irregular de este título.

Esta investigación tendrá como beneficiarios a los operadores del derecho, quienes conocerán más acerca del uso de la liquidación de saldo deudor en el proceso de obligación de dar suma de dinero. También a las entidades financieras quienes sabrán cuando utilizar la liquidación de saldo deudor. Finalmente beneficiará a los deudores quienes se enfrentarán a este título cuando así lo hayan determinado en el contrato.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General:

- Establecer qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo que proviene de un contrato de préstamo personal.

1.4.2. Objetivos Específicos:

- Determinar por qué razón debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor.

1.5. DELIMITACIÓN

1.5.1. Espacial.

Esta investigación será de tipo cualitativa doctrinal, por esta esta razón no existirá delimitación espacial.

1.5.2. Temporal.

Al ser una investigación cualitativa doctrinal tampoco existirá delimitación temporal pues se estudiará posturas jurisprudenciales establecidas en las casaciones CAS N° 2024-2000-LIMA, CAS N° 1706-98-LIMA, CAS N° 1674-02-LIMA, CAS 4087-2009-LIMA Civil y en el VI Pleno Casatorio Civil.

1.5.3. Económica.

Esta investigación será financiada con recursos que son por cuenta propia del investigador.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

- PIOX ANZUETO (2015), en su tesis “Análisis jurídico doctrinario de los títulos de crédito del juicio ejecutivo cambiario en Guatemala” para obtener en Grado académico de Licenciada en Ciencias jurídicas y sociales, tuvo como objetivo el estudio del juicio ejecutivo cambiario (nombre que recibe el proceso único de ejecución sustentado en títulos valores) y la descripción de los títulos de crédito que contempla el ordenamiento jurídico Guatemalteco. Concluyéndose que, en este tipo de juicio se va a ejecutar derechos reconocidos en actos o títulos de tal fuerza que constituyen vehemente presunción de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado para su atención. Además se determinó que el juicio ejecutivo cambiario es muy beneficioso para el acreedor, ya que su pretensión judicial será tramitada en el menor tiempo posible y con menores posibilidades de defensa por parte del deudor.
- PINTADO JAIME (2017) en su tesis “Cosa Juzgada en el Proceso Único de Ejecución en el Juzgado Comercial de Lima – Sede Petith Thouars 2016”, para obtener el Título Profesional de Abogada, tuvo como objetivo explicar la incidencia que tiene la cosa juzgada en el Proceso Único de Ejecución en los Juzgados Comerciales de Lima con Sede en Petith Thouars. La muestra utilizada estuvo formada por 19 Juzgados Comerciales de Lima con Sede en Petith Thouars. Se encontró que la mayoría de encuestados atribuyen que lo obtenido en el Proceso Único de Ejecución alcanza la autoridad de cosa juzgada formal, debido a que cumple con las dimensiones de inimpugnable, certeza del título ejecutivo, firmeza pero no indiscutibilidad.
- TEJADA RODRIGUEZ (2017) en su tesis “Regulación sobre la causal de contradicción basada en el erróneo cálculo del estado de cuenta de saldo deudor como mecanismo de defensa del ejecutado”, para obtener el Título Profesional de Abogada, tuvo como objetivo general determinar si la regulación de la causal basada en el erróneo cálculo del saldo deudor efectiviza los derechos de defensa e igualdad sustancial del ejecutado en el Proceso Único de Ejecución. Determinándose que, la regulación de la causal basada en el erróneo cálculo del saldo deudor contriuiirá a garantizar una mayor protección al deudor ejecutado dentro del proceso, ya que podrá pronunciarse sobre el contenido del estado de cuenta de saldo deudor, a fin de que la suma que se ordene pagar sea la correcta y no se ordene a pagar montos exponencialmente excesivos, ni conceptos que no correspondan o ya se encuentren cubiertos.
- CASASSA CASANOVA (2011) en su tesis “El Debido Proceso de Ejecución de Obligación de Dar Suma de Dinero: En Busca de un Proceso Justo”, para obtener el Grado de Magister en Derecho Procesal, tuvo como objetivo demostrar que le Proceso Único de ejecución de obligación de dar suma de dinero es un proceso injusto. Casassa concluyó que la acción ejecutiva como presupuesto del proceso de de ejecución nace de la existencia de un título. Pero debido a que tenemos un gran número de de títulos de naturaleza extrajudicial obliga tener mecanismos de control eficaces que permitan evitar procesos injustos, en tanto que se podría dar inicio a ejecuciones en mérito a documentos con eficacia ejecutiva pero con una oligación inexistente o ilícita.

2.2. BASES TEÓRICAS

2.2.1. Contrato

DE TRAZEGHEIS GRANDA (2011, p.24) menciona que “el artículo 1351 de nuestro Código de 1984 define al contrato como el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial. Esto significa que el contrato es el instrumento de la opción en el plano patrimonial, es el canal de la libertad de acción a la que antes me he referido. Esta opción libremente convenida se convierte así en ley entre las partes ya que crea un orden jurídico ad hoc, que es producto de la conjugación de dos o más libertades. De ahí que la autonomía de la voluntad sea la piedra angular y la esencia del contrato: un contrato impuesto no es un contrato; tan simple como eso.”

En ese mismo sentido ORREGO ACUÑA (2015, p.2) manifiesta que “el contrato es un acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones. Se atribuye a la voluntad de las partes un poder soberano para engendrar obligaciones. Por lo que la voluntad de las partes es al mismo tiempo: fuente de obligaciones y medida de dichas obligaciones.”

2.2.2. Contrato de mutuo

DE LA FUENTE HONTAÑÓN (2010, p. 11-12) en su artículo “El Mutuo”, señala que “(...) en el Perú existe un régimen unitario del mutuo, así lo dispone el art. 2112 del Código civil, que unifica el mutuo civil y el mutuo mercantil, regulado con anterioridad por el Código de Comercio de 1902. Por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad (art. 1648 Código civil de 1984). Es por lo tanto, un contrato consensual, que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes (...)”.

Por otra parte MARTÍNEZ ÁLVAREZ (2016, p. 1-2) en la revista “Asesoría Empresarial”, indica que en “el contrato de préstamo o mutuo dinerario, el prestamista (mutuante) se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero al prestatario (mutuatario), quien se compromete, a su vez, a devolver tal monto en un determinado plazo, más cierto interés, que será la ganancia de quien presta el dinero (...)”.

2.2.3. Contrato de préstamo personal

Según AVELINO SÁNCHEZ, TORRES RAMÍREZ, & TIPE TOPERVISCO (2016, p.11) “ Los créditos de consumo, que es donde se encuentra el contrato de préstamo personal, es aquel contrato que otorga a las personas naturales con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad empresarial. Los préstamos en la modalidad clásica se amortizan en forma periódica en cuotas iguales, las cuales incluyen los intereses devengados y una fracción del capital prestado”.

2.2.4. La obligación de dar suma de dinero

Según OSTERLING PARODI (2007, p.28), respecto a las obligaciones de dar suma de dinero ha existido en transcurso del tiempo dos teorías. Una teoría es “la tesis nominalista, originada en la doctrina Francesa, la cual responde al principio de que la fluctuación del valor de la prestación debida, entre la época en que se contrajo la obligación y la época de su cumplimiento, tiene que mantener intangible el monto numérico de dicha prestación, en forma tal, que el deudor se libere entregando la misma cantidad de unidades a que se obligó. El deudor estaría obligado solo al pago de la suma numérica expresada en

el contrato, sean cuales fueren las fluctuaciones de la moneda. Y, la otra es, la tesis valorista, determina que el deudor se libere mediante el pago de un número de unidades que tenga un poder adquisitivo equivalente al de aquél que se convino originalmente; es decir, que se mantiene el monto de la deuda en valores constantes.”

Concluyendo BENITES (s.f), que ha decir de los comentaristas de nuestro actual código, se ha optado por la teoría nominalista, sin descartar la teoría valorista contemplada en el artículo 1235°, ya que permite la posibilidad del reajuste de la prestación previo pacto entre las partes.

Para OSTERLING PARODI & CASTILLO FREYRE (2008, p.150) “Las obligaciones con prestaciones de dar son a grandes rasgos, aquellas que implican la entrega física o jurídica de un bien consistente en dinero.”

2.2.5. Proceso único de ejecución

Según señala SEVILLA AGURTO (2016) “Uno de los cambios que nuestro legislador originó con el Decreto Legislativo N° 1069 fue la unificación del proceso de ejecución, el propia legislador señaló que: “en cuanto a los procesos de ejecución, no existe justificacipon racional para dar un tratamiento distinto a los títulos ejecutivos, cuando la única diferencia es su origen; sin que ello obligue a una tramitación distinta con plazos diferentes, lo que provoca disperción, confusión y costos de oportunidad” .

Antes del Decreto Legislativo N° 1069 en nuestro proceso civil existían tres clases de procesos de ejecución: I) el llamado proceso ejecutivo en el cual se ejecutaban los títulos de naturaleza extrajudicial que se subdividía en ejecución de obligación de dar suma de dinero, ejecución de dar bien mueble determinado, ejecución de hacer y ejecución de no hacer; II) el proceso de ejecución de resoluciones judiciales donde se ejecutaban aquellas resoluciones que son pasibles de ejecución como las sentencias condenatorias, autos que homologan o aprueban las transacciones o las conciliaciones donde las prestaciones consisten en una prestación pasible de ejecución, los laudos arbitrales, etc, y; III)el proceso de ejecución de garantías donde la mayor parte de nuestra jurisprudencia consideraba que se trataba de una acción real.

SEVILLA concluye que con la modificación se esclareció que todo proceso de ejecución debe iniciarse con un título ejecutivo y, por ende, no se creen títulos ejecutivos fictos que la ley no los ha establecido como tales. (...)”.

También cabe señalar que por su parte LEDESMA (2018, p.11) indica que en “el proceso ejecutivo se parte de un derecho cierto pero insatisfecho. Por otro lado, señala que la jurisdicción no se limita a declarar un derecho, comprende la ejecución del mismo. Como las sentencias declarativas y constitutivas no imponen el dar hacer u omitir algo, la ejecución se dirige a asegurar la eficacia práctica de las sentencias de condena. (...)”.

2.2.6. Título ejecutivo

Según CORTEZ FIGUEROA (s.f, p.129). señala que el vocablo "título" tiene dos acepciones en derecho: se toma como la calidad de una persona, o bien como documento o instrumento. Así, dentro de la primera acepción, se habla de título de propietario, de locador, de heredero o acreedor, refiriéndose a la calidad de propietario, locador, etc. Dentro de la segunda acepción de título de propiedad o título de crédito, refiriéndose al documento que prueba el dominio o la obligación, respectivamente (...).”

Por otro lado este mismo autor (p. 132) señala que respecto a la naturaleza jurídica “autores como GOLDSCHMIDT advierten en el título ejecutivo la prueba legal del crédito; el documento, por voluntad expresa de la ley y cuando reúne los requisitos legales necesarios, determina indefectiblemente el mandato de ejecución.

Otra teoría basada en el principio de que el titular del derecho de crédito lo sea realmente el acreedor según el documento, ve en el título ejecutivo un mandato, una orden de servicio para los órganos encargados de su ejecución.

Otra sería concepción del título ejecutivo es la que lo cataloga como portador de una sanción; esto es, el título tiene una eficacia constitutiva por cuanto es un acto jurídico generador de la acción ejecutiva eficaz contra el deudor, la cual exige y provoca la voluntad concreta del Estado de que se proceda a esa ejecución determinada.

Una quinta doctrina postulada por BINDER, atribuye al título ejecutivo únicamente la función de legitimación. El documento mismo es el que nos sirve para resolver la legitimación del ejecutante como la del ejecutado.

Concluyendo que la teoría más aceptada es la que rige en la doctrina de los títulos valores, teoría cuyo creador es LIEBMAN. Así podemos afirmar que el título ejecutivo es un documento sanción, que provoca la acción ejecutiva, casi siempre autónoma y abstracta, a la vez que legitima al ejecutado como al ejecutante.

MORENO CATENA (1986), señala que el título ejecutivo es el presupuesto básico para iniciar las actividades de ejecución forzosa. El título es un documento donde resulte determinada una obligación o un deber, cuyo cumplimiento puede exigirse de una persona (deudor o ejecutado), en favor de otra.

2.2.7. El Pagaré

URÍA (1997), afirma que es el título por el que una persona denominada firmante, se obliga a pagar a otra (tenedor) a su orden, una determinada cantidad en una fecha y lugar determinados. Es una promesa de pago hecha por el firmante del documento, que queda en virtud de ella directa y personalmente pagado.

Por otro lado, PÉREZ VÁSQUEZ (s.f, p.138), manifiesta que “El pagaré es un título de crédito formal y abstracto, que contiene una promesa incondicional, por virtud de la cual una persona se obliga a pagar una suma determinada de dinero.(...) Para todo título de crédito siempre va a existir una causa generadora, es decir, un motivo por el que se va a crear un documento con tales características, por ejemplo la celebración de un acto o un negocio jurídico, en el que las partes que intervienen establecen que para garantizar el cumplimiento de las obligaciones generadas de ese acto o negocio jurídico, se suscriba un pagaré, pero una vez generado dicho documento, éste tiene sus propias características sin que sea necesario mencionar en su texto la causa por la cual surgió; esta circunstancia es la que establece que el pagaré sea un documento abstracto, pues en su texto no aparece el motivo por el que se suscribió, y puede ser que después de haber entrado en circulación, su último tenedor desconozca la causa generadora, es decir, que el documento por sí solo tiene plena eficacia entre el titular y el deudor.

2.2.8. Liquidación de saldo deudor

El Estado peruano promueve el ahorro a través de un régimen de libre competencia y dicha promoción incluye también disposiciones que fomenten la protección al ahorrista, es por ello que la Ley General del Sistema Financiero y del Sistemas de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca

y Seguros-Ley N° 26702, en su artículo 132° regula las formas mediante las cuales se procura la atenuación del riesgo de los ahorristas, de este modo otorga mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldo deudor emitidas por las entidades del sistema financiero.

El VI PLENO CASATORIO CIVIL (2014) define al saldo deudor como “un documento consistente en un acto unilateral de liquidación del propio ejecutante, es decir lo que ha criterio del acreedor constituye lo que el deudor debería y que es una obligación líquida. El estado de cuenta de saldo deudor es un documento no sometido a formalidad preestablecida. El sexto Pleno concluye que la liquidación de saldo deudor constituye una operación aritmética de la que establece la situación del deudor respecto de las obligaciones que ha contraído, verificando el acreedor si la deuda esta impaga o cancelada, ya sea en forma total o parcial y se eseta ha generado los intereses respectivos.(...)”.

2.3. GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS. OSSORIO (s.f)

- **Acto unilateral:** Aquellos en que para surtir efecto jurídico basta la voluntad de una sola persona, tal como sucede con el testamento.
- **Acción cambiaria:** es la acción basada en títulos de crédito. Se trata de acciones que requieren de estos títulos para su existencia y ejercicio. Pueden ser directas, cuando se ejercitan contra el aceptante de una letra de cambio, contra los avalistas y contra los libradores de pagarés, o de regreso cuando se dirigen contra el librador de una letra de cambio, endosantes anteriores y avalistas de unos u otros.
- **Acción causal:** Es aquella basada en la relación causal vinculada con la creación y circulación de títulos de créditos.
- **Acreedor:** El que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación. Que tiene mérito para obtener alguna cosa.
- **Crédito:** Cambio de una prestación presente por una contraprestación futura; es decir, se trata de un cambio en el que una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio y el pago correspondiente más los intereses devengados los recibe más tarde.
- **Deudor:** Aquel que está obligado a dar, hacer o no hacer algo.
- **Destrucción del título valor:** Es la destrucción física del documento, que se puede deshacer, arruinar o dañar en forma grave.
- **Deterioro total del título valor:** Es el desgaste o disminución que tiene el documento que se produce por obra del uso continuo, accidentes, hechos involuntarios o por el paso del tiempo.
- **Ejecutante:** El acreedor que ejecuta a su deudor para lograr el pago de su crédito. En general quien ejecuta, hace o realiza. También es definido como el acreedor a cuya instancia se procede ejecutivamente contra su deudor moroso, para lograr expeditivamente el pago del crédito.
- **Entidad financiera:** Son aquellas pertenecientes al Sistema Financiero, sujetas al control de la Superintendencia de Banca y Seguros.
- **Extravío del título valor:** Es la pérdida del documento de libre disposición del tenedor por causas desconocidas y que sea materialmente inubicable.

- **Naturaleza jurídica:** Calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo. Así, por ejemplo, la naturaleza jurídica de la sociedad será la de un contrato plurilateral, desde la perspectiva de su constitución, y la de una persona jurídica, desde el ángulo de su existencia como organización.
- **Sistema financiero:** En general un sistema financiero está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan a la inversión, el ahorro tanto de nacionales como de extranjeros. En nuestro país es el conjunto de empresas, que debidamente autorizadas operan en la intermediación financiera.
- **Sustracción del título valor:** Es la pérdida del documento provocada por un tercero, ocurrida por hurto o robo.
- **Uso irregular:** Que no se ajusta a la ley, a las reglas o a lo que se espera normalmente.

2.4. MARCO REFERENCIAL

2.4.1. Título Ejecutivo

Según el DICCIONARIO DEL ESPAÑOL JURÍDICO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, “el título ejecutivo es el documento al que la ley expresamente otorga fuerza suficiente para obtener de los tribunales el cumplimiento de la obligación integrada en su contenido”.

Para CABANELLAS DE TORRES (2008) título ejecutivo es “(...) el que trae aparejada ejecución; o sea, aquel en virtud del cual cabe proceder sumariamente al embargo y venta de bienes del deudor moroso, con el fin de satisfacer el capital o principal debido, más los intereses y las costas”.

CANCINO VARGAS (2018) añade que Según la doctrina, “el título ejecutivo representa la norma jurídica concreta (acto) y está representado por el documento que lo materializa (documento). Se divide en: (i) judicial si se deriva de un pronunciamiento judicial -donde un juez conoció los hechos y condenó a alguna de las partes; y (ii) extrajudicial, donde la ley que atribuye eficacia ejecutiva al documento que lo representa”.

RIOJA BERMUDEZ (2014) citando a Ledesma sostiene: “El título ejecutivo, pues viene a constituir una declaración contenida en un documento. Por el cual una persona reconoce una obligación expresa, cierta y exigible que tiene que cumplir en beneficio de otra. En suma, es aquel documento que prueba la existencia de una relación jurídica a la cual la ley le confiere una calidad especial: crear certeza o convicción en el juzgador respecto a la veracidad de los hechos invocados por el accionante”.

Por otro lado, LEDESMA NARVÁEZ (2018) manifiesta que “para nuestro código procesal civil, el concepto de título ejecutivo es, indistintamente, un concepto de derecho material y un concepto de Derecho Procesal. Lo normal es que ambos conceptos coincidan y que el titular de un derecho tenga en su poder el documento que lo justifica”.

Considero que el título ejecutivo es un documento al que la ley le ha otorgado tal calidad, además contiene una obligación reconocida y exigible a su deudor. Este reconocimeinto puede haber emanado de un pronunciamiento judicial o bien puede ser creado contractualmente por las partes. A través del título ejecutivo se podrá promover un proceso único de ejecución, en el que se ejecutará la obligación con los bienes que posea el deudor.

2.4.1.1. Elementos y presupuestos del título para su ejecución

PALOMINO MONTESINOS (2016, p.93-94) infiere que el título ejecutivo debe contar con los siguientes elementos:

“El elemento formal: Este elemento está referido a que si o si debe ser un documento. Un documento es un objeto que represente un hecho. Así como no hay ejecución sin título, también podemos decir que no hay título ejecutivo sin ley que lo consagre. La Ley (y solo la Ley) es la que puede consagrar títulos ejecutivos, y cuando así lo hace, normalmente hace referencia a un determinado documento (como lo es en la presente investigación en la cual la ley general del sistema financiero otorga merito ejecutivo a la liquidación de saldo deudor). Así cuando señala que los títulos valores, el testimonio de escritura pública o las liquidaciones para cobranza emitidas por las AFP son títulos ejecutivos está haciendo referencia a un específico pre-establecidos por la ley. Incluso cuando la ley hace referencia a determinados actos, como las resoluciones judiciales o los laudos arbitrales. En ellos subyace, sin nombrarlo, el documento que los contiene (documento público, en el caso de resoluciones judiciales, documento privado en el caso de laudos arbitrales), y;

El elemento Sustancial: Si un documento es un objeto que representa un hecho, para que el documento señalado por la ley sea idóneo para constituir un título ejecutivo necesita que lo represente sea un acto (cualquiera o determinado por la propia Ley) que sea fuente generadora de una obligación: vale decir que el documento debe representar una relación obligatoria. Pero no basta, se requiere que los elementos de la relación obligatoria (tanto subjetivos como objetivos) sean ciertos y su objeto (la prestación debida sea expreso y exigible. Así lo establece el artículo 689 Código Procesal Civil.”

Por otra parte LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.49-56) conceptualiza los presupuestos que debe contemplar un título para la ejecución. Indica que tales presupuestos están referidos a las siguientes:

Prestaciones ciertas: las prestaciones son ciertas, cuando están perfectamente descritas en el título la existencia de un sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor) pero nada impide que uno y otro sujeto sea múltiple.

Prestaciones Expresas: son prestaciones expresas cuando constan por escrito aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. Consiste en una cosa o en un hecho que habrá que ejecutar el deudor, o en una abstención de algo que el deudor habría podido efectuar libremente de no mediar la existencia de la obligación que le exige un comportamiento negativo. En este sentido, apréciase lo regulado en el artículo 694° del código procesal civil que establece que se puede demandar ejecutivamente las siguientes obligaciones: de dar, de hacer o de no hacer. No se puede concebir la obligación sin objeto, pues no es posible estar obligado, en abstracto, sino que es necesario deber algo en concreto. La ausencia de objeto se traduce en la inexistencia de la obligación. La falta de objeto puede derivar en su indeterminación, en su imposibilidad y en su carencia de significación pecuniaria. En este último extremo es necesario precisar que el interés del acreedor no tiene necesariamente un contenido económico, en cambio el objeto de la prestación debe tener un contenido económico, porque de lo contrario sería imposible hacerla efectiva con el patrimonio del deudor, en caso que se resista a cumplirla.

Prestaciones exigibles: el título debe contener además prestaciones exigibles. Por exigibilidad se entiende aquella cualidad que permite que la obligación sea reclamable. La exigibilidad supone la llegada del vencimiento, si se trata de una obligación al término y la aparición de la condición, si se trata de obligación condicional.

Otro aspecto a considerar en la exigibilidad es verificar que el objeto de la prestación está determinado o sea determinable, que sea posible y que la prestación tenga un valor pecuniario. La

prestación es determinada cuando al tiempo de constituirse la obligación se conoce en su individualidad la cosa debida, o esta definido, en su sutancia y circunstancia, el hecho o la abstención que habrá de satisfacer el deudor. Es determinable la prestación cuando sin estar individualizado su objeto es factible de individualización ulterior.

En este último supuesto de prestaciones determinables se ubican las prestaciones liquidables y las ilíquidas que refiere el artículo 689° del Código Procesal Civil y la última parte del artículo parte del artículo 697° del Código Procesal Civil. Cuando la obligación es además de líquida, liquidable, esta se convierte en líquida mediante operación aritmética, mecanismo no aplicable a las prestaciones ilíquidas.

Respecto a la exigibilidad de la obligación, la corte suprema, ha señalado que “una obligación exigible es aquella respecto de la cual no hay plazo o condición que suspenda su cumplimiento, o habiéndolo: 1) el plazo ha vencido, ya sea por el transcurso del tiempo establecido por las partes o por la ley, porque el deudor ha renunciado anticipadamente al mismo o ha caducado su plazo por las causales señaladas en el artículo 181° del Código Civil, incluso porque las partes han conferido expresamente al acreedor la facultad de anticipar el vencimiento del crédito o porque el juez ha fijado judicialmente la duración del plazo; o 2) la condición suspensiva que afecta al cumplimiento de la obligación acaezca, según se trate de una condición positiva o negativa. (CAS N° 158-2014-Lima Norte).

Otro referente para la exigibilidad de la prestación es que el objeto sea posible, pues un objeto imposible equivalente a un equivalente a un objeto inexistente, de modo que no se puede imponer la obligación de hacer algo imposible. En la teoría concurren distintos criterios que sostienen que el objeto de la prestación para que sea exigible debe tener una apreciación pecuniaria. Si la prestación careciera de significación pecuniaria, el incumplimiento no redundaría en detrimento patrimonial del acreedor.

Retomando lo indicado por la profesora Ledezma, otro de los presuestos esta referido a los siguientes:

Prestación líquida, señala que la prestación liquidable es la que puede dilucidarse numéricamente mediante operación aritmética, método que no podría ser de aplicación para las prestaciones ilíquidas. Cuando el título es ilíquido, no puede proceder a la ejecución con una simple operación aritmética porque ella responde a razones muy distintas. En estos casos estamos ante las llamadas sentencias de condena genérica o de condena con reserva. Es bueno abordar la iliquidez del título, para reafirmar dos ideas centrales: 1) la sentencia de condena ilíquida carece completamente de eficacia hasta que se torne líquida, y 2) que la ejecución tiene que agotarse en declarativo posterior; en tanto no se agote con esta actividad no podremos afirmar que el título tiene los atributos para su ejecución y si por casualidad algún juez acogiere su ejecución, sencillamente la contradicción basada en la causal de la iliquidez del título terminará por poner fin a esta desafortunada e inoportuna ejecución, por el momento.

La existencia de una condena o prestación a satisfacer: todo título para que ingrese a la ejecución, debe encerrar una condena, una prestación a satisfacer. Los títulos que tienen prestaciones declarativas o meramente constitutivas no ingresan al proceso de ejecución, pues se agotan con la mera declaración de la jurisdicción, por lo tanto, el escenario en el que se desarrollará el proceso de ejecución será el que contenga un título de condena.

En caso de ejecución de resolución judicial debe tratarse de una consentida o ejecutoriada: otro aspecto que debe verificarse es que la resolución judicial se encuentre consentida o ejecutoriada. Opera la primera situación cuando las partes una vez notificadas, dejan transcurrir los plazos sin interponer recurso alguno; cuando, pese a la circunstancia de haberse interpuesto y concedido un recurso

se lo declara improcedente por no cumplir con la carga de expresar agravios o presentar la tasa judicial. Una sentencia se encuentra ejecutoriada cuando ha mediado confirmación, por el superior en grado, de un fallo condenatorio de primera instancia o cuando, siendo este infundado, es revocado en segunda instancia.”

2.4.1.2. Clasificación los títulos ejecutivos

En la doctrina, existen diversos criterios para clasificar a los títulos ejecutivos; en tal sentido, ALSINA (1962, p.41-42) afirma que “el título ejecutivo puede ser judicial o extrajudicial. Título ejecutivo judicial es el que resulta de una sentencia dictada en juicio contradictorio, que ha pasado en autoridad de cosa juzgada. El título extrajudicial puede ser convencional o administrativo; el primero resulta del reconocimiento hecho por el deudor en favor del acreedor de una obligación cierta y exigible, al que la ley le atribuye efectos análogos al de una sentencia. El título ejecutivo administrativo tiene su origen en un acto del poder administrador, y su ejecución se acuerda para el cobro de ciertos créditos por vía del apremio”.

Para AZULA CAMACHO (1994, p.21) “hay distintos criterios para clasificar el título ejecutivo. De una parte, el que podemos llamar de la *taxatividad*, según el cual tienen esa condición los expresamente indicados en la ley; de otra, el que se podría denominar *abstracto*, es decir, cuando la norma se limita a indicar los requisitos necesarios por lo cual sólo el documento que los cumple es idóneo para instaurar la ejecución; y, finalmente, el que conjuga los dos anteriores, esto es, que no solo reconoce como título ejecutivo al que observe las exigencias legales, sino también a los que expresamente les reconoce esa calidad, calificando por ello como *mixto*”.

ALVARADO VELLOSO & GARCIA (1980, citado por HINOSTROZA MINGUEZ (2017, p.82-83)) opinan de este modo: “Proponemos distinguir entre títulos ejecutorios y ejecutivos; y, a su turno, dentro de los últimos entre fehacientes y no fehacientes”. Llegando a las siguientes conclusiones: “El título (...) puede ser: a) un derecho instrumental/un derecho material judicialmente declarado; b) solo un derecho instrumental; y, c) solo un afirmado derecho material.

El primer supuesto implica que, a través de un proceso jurisdiccional, se haya declarado la existencia de un derecho material. En consecuencia, tal resolución (o arbitral, en su caso), posibilita acceder directamente a la ejecución. Siguiendo la terminología utilizada supra, estaríamos en presencia de un título ejecutorio (judicial). El segundo supuesto, lleva implícita una instrumentación extrajudicial de la deuda revestida de cierta legalidad o formalidad, que otorga al acreedor jurisdiccional limitado a la regularidad formal del título y a las causas extintivas de la obligación de la obligación. Estamos frente a un título ejecutivo (extrajudicial). Empero, se impone aquí hacer una importante distinción: el título que instrumenta la deuda puede ser “fehaciente” o “no fehaciente”. En ambos casos existe una instrumentación extrajudicial de la deuda, revestida de cierta formalidad; pero en el primer supuesto la fehaciencia está dada por la intervención de funcionario revestido de fe pública; en el segundo, tal requisito, obviamente no existe. El tercer supuesto, sólo justifica su fuerza por razones de política legislativa: otorgar el acceso del acreedor a la efectivización del crédito, de la manera más rápida y expeditiva (...).

Aquí estaríamos frente a títulos ejecutivos impropios, pues la fuerza ejecutiva otorgada por la ley no se vincula con la fehaciencia del instrumento que contiene la afirmación de la existencia de un derecho material. De aquí que parece claro que, para iniciar la ejecución es menester una cognición jurisdiccional plena (esto es, referida a examinar la existencia del derecho), si bien reducida en cuanto a términos por responder ello a intereses protegidos contingentemente por la política estatal.”

Por su parte, nuestra legislación⁷ ha preferido clasificar a los títulos ejecutivos en: a) Títulos ejecutivos de naturaleza judicial, y b) Títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial.

2.4.1.3. Títulos ejecutivos en nuestro ordenamiento procesal

CASASSA CASANOVA (2011, p. 22-25) manifiesta que “El Código de Enjuiciamientos civiles de 1852, en su artículo 1129° consideraba como documentos que aparejaban ejecución, la confesión del deudor prestada judicialmente por cantidad líquida, la confesión ficta; el juramento decisorio sobre cantidad líquida; los instrumentos públicos que contengan obligación cierta de deuda, otorgada por persona capaz; los testamentos o codicilos en que el testador confiesa deber; los legados consistentes en dinero; el saldo de cuentas aprobadas judicialmente; el saldo de cuentas aprobadas extrajudicialmente; y los vales, pagarés y demás instrumentos que contengan obligación de deber, cuando estén reconocidos judicialmente por la parte, o declarados reconocidos conforme a este Código.

La ejecución de sentencia, se encontraba regulada en el artículo 1197°, bajo el nombre de juicios coactivos de apremio y pago, y en donde se encontraban como títulos a las sentencias – entiéndase condenatorias – y los laudos arbitrales.

Luego, con la entrada en vigencia del Código de Procedimientos de 1912 se consideraron como títulos que aparejaban ejecución a los siguientes:

- La confesión judicial, la que podía ser expresa o ficta.
- Los instrumentos públicos.
- Los instrumentos privados cuando estén judicialmente reconocidos o mandados tener por reconocidos.
- Las letras de cambio, pagarés y valores a la orden y los cheques debidamente protestados con arreglo a la ley o con la constancia de su rechazo, hecho por el banco girado de conformidad con la ley de la materia.
- Los títulos al portador o nominativos emitidos por bancos Sociedades Anónimas o entidades autorizadas que representen obligaciones vencidas, cupones vencidos de dichos títulos, contra la institución o compañía emisora, si se protestan por falta de pago.
- Los conocimientos de embarque, contra el capitán o el representante legal de la nave o aeronave, y contra los endosantes, si están extendidos a la orden, para la entrega de las mercancías o su valor, y contra el consignatario o destinatario, para el pago de los fletes, previo el respectivo protesto.
- Las cartas de porte, si son protestadas.
- Las pólizas de seguro de vida, vigentes, por causa de fallecimiento del asegurado, acompañadas de la partida de defunción.
- La copia certificada notarial del acta de la Junta de Propietarios de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, en la que consten los gastos de mantenimiento y conservación acordados,

⁷ Esta clasificación se extrae de la literalidad del artículo 688° del Código Procesal Civil, que estipula: “sólo se puede promover ejecución en virtud de **títulos ejecutivos de naturaleza judicial** o **extrajudicial** según sea el caso (...)”

con indicación de las porciones que corresponden a cada uno de los propietarios acompañada de los recibos impagos y de la constancia del requerimiento notarial al obligado para dicho pago.

- Cualquier otro título al que la ley le da fuerza ejecutiva.

La ejecución de sentencia se regulaba en los artículos 1145° al 1154°. Un tema para resaltar es el referido en el – entonces – artículo 1154°, ya que el mismo impedía al ejecutado a entorpecer la ejecución con recurso alguno.

Nuestro Código Procesal Civil en 1993 clasificaba los títulos en: 1) ejecutivos y 2) de ejecución.

Posteriormente y a raíz de las modificaciones incorporadas por el Decreto Legislativo No. 1069, se modificó el artículo 688 del Código Procesal Civil, de la siguiente manera “Solo se puede promover ejecución en virtud de títulos ejecutivos de naturaleza judicial o extrajudicial según sea el caso...”.

Y, en este pseudo proceso único de ejecución, se procedió a consolidar en un solo artículo, los derogados 693 y 713, quedando de la siguiente manera:

“Art. 688 del CPC:(...)Son títulos ejecutivos los siguientes:

- Las resoluciones judiciales firmes;
- Los laudos arbitrales firmes;
- Las actas de conciliación de acuerdo a ley;
- Los títulos valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la constancia de la formalidad sustitutoria del protesto respectiva; o , en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto en la ley de la materia;
- La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores representados por anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria, conforme a lo previsto en la ley de la materia;
- La prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido;
- La copia certificada de la prueba anticipada que contiene una absolución de posiciones , expresa o ficta;
- El documento privado que contenga transacción extrajudicial
- El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual;
- El testimonio de escritura pública;
- Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo.”

2.4.1.4. Títulos ejecutivos en el código procesal vigente

Según el artículo 688° del código procesal civil los títulos ejecutivos se dividen en:

A. Títulos ejecutivos de naturaleza judicial

Para DE LA OLIVA SANTOS (2002, p.38) resulta razonable que la ejecución forzosa se plantee, en primer lugar, respecto de las sentencias o resoluciones judiciales parejas, susceptibles de ser ejecutada. Independientemente de ello, hay que detallar que no sólo se trata de resoluciones judiciales firmes aquellas que se constituirán como títulos ejecutivos de naturaleza judicial, sino aquellos actos que han sido equiparados a ellas.

Entre las que el Código Procesal Civil ha enumerado tenemos:

- **Las resoluciones judiciales firmes** (inc. 1 del art. 688° CPC).

PALOMINO MONTESINOS (2016, p.56) indica que “La norma al referirse sobre las resoluciones judiciales firmes, se debe entender aquellas decisiones que sean susceptibles de ejecución. En sentido estricto, podemos calificar como tal a las sentencias de condena, es decir, aquellas que imponen el cumplimiento de una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Las sentencias declarativas no contienen dicha exigencia y si bien disponen la inscripción registral del mandato, solo tienen por objeto extender a los terceros la eficacia de lo declarado por tales sentencias, las que son ajenas al concepto de ejecución forzada.”

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.19) señala que “el inciso 1 del artículo 688° del CPC al referirse a las resoluciones judiciales firmes” alberga no solo a las sentencias sino también a los autos que no tengan esa condición pero que alberguen una condena para su ejecución. Se debe precisar que tanto la transacción judicial y la conciliación judicial una vez homologadas son equiparables a la sentencia definitiva y tienen la calidad de cosa juzgada. Véase al respecto lo normado en los artículos 337 y 328 del CPC. Ello justifica que cuando se conviene que una o ambas partes cumplan con determinada prestación, se apliquen, frente al eventual incumplimiento, las normas que gobiernan el proceso de ejecución. Además, el efecto de la cosa juzgada es tal que solo se podría enervar dichos efectos por actividad fraudulenta en la forma que señala el artículo 178 del CPC.

- **Laudos arbitrales**

El laudo arbitral es el resultado de un arbitraje, es por ello que para un mayor entendimiento del tema será necesario, definir que es el arbitraje.

Para MERINO MERCHAN & CHILLON MEDINA, (2006, p.214) el arbitraje “es aquella institución jurídica por la que dos o más personas establecen que una cierta controversia específicamente determinada o por determinar, existente o futura entre ellas, sea resuelta, conforme a un procedimiento legalmente establecido, por tercero o terceros, a los que se designan voluntariamente y a cuya decisión expresamente se someten, ya sea ésta dictada conforme a Derecho, ya conforme a equidad, y a la que el ordenamiento le otorga el carácter de título decisorio y ejecutivo”.

Por otro lado, LEDESMA NARVAEZ, (2009, p.32) manifiesta que “el arbitraje es una institución de naturaleza jurisdiccional por los efectos que la ley otorga al laudo arbitral, esto es la cosa juzgada”.

Del arbitraje se obtiene el laudo arbitral, el que ha sido equiparado a una sentencia firme, que contiene una decisión definitiva y por ello tendrá que hacerse cumplir.

CASASSA CASANOVA, (2011, p.34) añade que “El Laudo arbitral ha sido revestido de eficacia ejecutiva, tanto por lo dispuesto por el artículo 688 inciso 2 del Código Procesal Civil, como por lo dispuesto por los artículos 58, 67 y 68 de la Ley de Arbitraje”.

Desarrollando el tema PALOMINO MONTESINOS, (2016, p. 56-57) precisa que los laudos arbitrales firmes también constituyen títulos de ejecución porque los árbitros, sean de derecho o de equidad, no cuentan con imperium para ordenar la ejecución del laudo que emitan, pues ello solo es monopolio de la actividad jurisdiccional. Cuando se recurra a la jurisdicción para la ejecución del laudo arbitral, concurren dos supuestos. El primero, que se haya otorgado facultades de ejecución a los árbitros, según el artículo 67° de la Ley Arbitral (D. Leg. N° 1071); y, el segundo, que no tenga facultades de ejecución. En este último caso, el procedimiento a seguir será el que rige en el artículo 690° del CPC. Señala, que en el primer supuesto serán los propios árbitros los que buscarán en la actividad jurisdiccional el apoyo para la “ejecución forzada” del laudo, no para iniciar un proceso de ejecución, sino para requerir de la jurisdicción la vía compulsiva, como parte de sus atributos exclusivos de ella, a fin de satisfacer de manera forzada el declarado el derecho declarado en el laudo.

Como señala CHOCRON GIRALDEZ (2000, p.117), “las relaciones entre la jurisdicción y el arbitraje, son de carácter complementario, se produce en aquellas parcelas en las que se requiere imperium o potestas de la que carecen los árbitros a los cuales se les atribuye el poder de disposición de los derechos subjetivos privados en virtud de la autonomía de la voluntad; pero la coacción, la fuerza o imposición que implica determinadas actividades escapan a la autoautoridad de los árbitros y es por ello que se produce que se produce la intervención de los tribunales del estado”.

Para LEDESMA NARVÁEZ, (2018, p.28-29) “los laudos arbitrales tienen la característica de incidir en el ámbito declarativo de los derechos, mas nunca ejecutivo. Ello explica porque si una parte decide no cumplir decide no cumplir con un laudo o con lo pactado en un procedimiento conciliatorio, la única salida que tiene el sujeto afectado con dicho incumplimiento es la vía judicial.

Esta misma autora indica que el elemento que imprime la certeza suficiente para iniciar un proceso de ejecución es el título, el cual puede ser una resolución judicial de condena o un acto negociado administrativo que acredite la existencia de un derecho cierto, expreso y exigible. Esto es, que los títulos de ejecución son aquellos que contienen actos constitutivos de prestaciones no solo declaradas por el órgano jurisdiccional sino que también puede tener su origen en la voluntad de las partes involucradas en el conflicto, cuyo efecto será de vinculación de “vinculación formal” entre los partícipes de la controversia. El aspecto formal de este título generado por el ejercicio de la autonomía privada de las partes se va a expresar en las actas de conciliación de acuerdo a ley como lo señala el inciso 3 del artículo en comentario.

Cabe señalar, que si bien en los procesos de ejecución de laudo arbitral, a priori no es posible hacer valer ningún recurso impugnatorio o de nulidad; sin embargo, desestimarlos importaría colocar en estado de indefensión al justiciable, vulnerando de manera flagrante su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva”.

- **El acta conciliaria**

LEDESMA NARVÁEZ, (2018, p.29) define al acta conciliatoria como “el documento que contiene la manifestación de voluntad de las partes. Su validez está condicionada a la observancia de las formalidades establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 26872, modificado por el D. Leg. N° 1070, bajo sanción de nulidad. Hay que precisar que la ley no otorga a los acuerdos de conciliación extraproceso el efecto de la cosa juzgada, como si lo hace a la conciliación intraproceso en mérito al artículo 328 del CPC. En este caso se produce la homologación de acuerdos conciliatorios a través de la

procelización, homologación que encierra el control de la jurisdicción sobre la autonomía privada de la voluntad de las partes. Recién a partir de la satisfacción del control, podemos atribuir al acuerdo los efectos de la cosa juzgada, situación que no se da en los conciliatorios extraproceso.

Como supuestos de validez se debe verificar en el control que el acuerdo no vulnere la ley, el orden público y las buenas costumbres; supuestos que impiden que las partes puedan transitar por los derechos indisponibles, como también hace referencia el artículo V del TP del código civil.

Para la eficacia del acuerdo se debe precisar si a esta contiene prestaciones ciertas, expresas y exigibles.

Bajo este contexto diremos que los acuerdos conciliatorios extrajudiciales que provienen de los centros privados de conciliación se ejecutan como sentencias pero no son títulos homologados, esto es, su grado de eficacia, en cuanto a la inmutabilidad, no se equipara a los que hubieran sido sometidos al control homologatorio, bajo declaración de la jurisdicción”.

B. Títulos de naturaleza extrajudicial

Los títulos ejecutivos de naturaleza extrajudicial son aquellos que no provienen de un proceso judicial, sino por el contrario, son resultado de que la ley los ha revisto de la condición de títulos ejecutivos. Estos provienen de la voluntad de ambas partes como los títulos valores; de la voluntad unilateral de una de las partes, como sucede con la liquidación de saldo deudor o con los recibos que provienen del contrato de arrendamiento; o también pueden provenir de sede administrativa. En este rubro se encuentran los siguientes:

- **Títulos valores**

Para LEDESMA NARVÁEZ, (2018, p.31) “los títulos ejecutivos contienen requisitos de índole sustancial y formal. El título en sentido formal es el documento que contiene al acto. Este documento se cuestiona de nulo cuando no acoge la forma señalada por ley.

Como se aprecia, el inciso 4 califica de título ejecutivo al título valor, entendido esto como valores materializados que representen o incorporen derechos patrimoniales, destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos formales esenciales, que por imperio de la ley le correspondan según su naturaleza. Como se aprecia de la redacción de este inciso, se confiere acción cambiaria a los títulos debidamente protestados o con la constancia de formalidad sustitutoria del protesto respectivo; o en su caso, con prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto por la ley de la materia.

Añade al respecto PALOMINO MONTESINOS, (2016, p. 64-65) “que lo relativo a los requisitos exigibles para ejercitar las acciones cambiarias se encuentra normado, principalmente, en el artículo 91° de la ley N° 27287, numeral que preceptúa lo siguiente: Artículo 91°.- Requisitos para ejercitar las acciones cambiarias.

91.1 Salvo disposición distinta de la presente ley N° 27287 para ejercitar las acciones cambiarias señaladas en el artículo 90° de la ley 27287, cuales son la acción directa, la acción de regreso y la acción de ulterior regreso constituye requisito obligatorio:

- a) En los títulos valores sujetos a protesto, haberse verificado el mismo;
- b) En los títulos valores que sean objeto de formalidad que sustituya al protesto, haber logrado la constancia de la falta de cumplimiento de la obligación conforme al artículo 82° de la ley

N° 27287, que trata sobre el protesto de títulos valores pagaderos con cargo en cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero nacional; o, de ser el caso, el protesto conforme a los artículos 73° de la ley 27827, que versa sobre el lugar del protesto y 83° de la ley 27827, según el cual las disposiciones del título segundo de la sección sexta del libro primero de dicha ley, referidas a las formalidades sustitutorias del protesto, no impiden que el tenedor opte bajo su costo por el protesto;

- c) En los títulos valores no sujetos a protesto, la tenencia del título cuyo plazo esté vencido o resulte exigible la obligación según texto del documento o, en su caso, de la constancia de la que trata el último párrafo del artículo 18° de la ley 27827, cual es la constancia de inscripción y titularidad que expide la respectiva institución de compensación y liquidación de valores en el caso de valores con representación por anotación en cuenta. Además en estos casos se requiere haber cursado información a la cámara de comercio respectiva del incumplimiento, salvo que ello se cumpla conforme al último párrafo del artículo 87° de la ley 27827, con arreglo al cual, en caso de no acompañarse a la demanda respectiva la indicada comunicación del incumplimiento a la cámara de comercio, el juez o tribunal arbitral ordenará que se curse copia de la demanda a la cámara de comercio provincial que corresponda.

91.2. La falta de los requisitos señalados en los incisos a) y b) anteriores podrá subsanarse si dentro de los plazos de prescripción de la respectiva acción cambiaria señalados en los artículos 96° de la ley N° 27287, tenedor logra obtener, en forma expresa o ficta, el reconocimiento judicial en su contenido y firma del título valor, por parte del o de los obligados respecto a quienes se ejercite la correspondiente acción cambiaria.

91.3. En los títulos valores a los que se refiere el inciso a) que lleven la cláusula de que trata el artículo 52° de la ley 27287, esto es, la cláusula “sin protesto”, se ejercitara la acción cambiaria por el solo mérito de la cláusula “sin protesto” y cumplir lo señalado en el inciso c) anterior.

- **La constancia de inscripción y titularidad expedida por la institución de compensación y liquidación de valores**

LEDESMA (2008, p.365) manifiesta que las anotaciones en cuenta son una vieja práctica bancaria que consiste en inmovilizar los títulos con soporte de papel, físicamente. Las transferencias se hacen con la simple anotación en un libro de Registros de Depósitos del Banco. No hay manipulación material de los títulos. Para prever la transferencia entre banco y banco, se reguló la centralización de los depósitos en bancos colectores (depósito en segundo grado) Aquí los bancos perdían la posesión mediata de la cartera de depósitos y pasaban a los bancos colectores. Hoy esa función es realizada por la institución de Compensación Liquidación en Valores, CAVALI, que es una sociedad anónima que tiene por objeto exclusive el registro, custodia, compensación, liquidación y transferencia de valores. Continúa LEDESMA, citando a MENDOZA LUNA (2001), quien señala que “esta anotación en cuenta es previa a la desmaterialización, la cual involucra la supresión total de todo certificado (título físico) y no involucra su inmovilización sino su reemplazo por un documento electrónico”.

- **La prueba anticipada**

PICHÓN DE LA CRUZ (2013) define a la prueba anticipada como “el reconocimiento de cualquier medio de prueba, en un momento anterior al proceso, cuando exista temor que se pierda, haciendo imposible su aportación al proceso. Se trata no de asegurar la fuente de la prueba, sino de practicar el medio de prueba dentro de la legalidad, pertinencia y utilidad”.

Para PALACIO (1994, p. 11) “ Las diligencias preparatorias tienen por objeto asegurar a las partes la idoneidad y precisión de sus alegaciones, permitiéndoles el acceso a elementos de juicio susceptibles de delimitar con la mayor exactitud posible los elementos de su futura pretensión u oposición, o la obtención de medidas que faciliten los procedimientos ulteriores. En cambio, la diligencia conservatoria de prueba o prueba anticipada, tiene por objeto la producción anticipada de ciertas medidas probatorias frente al riesgo que resulte imposible o sumamente dificultoso hacerlo durante el periodo procesal correspondiente.

Entendida así la prueba anticipada, nuestro código procesal civil, lo ha revisto de la calidad de título ejecutivo, regulándolos en el inciso 6 y 7 del artículo 688 del CPC.

En ese mismo sentido LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.34), manifiesta que la prueba anticipada constituye un procedimiento orientado a facilitar la vida del proceso principal que se agrupa en dos categorías diligencias preparatorias y diligencias conservatorias de prueba, en atención a la finalidad que se persigue.

Nuestro código civil las acoge a ambas (diligencias preparatorias y prueba anticipada) bajo la nomenclatura de esta última, sin embargo, la inspección judicial, los testigos y pericia pueden ser considerados como prueba anticipada, situación que no puede ser extensiva para el reconocimiento ni para la absolución de posiciones, por estar diseñadas como diligencias preparatorias. Cuando se acude a una tramitación especial para proporcionar al sujeto el título, se autoriza a seguir la tramitación que nuestra legislación erróneamente lo califica como prueba anticipada, cuando debe ser catalogada como diligencia preparatoria. Estas diligencias son entendidas como un proceso de creación de creación de títulos sumarios. Ella se limita a exigir un pronunciamiento judicial y la citación de la persona a quien se vaya a perjudicar o de su causante.

Por otro lado, el proceso de creación en la absolución de posiciones como título sumario comienza cuando para preparar la ejecución se pide que el deudor confiese bajo juramento la certeza de la deuda. Las diligencias preparatorias son extendidas como un proceso de creación de títulos sumarios. Ella se limita a exigir un pronunciamiento judicial y la citación de la persona a deba de perjudicar o de su causante. El reconocimiento y la absolución de posiciones son expresión de este tipo de diligencias que luego van a generar los títulos ejecutivos a que hacen referencia los incisos 6 y 7 del artículo 688 del CPC.

En este tipo de actuaciones judiciales, más que crear títulos se busca el reconocimiento de este, porque el título en principio existe y lo único que se hace es integrarlo o complementarlo con actividades especiales de las que depende su fuerza ejecutiva. El documento solo tiene fuerza ejecutiva si ha sido reconocido; por consiguiente, hace falta una diligencia preparatoria, con el objeto de lograr la fuerza ejecutiva si ha sido reconocido; por consiguiente, hace falta una diligencia preparatoria, con el objeto de lograr la fuerza ejecutiva de tal documento privado.

Ahora bien, no es suficiente que exista el reconocimiento expreso en prueba anticipada para que constituya título ejecutivo. Es necesario que este reconocimiento contenga los presupuestos que describe el artículo 689 del CPC, esto es, que no solo sea cierta y expresa la prestación sino exigible; en caso contrario resulta procedente denegar la ejecución en el procedimiento ejecutivo, por ser inútil el título generado en prueba anticipada.

Finalmente, debe decirse que las partes legitimadas ordinariamente para la ejecución son aquellos sujetos que como tales aparecen en el título. Quien aparezca en el título como acreedor, titular del derecho será indiscutible el ejecutante; y quien aparezca como deudor, será el obligado a satisfacer la prestación frente a quien la ejecución se despacha; sin embargo, puede concurrir el caso de la legitimación

extraordinaria, ya que no siempre resulta ser ejecutante y ejecutado, ni ostenta esta posición, las personas que así figuren en el título, sino que pueden entrar otros sujetos en cualquiera de las dos posiciones, pudiéndose hablar entonces de una legitimación extraordinaria.

- **La transacción extrajudicial**

Según PÉREZ SOLF (s.f, p.4-5), es aquella que se realiza sin mediar proceso, ello se traduce en que se origina antes del litigio judicial o fuera de este, precisamente, su importancia radica en evitar el pleito a promoverse o solucionarse fuera del Orgaz jurisdiccional. La transacción que se de en el pleito no constituye una transacción extrajudicial, pues la litis ya ha sido trabada, configurando una transacción judicial, caso distinto es cuando las partes abandonan el proceso y transan fuera del él, el eje central para determinar si una transacción es judicial o extrajudicial radica en determinar cuál de ellas contiene un acto jurisdiccional.

El tribunal constitucional señala que “las transacciones extrajudiciales se encuentran basadas en el principio de buena fe y suponen un acuerdo de voluntad donde cada una de las partes pretende extinguir un conflicto de intereses. Teniendo en cuenta la citada finalidad, debe enfatizarse que para que pueda considerarse como legitimamente extinguido un conflicto de intereses, el acuerdo de transacción (extrajudicial) debe de cumplir con un conjunto de requisitos a efectos de evitar perjuicios de alguna de las partes, pues no debe de buscarse el beneficio de una de ellas en perjuicio de la otra, lo que no necesariamente implicará la suscripción de acuerdos equivalentes pero sí establecer acuerdos proporcionales y razonables⁸”.

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.39-40) señala que “el inciso 8 del artículo 688 del CPC hace referencia al documento privado que contenga transacción extrajudicial. La transacción siempre contiene pretensiones patrimoniales y exige reciprocidad en ellas. Conforme lo señala el artículo 1302 del código civil, “por la transacción civil las partes haciéndose concesiones recíprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podría promoverse”.

Es necesario precisar que si bien se exige reciprocidad, no es necesario que los sacrificios sean de igual valor. La reciprocidad entendida esta como el intercambio de sacrificios es importantísima para su existencia de concesiones recíprocas. A pesar de que el artículo 1302 del CC señale que la transacción tiene valor de cosa juzgada, debe entenderse que este efecto se limita a la transacción judicial y no a la transacción en general, que acoge una ficción legal; por ello resulta coherente la redacción del artículo 1312 del CC cuando sostiene que la transacción extrajudicial se ejecuta en la vía ejecutiva y la judicial de la misma manera que la sentencia. En este sentido, si ante un accidente de tránsito, la víctima transa sobre el monto de la reparación y posteriormente al acuerdo le sobreviene una incapacidad permanente generada por dicho accidente es válido invocar la nulidad de la transacción por error en la sustancia. No cabe oponer la excepción de cosa juzgada a una transacción extrajudicial no controlada por la jurisdicción.

- **El documento impago de renta por arrendamiento**

CASASSA CASANOVA, analizando el origen de este título menciona que “Este original documento fue incorporado en nuestra Legislación como título ejecutivo en virtud al artículo 11° del Decreto Ley 20236⁹. Una vez incorporado a nuestra legislación como título ejecutivo, éste constituía una “insólita” excepción al principio nulla executio sine titulo, por cuanto constituía título ejecutivo el recibo

⁸ STC N° 01722-2011-PA/TC

⁹ Artículo 11 del Decreto Ley 20236: “la acción de pago de arrendamiento de bienes inmuebles es ejecuta, sea cual fuere la forma en que se hubiere celebrado la locación, si el demandante afirma que el arrendatario ocupa actualmente el bien”.

impago y la sola afirmación por parte del ejecutante que el arrendatario – llámese ejecutado - venía ocupando el bien permitían, dando así inicio al proceso ejecutivo.

Cuando se publicó el proyecto del Código Procesal Civil en 1992, originalmente en su artículo 693° no fue incluido, sino que fue incorporado a raíz del Decreto Ley No. 25940 con el siguiente texto: “ Instrumento impago de renta de arrendamiento, siempre que el arrendatario se encuentre en uso del bien” Posteriormente dicho artículo fue modificado con fecha 16 de diciembre del 2003 por la Ley No. 28135 y en donde el texto del mismo quedó como sigue: “El documento impago de renta por arrendamiento, siempre que se acredite instrumentalmente la relación contractual”.

PALOMINO MONTESINOS, (2016, p.70) indica que “Cabe señalar que el documento indicado en el señalado inciso constituirá título ejecutivo siempre y cuando se demuestre, además, y mediante prueba documental (contrato de arrendamiento), la correspondiente relación contractual, siendo irrelevante el hecho de que el arrendamiento se encuentre o no poseyendo el bien objeto de arrendamiento”.

- **El testimonio por escritura pública**

Según refiere CASASSA CASANOVA, (2011,p.45) “La escritura pública es un título ejecutivo en tanto que el acto contenido en él contenga una obligación cierta, expresa y exigible. La Ley le confiere mérito ejecutivo atendiendo aquella presunción de certeza que los documentos escriturados contienen en mérito a la intervención notarial. Ratificando lo antes expuesto, veamos que el artículo 83 del Decreto Legislativo No. 1049 establece que: “El testimonio contiene la transcripción íntegra del instrumento público notarial con la fe que da el notario de su identidad con la matriz, la indicación de su fecha y foja donde corre, la constancia de encontrarse suscrito por los otorgantes y autorizado por él, rubricado en cada una de sus fojas y expedido con su sello y firma, con la mención de la fecha en que lo expide”.

Para LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 41-42) “el inciso 10° del artículo 688° del CPC considera al testimonio por escritura pública como título ejecutivo. En atención a la persona que suscribe el testimonio, como lo es el notario público, conlleva a que sea calificado como documento público, generando la presunción de certeza sobre su contenido, salvo prueba en contrario. Tengase en cuenta que el notario es un profesional del derecho autorizado por ley para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebran, para la cual formaliza la voluntad de los otorgantes, redactando los instrumentos, a los que confiere autenticidad. Ello no exime que el acto jurídico, a pesar de estar contenido en escritura pública, si carece de los presupuestos que describe el artículo 689° del CPC, sea considerado título de ejecución. Necesariamente el acto jurídico contenido en el testimonio de escritura pública tiene que tener las cualidades de la ejecución: contener derechos ciertos, expresos y exigibles”.

- **El mérito ejecutivo otorgado por la ley**

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 42-43) menciona que “el mérito ejecutivo de los títulos también puede ser otorgado por leyes especiales, como refiere el inciso 11° del artículo 688° del CPC. Un ejemplo de ello es la facturas conformadas, reguladas en la ley N° 28203. Este título al igual que la letra de cambio y pagaré representan una obligación pecuniaria, la obligación debe responder a una transferencia de bienes muebles o a una prestación de servicios”.

Otro de los casos en donde la ley confiere mérito ejecutivo, es en las liquidaciones de saldo deudores que emitan las empresas del sistema financiero. Por otro lado, ley otorga mérito ejecutivo al arrendamiento financiero regulado en el Decreto Legislativo N° 299.

Otra referencia a considerar título de ejecución, cuya fuente de regulación proviene de sede administrativa son las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas a favor del consumidor, una vez que queden consentidas o causen estado en la vía administrativa tal como señala el artículo 14° del D. Leg. N° 1033.

PALOMINO MONTESINOS (2016, p.71) indican “que constituyen títulos ejecutivos las liquidaciones de saldos deudores emitidas por las empresas del sistema financiero (art.132°, inc. 7°) de la Ley 26072, las pólizas de seguro (art. 330° de la ley 27702), los instrumentos impagos por la cobranza de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias para el pago de servicios comunes de las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y propiedad común (art. 50° de la ley 27157 y art. 157° del Decreto Supremo N° 035-2006-VIVIENDA), la transacción judicial debidamente aprobada, que tiene la categoría de una sentencia con calidad de cosa juzgada y que se ejecuta como esta (art. 337° del CPC y art. 132° del CC), etc.”.

2.4.2. El contrato de préstamo personal

2.4.2.1. El contrato de mutuo

MURO ROJO, (2016) señala que “El mutuo es un contrato de crédito; una de las especies dentro del amplio género de este tipo de contratos. Su utilidad es el financiamiento; la provisión de fondos económicos en favor de quien los requiera, con la obligación de restituirlos en un plazo convenido (o en defecto de este en el plazo legal) y generalmente adicionando el pago de intereses, dado que actualmente es un contrato oneroso”.

CAMACHO.Walter & CASTRO TRIGOSO (2010, p. 443) afirman, por tanto, que desde el punto de vista económico, el crédito es entendido como la utilización de fondos de otra persona a cambio de la promesa de devolverlos en fecha posterior. En realidad, la razón de ser del crédito son precisamente los intereses, es decir por el uso del dinero prestado, el beneficio económico del prestamista. Sin esta ventaja, el crédito, tal como lo conocemos actualmente, no existiría.

Para CUADROS VILLENA, (1997, p. 249) el contrato del mutuo es “el contrato por el cual una persona denominada mutuante o prestamista entrega a otra denominado mutuuario o prestatario la propiedad de cosas consumibles o una cantidad de dinero, con la obligación de devolver otra igual en cantidad, especie y calidad. Al mutuo se le llama también contrato de préstamo o préstamo de consumo. El mutuuario que recibe las cosas o el dinero puede darles el destino que quiera. Le es transmitida la propiedad de las cosas o el dinero, durante el plazo del contrato. Entonces resulta propietario de las cosas mutuadas o del dinero mutuado.”

Para cabanellas define al mutuo como “contrato real en el que una de las partes, el mutuante o prestamista transmite a la otra, el mutuuario o prestatario, la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles con la obligación de devolver igual cantidad, especie, y calidad, con abono de intereses solo si se ha pactado.

Ludwing ennecerus dice el mutuo es la transmisión de cosas fungibles o del valor de tales cosas al patrimonio del mutuuario con la estipulación de devolución de la misma cantidad de cosas de igual especie y calidad.

CUADROS VILLENA manifiesta además que nuestro código civil de 1984 de acuerdo a su tendencia define no el contrato de mutuo, sino a la fuente de obligaciones, por lo que esta en desacuerdo con la definición que ofrece el artículo 1648 del CC, ya que el mutuo no es solamente la obligación de entregar, es la entrega misma de las cosas o del dinero objeto del contrato.

Como se menciona precedentemente, el contrato de mutuo se encuentra regulado en el artículo 1648 del código civil, el cual define al contrato de mutuo de la siguiente manera: por el mutuo, el mutuante se obliga a entregar al mutuuario una determinada cantidad de dinero o de bienes consumibles, a cambio de que se le devuelvan otros de la misma especie, calidad o cantidad. De la definición ofrecida se desprenden algunas características esenciales para entender su naturaleza jurídica, estas están referidas a que, el contrato de mutuo es consensual, es decir que son aquellos contratos que se perfeccionan con el consentimiento o solo acuerdo de voluntades; también, el mutuo es un contrato oneroso, ya que el mutuuario está obligado a pagar intereses (los pactados o en defecto los legales), al mutuante, salvo convenio expreso en contrario. Únicamente será gratuito cuando las partes así lo establecen de manera expresa.

A. Naturaleza jurídica

Continúa CUADROS VILLENA (p.251) desarrollando el contrato de mutuo y menciona que “en el mutuo se acrecienta el patrimonio del deudor, mientras que disminuye el patrimonio del prestamista. La incorporación de las cosas o del dinero prestado al patrimonio del deudor, significa que es propietario de los bienes objeto de mutuo y será su propietario hasta el momento de la devolución. Esta es la interpretación académica, pero no será la interpretación real, por que el deudor no se sentirá jamás dueño de la cosa prestada y mucho más si ha dado una garantía real siempre tendrá el recuerdo de la obligación de devolver.

2.4.2.2. La contratación masiva

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ (2014) señala que “hoy en día la contratación masiva, se rige a las necesidades del tráfico comercial económico, vale decir, que la producción en serie o en masa de bienes y servicios, se viabiliza a través de un instrumento jurídico que permita la celebración inmediata de numerosos contratos, los denominados contratos “masivos” (que vinculan a proveedores y consumidores) que son necesarios e indispensables en las sociedades modernas por cuanto reducen los costos de transacción, es decir, reducen tiempo, dinero y esfuerzo, que genera la contratación”.

Para DE LA PUENTE Y LAVALLE (1993), “la contratación masiva es un fenómeno jurídico que se ha constituido en un nuevo sistema de contratación privada y que ha surgido ante la necesidad de agilizar el intercambio masivo de bienes y servicios a un menor costo contractual, para lo cual, la etapa de la negociación ha quedado reducida o en la gran mayoría de casos, suprimida.”

JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA (2001), “la contratación masiva no es un nuevo contrato típico o atípico; es un fenómeno jurídico que se ha constituido en un nuevo sistema de contratación privada y que ha surgido ante la necesidad urgente de viabilizar y agilizar el intercambio masivo de bienes y servicios a un menor costo, para lo cual, la etapa de la negociación o tratativas previas del iter contractual ha sido reducida o en muchos casos eliminada. Tampoco son contratos con las masas humanas, sino contratos de un mismo tipo contractual celebrados en serie con cada una de las personas que desean adquirir un bien o servicio. En este sistema contractual se utiliza cuantitativamente, un contrato típico o atípico, como puede ser una compraventa, un arrendamiento, un mutuo, etc. No se sabe con exactitud cuándo surgió la contratación masiva. Para algunos pensadores como ALVIN TOFFLER, las categorías de productores y consumidores surgieron con el nacimiento de la sociedad industrial”.

Respecto a la evolución de la contratación masiva REZZONICO (1987) manifiesta que SALEILLES (1929) en su obra publicada en París en 1902 y destinada al estudio de los numerales 116 a 144 del Código Civil alemán (BGB), fue quien acuñó el término *contrats d'adhésion*. Este jurista francés expresó que: “*Indubablemente hay contratos y contratos... Existen unos pretendidos contratos*

que no tienen de tales más que el nombre, y cuya construcción jurídica está aún por hacer; ... se les podría llamar, a falta de otra denominación más adecuada, contratos de adhesión, en los cuales se da un predominio exclusivo de la voluntad de una de las partes contratantes actuando como voluntad unilateral, la cual dicta su ley no ya sólo a un individuo sino a una colectividad indeterminada, y que se vincula por anticipado, unilateralmente, salvo la adhesión de quienes deseen aceptar su lex contractus y entrar a formar parte de este acuerdo ya creado por sí mismo”.

La evolución de la contratación, nos muestra como la voluntad de las partes y sus continuas necesidades obligan al derecho a crear instituciones jurídicas que vayan de la mano con las exigencias del mundo en que vivimos. Es por ello que la mayoría de contratos celebrados ya no son producto de la libertad contractual de ambas partes. Por lo general, los contratos se celebran a través de la adhesión de un contratante al formato predispuesto por el proveedor del bien o servicio. Esta situación puede generar el establecimiento de cláusulas en desmedro de los intereses de la otra parte, por esta razón el estado debe de garantizar total protección al consumidor a través de leyes, instituciones y autoridades.

2.4.2.3. Contrato de consumo

Para ARANA (2018) El contrato de consumo se define como “el contrato celebrado entre dos partes, uno el proveedor y otro el consumidor, para la compra-venta de un producto o servicio, a cambio de una contraprestación. En esta relación contractual, el proveedor actúa de acuerdo a su quehacer profesional, es el que tiene la información, por cuanto habitualmente fabrica y/o comercializa los productos que vende, o es el que presta los servicios que ofrece y conoce el ámbito del negocio que maneja. El proveedor es el que tiene la información del objeto del contrato y la otra parte es el consumidor, usuario o destinatario final del producto o servicio, es la parte que adquiere los productos, utiliza los servicios, siendo ajeno a ellos, desconoce el ámbito del negocio, desconoce profesionalmente sobre el objeto del contrato, tiene una mínima información, por ello carece de poder de negociación real”.

RINESSI (2006) señala que: "contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor final - persona física o jurídica- con una persona física o jurídica, pública o privada, que, actuando profesional u ocasionalmente, en calidad de productora, importadora o distribuidora, comercialice bienes o preste servicios, y que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de estos por parte del primero, para su uso privado, personal o familiar". Igualmente, el código peruano de protección al consumidor define en el artículo 45° el contrato de consumo de la siguiente manera: "El contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual intervienen un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestación económica", debe destacarse que la reciente normatividad peruana en la materia es la única en que aparece definido el contrato de consumo”.

2.4.2.4. Cláusulas generales de contratación

Según señala CÁRDENAS QUIRÓZ (2000), “las cláusulas generales de contratación son disposiciones predispuestas, generales y abstractas que integrarán la oferta de una serie indefinida de contratos individuales y que adquirirán fuerza vinculante solo una vez celebrados los correspondientes contratos”.

GARCIA AMIGO (1969) nos entrega otra definición, según la cual las “cláusulas generales de contratación son “una serie de cláusulas formuladas preventivamente en forma general y abstracta en vistas a la celebración de una serie indefinida de contratos, que al ser aceptados por las partes, pasan a regular la relación contractual que aquellas desean crear, estableciendo su carácter normativo, y por efecto reflejo, el contenido obligacional o subjetivo, sin que por otro lado coincidan con normas legales o consuetudinarias.” García Amigo apoya la tesis contractualista de la naturaleza jurídica de las condiciones generales; en este sentido las condiciones generales sólo tendrán valor jurídico una vez que

se perfeccione el contrato, sólo en ese momento las condiciones generales serán una verdadera *lex contractus*, y antes constituirían un mero *nullum jurídico*”.

Por otra parte, la definición legal de cláusulas generales de contratación nos la ofrece el artículo 1392° del código civil que las define como aquellas que son redactadas previa y unilateralmente por una persona o entidad, en forma general y abstracta, con el objeto de fijar el contenido normativo de una serie indefinida de contratos particulares, con elementos propios a ellos.

A. Características de las cláusulas generales de contratación

CÓRDOVA CUPITA en su tesis titulada “Las cláusulas generales de contratación en el Perú y su relación con el estado de desprotección de los derechos del consumidor en el Perú y su relación con el estado de desprotección de los derechos del consumidor” (2012) ha recogido las principales características de las cláusulas generales de contratación. Dichas características son:

- **“La predisposición o preformulación:** es el acto por el cual una persona, natural o jurídica, concibe intelectualmente y redacta en forma previa y unilateral las cláusulas generales.
- **La generalidad:** está referida al hecho de que las cláusulas generales se formulan sin tener relación con un contratante específico, por lo tanto, están dirigidas al público en general, a la masa humana. Son impersonales. Para Torres Vásquez, la generalidad, garantiza a los consumidores, igualdad de trato sin discriminación alguna; todos adquieren los bienes y servicios en los mismos términos y condiciones.
- **La uniformidad:** se presenta cuando las cláusulas generales son comunes a una serie indefinida de contratos particulares.
- **La abstracción:** las cláusulas generales son concebidas independientemente de una concreta relación jurídica, se elaboran en forma abstracta. Asimismo, son abstractas por no estar referidas a un contenido contractual específico, sino que pasaran a formar parte del contenido de una pluralidad de contratos que el predisponente celebre en el futuro. En otros términos, no se refieren al contenido de un contrato específico, sino al contenido de una serie de contratos futuro.
- **La inmutabilidad:** esta característica esencial de las cláusulas generales no ha sido incorporada por el codificador peruano en el Código Civil; ya que de acuerdo a lo establecido por los artículos 1395° y 1400° del Código Civil vigente, las partes contratantes tienen la facultad para pactar que determinadas cláusulas generales no se apliquen a un contrato en particular, es decir, sobre la base de su autonomía privada pueden excluir algunas condiciones del bloque de las cláusulas generales de contratación. Sin embargo, las cláusulas generales preformuladas por el predisponente deben ser un conjunto único e indiscutible, y, como tales, no pueden ser modificadas.
- **La imposición:** está referida a que una de las partes (usuario o consumidor) se somete a las reglas determinadas por la otra (predisponente), es decir, se trata de la inevitable aceptación de las condiciones o bien de una falta total de posibilidades de renegociar o modificar las reglas fijadas”.

B. Finalidad

La finalidad de las cláusulas generales de contratación es tratada por muchos doctrinarios desde distintos puntos de vista, así lo ha recogido SOTO COAGUILA (2003), quién señala la postura de los siguientes doctrinarios:

- “Según la postura del Código Civil y de Max Arias-Schreiber contratos por adhesión y los contratos celebrados sobre la base de cláusulas generales de contratación son modalidades de la contratación masiva y la ineludible tarea de regularlas está orientada a defender al consumidor, para reducir la brecha existente entre la parte fuerte -empresarios- y la parte débil -consumidores. En consecuencia, la finalidad de regular las cláusulas generales es la defensa de los consumidores, es decir, proteger jurídicamente a la masa consumidora.
- Para Manuel De La Puente, la finalidad de las cláusulas generales de contratación es el tráfico masivo de bienes y servicios, y sólo secundariamente, la protección de la parte débil en la negociación contractual.
- Para, Alfredo Bullard relaciona el tema de las cláusulas generales de contratación con la protección al consumidor, sosteniendo que el legislador debe orientar su preocupación para regular los mecanismos de transmisión de la información a los consumidores, a fin de evitar la asimetría de la información que existe en este sistema contractual.
- Para Soto Coaguila la finalidad jurídica de las cláusulas generales de contratación es facilitar el tráfico masivo de bienes y servicios, reduciendo al máximo los costos de negociación a fin de permitir la fluidez de las operaciones contractuales en una sociedad de masas como en la que actualmente vivimos”.

C. Cláusulas aprobadas por la autoridad administrativa

FLORES FLORES (2018) nos manifiesta que sobre las cláusulas generales aprobadas por autoridad administrativa se ha redactado el artículo 1393º: “Las cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa se incorporan automáticamente a todas las ofertas que se formulen para contratar con arreglo a ellas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1395”.

Por su parte una lectura sistemática comprende el artículo 1394 que establece: “El Poder Ejecutivo señalará la provisión de bienes y servicios que deben ser contratados con arreglo a cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa”. Y el artículo 1395: “Las partes pueden convenir expresamente que determinadas cláusulas generales de contratación aprobadas por la autoridad administrativa, no se incorporen a la oferta en el contrato particular que ellas celebran”.

En primer lugar, este mecanismo tiene su origen en la necesidad de regular y desarrollar el contenido de unas cláusulas generales de contratación para determinados sectores de personas que contratan sobre un mismo servicio o producto, y lo hacen de tal manera, que para salvaguardar la equidad en las prestaciones, la justicia contractual y la celeridad de la contratación, se necesita de un organismo supra, que conocedor técnico de las características y particularidades del objeto contractual, pueda efectivamente, proteger los intereses y necesidades de ambas partes, en específico, los consumidores.

Como se entiende, que estas cláusulas son desarrolladas para proteger y salvaguardar los derechos de los contratantes débiles, en especial los consumidores, se incorporan automáticamente a la oferta contractual.

CÓRDOVA CUPITA añade que “la autoridad administrativa competente es quien aprueba las cláusulas generales de contratación previa verificación de dos presupuestos: primero la verificación sobre la idoneidad para la regulación de contratos masivos y segundo la existencia de equilibrio entre los derechos y obligaciones del proveedor predisponente y de los consumidores, a cuyo efecto serán depuradas de las estipulaciones vejatorias para el consumidor y, en todo caso, que no contravengan normas imperativas, el orden público o las buenas costumbres.”

Con lo desarrollado hasta este punto, debemos señalar que los contratos de consumo celebrados con las entidades del sistema financiero se encuentran dentro de los bienes y servicios que obligatoriamente deben ser contratados con arreglo a las cláusulas generales de contratación. De esa manera el Estado protege al usuario del producto financiero, buscando el equilibrio contractual entre las partes, la operatividad del servicio financiero y el respeto de los derechos de los usuarios. Esta función se encuentra a cargo de la Superintendencia de Banca y Seguro y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

Como comentábamos en el párrafo anterior las entidades del sistema financiero están obligadas a incorporar las cláusulas generales de contratación aprobadas previamente por la SBS a los contratos de adhesión que celebren con sus usuarios o clientes. La voluntad contractual del cliente solo se limita a escoger el producto activo que más se ajusta a sus necesidades. Por esta razón es necesario tocar el tema de contratos de adhesión.

2.4.2.5. Contratos de adhesión

LEÓN BARANDIARÁN (1992, p. 29-31), señala que “por el contrato se ponen de acuerdo las partes sobre lo que es materia de declaración voluntad. Los inconvenientes de dar una definición respecto a una materia de tal comprensión como lo es el contrato, se notan al considerar las diversas manifestaciones que puede revestir tal acuerdo. Este ordinariamente supone una libre discusión entre las partes. Pero al lado de esta forma existe otra, que en ciertos aspectos se ha generalizado: una parte presenta las condiciones completas del contrato, para que la otra las acepte sin discusión, establecidas así *ne variatur*. Tales contratos llamados de adhesión. Algunos autores han reputado que no puede hablarse propiamente de contrato, sino de acto unilateral, puesto que no hay la concurrencia y discusión por las partes para la formación del contenido del contrato; una de ellas impone su voluntad a la otra que solo hace aceptar la propuesta total. Mas, se ha contestado a esto diciéndose que lo fundamental es el libre consentimiento de las dos partes para crear el negocio jurídico, y aquel existe en virtud de que voluntariamente el adherente ha convenido en aceptar las condiciones propuestas. En suma se tratan de contratos “en que una de las partes por un acto unilateral de voluntad fija las condiciones sobre las cuales se va a contratar y la otra se limita a aceptar o adherirse en block a ellas sin poder distinguirlas. Ejemplo típico de esta especie de contrato es el seguro: el que se asegura la vida, se limita a aceptar las condiciones que le impone la compañía en una póliza impresa, y no hay quién las discuta, y muchos ni siquiera los leen. Otro tanto sucede con el contrato de transporte, lo mismo con el contrato de luz eléctrica, el agua potable o el gas.”

El contrato por adhesión se encuentra regulado en el artículo 1390° del código civil, el cual que “El contrato es por adhesión cuando una de las partes, colocada en la alternativa de aceptar o rechazar íntegramente las estipulaciones fijadas por la otra parte, declara su voluntad de aceptar”.

LE PERA (1974) sostiene que el Contrato por Adhesión en “sentido amplio alude a los casos en que la oferta no admite modificaciones o contraofertas. La “libertad de contratar (que incluye la libertad de discutir el contenido del convenio) se reduce en este caso (dicen los autores) a un “libertad de contratar (o no)”. La subsistencia de esta libertad es considerada suficiente para preservar la idea del contrato como “acto humano voluntario”. En sentido estricto el contrato de adhesión parece implicar la idea de un convenio entre una parte que, por una razón jurídica o de hecho, posee una posición de clara superioridad respecto de la otra. Esta situación no es absolutamente crítica mientras no introduzcamos en el esquema la necesidad económica o de hecho (y a veces jurídica) en que la parte débil pueda encontrarse. Cuando así ocurre, y ambos elementos (desigualdad de posiciones y necesidad) concurren, difícilmente cabe seguir sosteniendo que exista tal “libertad de contratar (o no)”, que es la que justifica los contratos por adhesión en sentido amplio”.

BELTRÁN (2003), define al contrato por adhesión como “aquella modalidad contractual por medio de la que un sujeto contratante elabora (de forma anticipada) el contenido del contrato colocando a su contraparte en la posición de decidir si contrata o no en dichos términos, quedando en la alternativa de adherirse (es decir, se restringe la negociación a lo que señala la parte que redactó el documento contractual) o no”.

A. Características

ECHEVERRI SALAZAR (2010) manifiesta que las características de los contratos de adhesión, a partir de los textos de Stiglitz y Yuri Vega son:

- Unilateralidad: Este, tal vez sea uno de sus rasgos más característicos. La configuración interna del contrato viene modelada sólo por una de las partes, precisamente identificada como el predisponente.
- La rigidez del esquema predeterminado por el empresario: Ello significa que su contraparte carece del poder de negociación que consiste en discutir o en intentar influir en la redacción del contrato o tan siquiera de una cláusula.
- La predisposición contractual es inherente al poder de negociación que concentra el “profesional” y que generalmente (no siempre), coincide con la disparidad de fuerzas económicas. Ésta no parece ser una característica que atrape todos los supuestos, pues quien ostenta poder económico también formaliza contratos por adhesión en calidad de adherente. En cambio, aparece como más convincente distinguir a las partes según el poder de negociación de que dispongan. Así, predisponer un contrato presupone poder de negociación y ello sólo lo ejerce el profesional. A su vez, adherir a un contrato implica carecer de dicho poder. Y esa carencia se sitúa en cabeza del consumidor o usuario.
- El adherente se halla en estado de compulsión, del cual no puede sustraerse pues necesita del bien o servicio que presta el predisponente. Mosset Iturraspe considera que la verdadera razón de los formularios es reducir los costos de transacción. No necesariamente supone que exista un poder atrás que condicione.

Por su parte ROLDAN PEREDA (2016 citando a LAVALLE ZAGO (1991)) añade las siguientes características:

- “El estado de compulsión en que se halla sometido el adherente motiva que la alternativa de la que dispone consiste en aceptar en bloque el esquema programado por el predisponente o no contratar. En razón de que el contrato por adhesión ha sido concebido precisamente como una categoría que no consiste en la deliberación previa; y por tanto es rígidamente uniforme.
- El contrato por adhesión está integrado por cláusulas que se denominan condiciones generales. Esto significa que son redactadas exclusivamente e íntegramente por una parte que adopta el nombre de predisponente”

Llegado hasta este punto, después de desarrollar el contexto, el contenido y el tipo de contrato a través del cual se celebra el contrato de mutuo con las entidades financieras, resulta necesario conceptualizar el término contrato de préstamo personal como producto financiero.

Como ya lo hemos detallado precedentemente, el contrato de préstamo personal es un contrato de mutuo celebrado con una entidad financiera. Es también un producto activo financiero que forma parte

de la contratación masiva, por lo que el estado garantiza la protección al usuario a través de la aprobación de cláusulas generales de contratación que posteriormente deberán ser añadidas al contrato de adhesión que es la forma en que se concluye el contrato, por medio de la simple aceptación o firma del documento en que se recogen aquellas condiciones generales.

Habría que decir también que este producto activo va dirigido a personas naturales, donde la entidad no suele contar con una garantía especial para el cobro de la cantidad prestada. Así, tienen como garantía genérica los bienes presentes y futuros del deudor.

Por otro lado, el usuario o mutuuario utiliza el crédito ya sea para satisfacer necesidades personales como compra de útiles escolares, viajes con la familia, reparación de vehículo de uso personal, compra de muebles para la casa, u otro pago de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad empresarial.

Asimismo, otras singularidades que caracterizan al préstamo personal son:

- No suelen ser de importe elevado.
- El cliente responde del cumplimiento de sus obligaciones (devolución del importe prestado y pago de intereses y comisiones) con todos sus bienes, presentes y futuros. Por ello, es normal que antes de dar el préstamo la entidad de crédito estudie su capacidad de pago, solicitándole justificantes de sus ingresos (nóminas, rentas por alquiler...), un inventario de sus bienes o una declaración jurada de su patrimonio.
- El cliente no suele comprometer de forma particular ningún bien en concreto (por ejemplo, una vivienda, como sucede en los préstamos hipotecarios), por lo que la tramitación de este tipo de préstamos suele ser más rápida que la correspondiente a los préstamos hipotecarios. Sin embargo, suelen tener un tipo de interés más alto, o sea son más caros.

Se debe señalar que dicho producto financiero recibe diversas denominaciones. Algunas entidades prefieren utilizar el término contrato de préstamo personal, otras en cambio utilizan la denominación contrato de libre disponibilidad. Sin importar el término utilizado hace alusión al mismo producto activo financiero.

De acuerdo a las páginas webs de las entidades financieras que se encuentran en Piura, podemos señalar lo siguiente:

- El BCP, BBVA, Banco INTERBANK, SCOTIABANK utilizan el término préstamo personal; el BCP, el Banco Pichincha, préstamo de libre disponibilidad; Mi Banco, Consumo Personal.
- Banco GNB PERÚ, contrato de crédito personal.
- Por su parte, Caja Arequipa, Caja Trujillo, Caja Sullana utilizan el término crédito personal; Caja Paita y Piura, crédito de Consumo.

2.4.3. Liquidación de saldo deudor emitida por las entidades del sistema financiero

Para entender a cabalidad el porqué de la existencia de la liquidación de saldo deudor, debemos empezar por precisar que es un mecanismo para atenuar el riesgo de los ahorristas.

Aquí un elemento importante es el ahorro y como es que nuestra legislación promueve y protege el ahorro. Posteriormente nos encargaremos de conocer a la liquidación de saldo deudor como título ejecutivo.

2.4.3.1. El ahorro

Para PELLAS (2008) “el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo realizado por una persona, familia, empresa incluso un país; para eso es necesario gastar menos de lo que se gana con eso podemos separar dinero de manera constante, según el pago que reciba, aunque este sea poco; esto implica educación, disciplina y actitud”.

MELI MUNDI & BRUZZONE (2006, p. 15) “Ahorro es el porcentaje del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras a través de diversos mecanismos financieros. En compensación al ahorrante, la institución elegida le paga intereses al titular de la cuenta de manera periódica por colocar su dinero en ella”.

A su vez, la ley 26702 en su artículo 131° define al ahorro como “el conjunto de las imposiciones de dinero que, bajo cualquier modalidad, realizan las personas naturales y jurídicas del país o del exterior, en las empresas del sistema financiero. Esto incluye los depósitos y la adquisición de instrumentos representativos de deuda emitidos por tales empresas”.

Por su parte, la Constitución Política del Perú regula la protección al ahorro, estableciendo en el artículo 87° que “El Estado fomenta y garantiza el ahorro. La ley establece las obligaciones y los límites de las empresas que reciben ahorros del público, así como el modo y los alcances de dicha garantía”.

2.4.3.2. Clasificación del ahorro

- A. Ahorro privado:** Son aquellas que realizan familias, instituciones sin ánimo de lucro y empresas. El ahorro de una empresa privada autónoma, equivale a su beneficio, menos la parte de éste que es repartida a sus propietarios o accionistas obteniéndose beneficios; por lo expuesto podemos colegir que el ahorro privado no forma parte del Estado de forma directa.
- B. Ahorro público:** Lo realiza el Estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras actividades, a la vez que gasta en inversión social, en infraestructura (carreteras, puentes, escuelas, hospitales, etc.), en justicia, en seguridad nacional, etc. Cuando el Estado ahorra quiere decir que sus ingresos son mayores que sus gastos y se presenta un superávit fiscal, el caso contrario conduciría a un déficit fiscal.

2.4.3.3. Garantía del ahorro

Según GONZALES CABRERA (2017) “La garantía del ahorro nace de la protección por parte del Estado a los ahorristas, por la necesidad de encontrar instituciones que brinden la posibilidad de depositar su dinero y a cambio de obtener ciertas prerrogativas para un mejor ahorro.

Generalmente la persona que ahorra no lo hace con la idea de la disponibilidad inmediata de su recurso, de ser así depositaría su dinero en una cuenta corriente para disponer de ella en forma inmediata. Quien ahorra lo hace porque busca precaverse de una necesidad futura, o para lograr algunas satisfacciones personales. Precisamente, la permanencia de los depósitos permite a los bancos destinar estos recursos a otras inversiones. Entre las medidas que el Estado, prevé para la protección o garantía del ahorro, mencionamos algunos, sin ánimo de limitar y desconocer que no son las únicas.

La Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero, también conocida como Ley de bancos, es el marco legal general, que contiene varios tipos de medidas destinadas a proteger al ahorrista imponiéndole derechos y deberes del mismo modo a las entidades financieras. En esta norma promulgada el 09 de diciembre del año 1996, en los artículos del 132 al 172 el Estado prevé algunas prerrogativas, a favor de las entidades financieras con el único propósito que estas recuperen sus créditos de una manera rápida y eficaz, dado que estos créditos son el depósito de millones de ahorristas que confiaron en estas entidades bancarias su custodia, atraídos por el pago de intereses, por lo tanto si estas entidades financieras no recuperan esos créditos, serían afectados.”

Debemos mencionar que nuestro trabajo de investigación estará enfocado en una de las formas para atenuar el riesgo de los ahorristas, dicha forma está establecida en el inciso 7 del artículo 132° de la Ley 26702. Entre otras de las formas que la ley ha establecido para la protección al ahorro se encuentran:

- Los límites y prohibiciones señalados en el Título II de la Sección Segunda y en las demás disposiciones que regulan a las empresas. Dichos límites tienen por objeto asegurar la diversificación del riesgo y la limitación al crecimiento de las empresas del sistema financiero hasta un determinado número de veces el importe de su patrimonio efectivo.
- La constitución de la reserva de que trata el Capítulo III del Título III de la Sección Primera de la ley en mención;
- El mantenimiento del monto del capital social mínimo a valores reales constantes, según lo normado en el artículo 18° de la ley 26702;
- La constitución de provisiones genéricas y específicas de cartera, individuales o preventivas globales por grupos o categorías de crédito, para la eventualidad de créditos impagos, y la constitución de las otras provisiones y cargos a resultados, tratándose de las posiciones afectas a los diversos riesgos de mercado;
- La promoción del arbitraje como un medio de solución de conflictos entre empresas y entre éstas y el público, haciendo uso para tal efecto de las cláusulas generales de contratación;
- La recuperación en forma expeditiva de los activos de las empresas del sistema financiero;
- La ejecución del Título de Crédito Hipotecario Negociable y del Warrant que garanticen obligaciones con empresas del sistema financiero por su tenedor, con exclusión de cualquier tercer acreedor del constituyente, concursado o no. La presente disposición no afecta los derechos de los Almacenes Generales de Depósito de cobrar los almacenajes adeudados y gastos de remate al ejecutar los warrants;
- Los valores, recursos y demás bienes que garantizan obligaciones con empresas del sistema financiero, cubren preferentemente a éstas. Las medidas cautelares que se dispongan respecto de tales bienes, valores o recursos, sólo surten efecto luego que la empresa disponga sobre ellas los cargos que correspondan por las deudas vencidas de su titular a la fecha de notificación de dicha medida, y siempre que dichos bienes, valores o recursos no se encuentren sujetos a gravamen alguno en favor de la empresa del sistema financiero. Igual norma es aplicable tratándose de valores, recursos o demás bienes dados en garantía para afianzar obligaciones de terceros;

- Posibilidad de dar por vencidos los plazos de las obligaciones, vencidas y no vencidas, de un deudor ante un caso de incumplimiento. En este supuesto, la empresa podrá hacer uso del derecho de compensación referido en el numeral siguiente, y;
- El derecho de compensación de las empresas entre sus acreencias y los activos del deudor que mantenga en su poder, hasta por el monto de aquellas, devolviendo a la masa del deudor el exceso resultante, si hubiere. No serán objeto de compensación los activos legal o contractualmente declarados intangibles o excluidos de este derecho.

De esta manera el estado ha elaborado mecanismos tendientes a proteger a los recursos de los ahorristas que posteriormente serán puestos en manos de los agentes deficitarios de créditos.

2.4.3.4. La liquidación de saldo deudor como título ejecutivo

PALOMINO MONTESINOS (2016) manifiesta que “en mérito al principio de legalidad contenido en el artículo 688 del código procesal civil, señala que solo se puede promover ejecución en virtud a los títulos ejecutivos y de otros a los que la ley les dé mérito ejecutivo.

Este autor añade que de manera directa y expresa, en el artículo 688° del Código Procesal Civil están señalados cuales son los título ejecutivos (judiciales y extrajudiciales) y los que no están expresamente señalados se encuentran en otras normas y por ello el numeral 11 remite a “otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo”.

En virtud del numeral 11 del artículo 688° del Código Procesal Civil, la Ley General del Sistema Financiero, Ley N° 26702, en su inciso 7 del artículo 132 establece que las liquidaciones de saldo deudor que emitan las entidades del sistema financiero tienen mérito ejecutivo. La ley solo se limita a otorgar mérito ejecutivo y no regula más al respecto.

La escasa regulación legal sobre mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor originó discrepancia en la jurisprudencia. El meollo del problema residía en que, para un sector de la jurisprudencia, la liquidación de saldo deudor no cumplía con los requisitos comunes, establecidos en el artículo 688° del Código Procesal Civil, esto es que la obligación que se encuentra contenida en el título no era cierta, expresa y exigible; ya que, según criterio de algunos Jueces, al ser un documento emitido unilateralmente por la entidad financiera, no expresaba la voluntad del deudor.

Otro argumento sostenido por este sector de la jurisprudencia como lo señala PALOMINO MONTESINOS es que dada las características de las normas declarativas contenidas en la Constitución Política de 1993 y a la prescripción genérica y sólo enunciativa contenida en el artículo 132° antes referido, **se requeriría una regulación específica, para su viabilidad y aplicación, en tal sentido se presentaría la necesidad de que se desarrolle por normas posteriores tal y como acontece con el artículo 228° de la Ley 26702**, que regula el caso de las cuentas corrientes.

Por otro lado, la postura que tiene mayor fuerza, es la que sostiene que la liquidación de saldo deudor sí tiene mérito ejecutivo, pero para promover un proceso único de ejecución necesita acreditar la obligación que ejecuta a través del contrato que originó dicha obligación. Este es criterio seguido en las siguientes casaciones:

- **CASACIÓN N° 1975-1997/LORETO.- (...)** Cuarto.- Que, por su parte el artículo 132°, inciso 7 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, cuya inaplicación se denuncia, establece que las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas del sistema financiero gozan de mérito

ejecutivo. Que siendo así, no es exacto que la liquidación emitida por las entidad ejecutante, sea un mero documento privado, sino que por el contrario constituye título ejecutivo.

- **CASACIÓN N° 1024-1998/LIMA.-** (...) Segundo.- Que, la demanda interpuesta por el Banco Continental contra Juan Francisco Pasara Gonzales, tienen por objeto se le pague la suma ascendente a catorce mil quinientos treinticinco nuevos soles con cero cuatro centavos. Tercero.- Que, en el presente caso no solo se ha presentado la liquidación a fojas once, sino que además se ha adjuntado como debe de ser, el documento de fojas diez que contiene la obligación que origina. Cuarto.- Quen en consecuencia , es de aplicación al caso lo dispuesto en el inciso sétimo del artículo ciento treinta y dos de la Ley número veintiséis mil setecientos dos que regula el mérito ejecutivo de la liquidación de saldos deudores que emitan las empresas. (...).
- **CASACIÓN N° 1990-1998/LIMA.-** “(...). Que el inciso 7 del artículo 132 de la ley 26702, da mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldo deudores que emitan las empresas comprendidas en dicha disposición legal, entre ellos los bancos, pero la sola presentación de aquella no sustenta el proceso de ejecución, pues todo título ejecutivo aparte de reunir los requisitos que exige la ley de su creación, debe a su vez cumplir con lo que establece el código procesal civil, por la propia naturaleza expeditiva del proceso formal al que esta sometido. Segundo.- que en este sentido las liquidaciones de saldo deudores de las empresas financieras deben recaudarse necesariamente con el o los documentos donde conste el origen de la obligación, porque sino emanarían de un acto unilateral y por lo tanto arbitrario, que no califica por si sola como títulos ejecutivos, ya que la ley y la doctrina reservan esta calidad a determinadas situaciones convencionales, en cuya formación siempre tiene intervención del obligado. (...)”
- **CASACIÓN N° 2024-2000/LIMA.-** “Si bien el inciso sétimo del artículo 132 de la Ley 26702 (Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros), da mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldo deudores que emitan las empresas comprendidas en tal disposición legal, la sola presentación de aquella no viabiliza el proceso de ejecución, por lo que es necesario que dichas liquidaciones deban recaudarse con el o los documentos donde conste el origen de la obligación.
- **CASACIÓN N° 1674-2002.-** (...) Para que proceda la acción ejecutiva es necesario que conjuntamente con las liquidaciones de saldo deudor se presenten los documentos que dieron origen a la deuda, pues de conformidad con el artículo 689° del Código procesal civil la obligación debe ser cierta, expresa y exigible.
- **CASACIÓN N° 463-2004/ICA.-** (...) el artículo 132° numeral 7 de la ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, señala que la liquidaciones de saldo deudores emitidas por las empresas del sistema financiero tienen mérito ejecutivo. Sin embargo, no debemos perder de vista que un requisito para que proceda ejecución es que la obligación contenida en el título sea cierta, esto es conocida como verdadera ineluble, expresa y exigible. Por tal motivo, en la medida en que las liquidaciones de saldo deudor son documentos emitidos unilateralmente, para que proceda ejecución debería presentarse conjuntamente al título documentos donde conste el origen de la deuda.

Finalmente, la **CASACIÓN N° 4087-2009/LIMA**, publicada el 01 de diciembre del 2010 también avala el reiterado criterio antes señalado. Siendo ello así, actualmente nuestros Juzgados Civiles y Paz letrado, siempre que se acompañe el documento que origina la obligación

conjuntamente con la liquidación de saldo deudor, confieren la calidad de mérito ejecutivo a este instrumento, permitiendo de este modo promover un proceso único de ejecución.

2.4.4. Regulación legal del pagaré

2.4.4.1. Origen y desarrollo histórico del pagaré

Tanto el pagaré como la letra de cambio surgieron durante el medievo, siendo el pagaré incluso anterior a la letra de cambio. Su regulación aparece en las Ordenanzas de Bilbao, en el C.Com. 1829 y en el de 1885. Durante el siglo pasado se utilizaba tanto para la captación de fondos, como para la documentación del pago aplazado en operaciones comerciales. Sin embargo, el pagaré fue perdiendo importancia frente a la letra de cambio, hasta la década de los ochenta. En los últimos años ha tenido un auge muy fuerte, inicialmente como instrumento de captación de fondos a corto plazo por las empresas, que emiten pagarés en masa que son adquiridos por el público. Poco a poco el pagaré va ganando importancia, en detrimento de la letra de cambio, no sólo en operaciones financieras, sino también en transacciones puramente comerciales (hasta el punto que los bancos facilitan a sus clientes libros talonarios de pagarés, con forma externa muy similar a los de cheques).

Por otra parte, DEL PRADO RODRIGUEZ (s.f, p.5-6) señala que “El origen del pagaré y en sentido general de los títulos de crédito resulta siempre algo incierto, esencialmente cuando pretendemos fijar una fecha o período histórico más o menos exacto para su nacimiento. Es criterio generalmente aceptado por la doctrina que no fue conocido por los pueblos antiguos, como tampoco lo fue la letra de cambio y mucho menos el cheque. No se tienen antecedentes de que fuera conocido en el Derecho romano, lo cual se corrobora con el dicho de Papiniano de que los que prestaban dinero a los mercaderes que traficaban por el mar, enviaban uno de sus esclavos para recibir o cobrar de su deudor la cantidad prestada en habiendo arribado al puerto en donde se debían vender las mercaderías, infiriéndose de ello el desconocimiento y no uso de documentos de crédito entre los romanos, pues en caso contrario no se hubiera practicado este procedimiento.

Es el surgimiento del dinero como mercancía de cambio el que determina el surgimiento de los títulos de crédito, antes de la existencia del dinero, el comercio se realizaba por simple trueque o permuta sin que interviniera o subsistiera obligación alguna, las partes simplemente intercambiaban sus productos o mercancías mediante acto unitario, pero al penetrar el dinero en el tráfico mercantil, la permuta cede espacio a la compraventa, entendida ésta como el intercambio de bienes por un signo fiduciario que servía de precio a éstos, quedando así preparadas las condiciones para la aparición de los títulos de crédito.

La Liga de Ansa o Ansiática, pactada en 1241 en Alemania por las ciudades de Lubeck, Brema y Hamburgo, y que llegó a comprender 80 ciudades más, promovió considerablemente la extensión de comercio, convirtiendo a muchas ciudades como Hamburgo, Génova, Florencia, Marsella, Venecia, Barcelona y otras, en grandes centros mercantiles; se establecieron los Consulados del Mar para resolver los litigios sobre cuestiones de comercio sustentados en la buena fe y la equidad.

En 1538 se dictan las ordenanzas de Burgos y en 1726 las de Bilbao; estas ordenanzas, que bien pueden ser consideradas particulares pues no rigen con carácter general sino sólo para los lugares que lo habían convenido, contienen en su normativa regulaciones sobre los títulos de crédito y constituyeron la legislación española vigente hasta la promulgación del Código de Comercio de 1829.

Hay autores que atribuyen su surgimiento al período de retirada de los judíos de Francia, pero realmente resulta incierta y confusa esta afirmación si tenemos en cuenta que no precisa a qué momento se refiere, si a la expulsión que acaeció en el año 640 o a la ocurrida en 1316, siendo motivo para

cuestionarse la certeza de esa teoría también el hecho de que los judíos fueron expulsados de Francia por el rechazo que allí se les profesaba, lo cual hace poco probable que alguien se hiciera cargo de sus bienes o dineros y diere a cambio un pagaré u otro título contraviniendo lo legislado al respecto.

Otros autores como Rubís, atribuyen a los florentinos que se refugiaron en Francia huyendo de los gibelinos la invención de la letra de cambio, siendo presumible también que fueran ellos quienes en sus relaciones comerciales comenzaran a utilizar el pagaré para recoger su dinero, pero lo que si resulta un hecho cierto es que ya durante el siglo XIII, los italianos acostumbrados a comerciar con Francia utilizaban en sus transacciones letra de cambio, permitiendo esto suponer que también lo hicieran con el pagaré, resultando probable que durante este período se utilizara por las características y tipo de comercio, el pagaré nominativo, destinado esencialmente a servir como medio para garantizar el pago de deudas u obligaciones contraídas por el librador a favor de persona cierta, subordinado, en todo caso, a un préstamo u obligación preexistente de la cual es accesorio y garante.

En el Perú el pagaré, se encuentra regulado dentro la Ley de Títulos valores. Respecto a ello, PÉREZ VÁSQUEZ, (s.f, p.282) indica que “Desde 1967, el Perú contó con una legislación especial y acertada sobre títulos valores. La Ley 16587, que fue la primera en ser denominada “Ley de Títulos Valores”, fue durante muchos años una norma de suma utilidad para la actividad comercial e inclusive sirvió como referente para otras legislaciones de la región. Sin embargo, el vértigo de las últimas décadas y la presencia cada vez más sensible de la tecnología en los negocios fueron revelando su insuficiencia.

De hecho, la aparición de nuevas figuras e instituciones jurídicas no previstas cuarenta años atrás, propiciaron la aparición de nuevas regulaciones y con ello una gran dispersión normativa sobre títulos valores, haciendo necesario hacia fines del siglo una revisión integral de nuestra legislación cambiaria.

En ese contexto, luego de largos debates iniciados básicamente desde el año 1997, hacia mediados del 2000 finalmente se aprobó el texto de la Ley N° 27287 denominada, al igual que su predecesora, “Ley de Títulos Valores” que fue publicada en el diario Oficial El Peruano el 19 de junio del año 2,000 y entró en vigencia el día 17 de octubre del mismo año, reemplazando luego de más de 30 años de vigencia a la anterior Ley N° 16587.

2.4.4.2. Características del título valor

- **Derechos patrimoniales incorporados**

MONTOYA MANFREDI, (1982, p.14), señala que “Los títulos valores contienen un derecho patrimonial incorporado que puede ser una orden de pago, un crédito, un conjunto de derechos, derecho de propiedad o diversas prestaciones. Son relaciones jurídicas que tienen vida propia. Así por ejemplo, Montoya Manfredi dice que los cheques, sustituyen, en cierta forma, a la moneda como instrumento de pago; otros promueven o facilitan las ventajas del crédito, como la letra de cambio; otros contienen un complejo de derechos de participación, un *status*, como las acciones de las sociedades; y, finalmente, otros confieren derechos sobre cosas o prestaciones de servicios, como los *warrants* y las cartas de porte”.

- **Destino circulatorio**

SILVA VALLEJO, (1989, p.667-668) dice que “en los títulos de crédito no hay transmisión del derecho de crédito, y más que de circulación de crédito podría hablarse de una circulación de la posición de acreedor. Esta destinación inicial a la circulación, ínsita en la voluntad del creador del título, constituye la esencia del título de crédito, el elemento discriminante y del cual derivan las características

propias de la disciplina, pero constante y presente en todos los títulos de crédito está la voluntad de crear un título circulatorio”.

Por otro lado, MONTOYA MANFREDI (1982, p.17) citando a Winizki los denomina “títulos circulatorios” fundándose en que el fenómeno económico de la circulación es el denominador común de todos los documentos que se integran en la teoría general autónoma que gobierna esta clase de instrumentos y que son exigencias económicas las que han obligado a facilitar y asegurar esa circulación, innovando hasta en las concepciones jurídicas más tradicionales, como ocurre con la fundamental y revolucionaria figura del endoso.

- **Documento formal**

Según DESEMO, citado por SILVA VALLEJO, (p.666), el Título de crédito, “aparte de ser un documento especial es también un documento formal que obedece a los requisitos de forma prescritos por la ley bajo conminación de la invalidez del título como tal”. “No basta, por tanto, la escritura, sino que son necesarias todas las indicaciones que la ley requiere para que el título de crédito asuma un determinado tipo y pueda considerar regular y, por lo tanto, despliegue la eficacia que le es propia.

2.4.4.3. Principios que rigen en los títulos valores

- **La incorporación**

MONTOYA MANFREDI (1982, p.20) “El derecho que deriva del título-valor se encuentra como adherido al título, sin el cual ese derecho no puede circular. Por eso se habla del “título-valor”, o sea, el valor, es decir, el derecho, unido indisolublemente al documento que lo contiene, sin el cual no puede hacerse valer. Por esto, a la incorporación se le ha llamado también compenetración o inmanencia”.

Para BROSETA PONT (1983, p.542) “La incorporación del derecho al documento hace más fácil y segura la circulación de los derechos, porque permite una esencial transmutación jurídica: la cesión de derechos se convierte en una transmisión de cosas muebles a cuyo régimen jurídico el documento (título valor) se somete. La solución del Derecho mercantil a la exigencia de que los derechos se transmitan de forma rápida y segura se logra mediante la incorporación, porque por ella los derechos circulan eludiendo las reglas de la cesión de créditos, sometándose a las reglas de la transmisión de las cosas muebles. El tráfico de derechos se convierte así en un tráfico de cosas muebles (protegido por el principio de tutela a la posesión de buena fe), cuyo régimen jurídico contiene grandes ventajas; la posesión de buena fe equivale al título; el adquirente poseedor de buena fe obtiene la propiedad del documento (título valor); la propiedad del documento confiere la titularidad del derecho incorporado; la simple posesión del documento legitima al poseedor para exigir del deudor el cumplimiento del derecho incorporado”.

Por otro lado, SANCHEZ CALERO (1986, p. 336) menciona que “El derecho que se incorpora es frecuentemente un derecho de crédito que entraña la pretensión de una prestación dineraria. Pero esto no es necesario, pues el título puede incorporar un conjunto de derechos de distinta naturaleza (como sucede en el caso de las acciones) o un derecho relativo a cosas individualizadas (mercancías, en el supuesto de conocimientos de embarque, resguardos de depósitos, etc.). Por esta razón resulta preferible el término título-valor a título de crédito.

- **La literalidad**

Para RAMOS PADILLA (s.f, p.21) “Este principio significa que los derechos y correlativas obligaciones deben constar por escrito en el documento o en hoja adherida a él, porque son los términos señalados en éste los que determina el contenido y los efectos de tales derechos, así como la titularidad

del tenedor legítimo y las prestaciones a cargo del obligado (el alcance y modalidades de los derechos y obligaciones). La hoja adherida deberá ser firmada por el primero que lo utilice de modo tal que comprenda dicha hoja y el documento (artículo 4). Derivado del principio de literalidad, las medidas cautelares, la prenda, el fideicomiso y cualquier afectación sobre los derechos o los bienes representados por valor, no surten efecto si no se anotan en el mismo título. En otros títulos, por su naturaleza, como los nominativos, deben anotarse en la matrícula o registros del respectivo valor (artículo 13).”

Según SILVA VALLEJO (1989, p.667) “la literalidad del título significa que este contiene una obligación y un correspondiente derecho conforme al tenor del documento”. Por otra parte, MONTOYA MANFREDI (1982, p.29) “El contenido de la declaración documental y a veces de la norma legal y de la relación causal que el emitente haya podido mencionar en el contexto del título, determina el contenido y la naturaleza del derecho, o de los derechos internos y de la obligación u obligaciones correlativas.”

URÍA (1997, p.837) “La literalidad opera exclusivamente de quien haya de ejercitar el derecho documental, sustrayéndole a posibles excepciones del deudor, basadas en elementos extraños al título. Su fundamento está en la confianza que pone quien recibe un título sobre la exactitud de su contenido según el tenor título mismo.”

VIVANTE, (1936, p.137) apunta que “Se dice que el derecho expresado en el título es literal, porque su existencia se regula a tenor del documento; esto significa que la forma escrita es decisiva para precisar el contenido del título, su naturaleza y la modalidad del derecho mencionado en el documento”.

MONTOYA MANFREDI (1982, p.21) añade que “Ninguna condición que no resulte del tenor del documento puede hacerse valer mediante él. De este modo, lo que aparece literalmente en el documento resulta determinante respecto a la situación jurídica del titular. El derecho incorporado tiene la nota de la literalidad, lo que quiere decir que cuanto concierne al contenido de este derecho, sus límites y sus modalidades dependen de los términos en que ésta redactado el título.

- **Autonomía**

VIVANTE (1936, p.137) nos dice que “Este principio determina que cada uno de los sucesivos titulares del documento resulta vinculado en forma originaria con el obligado y no como un sucesor de quienes lo antecedieron en la titularidad del instrumento. Existe una relación real, objetiva, instrumentalizada, independiente de las relaciones extradocumentales (causas que pudieran haber determinado la creación o transmisión del título hasta llegar al último tenedor). Vivante afirma que el derecho es autónomo, porque el poseedor de buena fe ejercita un derecho propio, que no puede ser restringido o destruido en virtud de las relaciones existentes entre los anteriores poseedores y el deudor.”

URÍA (1997, p.837-838) “dice que el que adquiere un título antes del vencimiento adquiere una cosa material (el documento), a la que va inseparablemente unido un derecho (ius propter rem) que, como tal derecho, puede ejercitarse o no; adquiere, por tanto, la mera posibilidad de devenir acreedor y de ejercitar un derecho, o, si se quiere, un derecho potestativo, valiéndose del cual pueda hacer propio el crédito. Por eso, cuando el título circula, renace ex novo en cada nuevo adquirente la facultad de devenir acreedor ejercitando la pretensión contenida en el título, que no fue ejercitada por nadie todavía, y solo en el último poseedor se da la titularidad del derecho de crédito que durante la circulación estuvo latente. (Derecho autónomo). Por la autonomía, el tenedor del título valor aparece acreedor originario del obligado y no como un sucesor de quien lo precedió en la titularidad del documento, independiente del derecho de los anteriores, al que no afectan las relaciones que hayan podido existir entre deudores y los tenedores precedentes, y al que no se le pueden oponer, por tanto, las excepciones personales de éstos.”

En ese mismo sentido BEAUMONT CALLIRGOS & CASTELLARES AGUILAR (2000, p.45-46) menciona que “La autonomía significa que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias generadas por el proceso de circulación de un título valor, son independientes entre sí.”

Resulta así que cada nueva adquisición del derecho cartular es independiente de las relaciones extracartulares, fundamentales o subyacentes que puedan haber determinado las adquisiciones precedentes.

SANCHEZ CALERO (1986, p. 336) “La autonomía comienza a funcionar desde la primera transferencia posterior a la emisión y a favor de los terceros que adquirieron el título de buena fe. El derecho incorporado es autónomo en el sentido de que cuando se transmite el título corresponde al nuevo adquirente un derecho que es independiente de las relaciones de carácter personal que hubieran podido existir entre los anteriores titulares y el deudor, siempre que haya existido buena fe”.

- **Legitimación activa**

Para BEAUMONT CALLIRGOS & CASTELLARES AGUILAR (2000, p.46) “La legitimación supone, en su aspecto activo, que el titular del derecho puede exigir el cumplimiento al obligado por el solo hecho de tenerlo o para transmitir válidamente el documento.”

RAMOS PADILLA señala que “Es legitimado, el que tiene la posibilidad de hacer valer el derecho de crédito sobre la base del título, sin que necesite demostrar la real pertenencia del derecho de crédito. Debiendo tener la posesión conforme a la ley de circulación del título, y que es diversa en los títulos nominativos, en los títulos a la orden y en los títulos al portador. Si la legitimación hace referencia a los requisitos que deben concurrir en un sujeto para ejercitar un derecho, la legitimación por la posesión aplicada a los títulos valores significa que en ellos la posesión es condición indispensable para ejercitar el derecho incorporado y, en consecuencia, para exigir del deudor-emisor del título la prestación debida. La legitimación por la posesión establece la fictio iuris de que quien posee y exhibe el documento es titular del derecho, lo cual no es una aberración, sino una conquista del Derecho privado y moderno. Para Jacobi esta forma de agilizar la legitimación opera, no sólo a favor del acreedor al facilitarle y simplificarle de su obligación simplemente con probar que pagó al poseedor del título, aunque éste no fuera el titular del derecho.”

BROSETA PONT (1983, p. 544-545) manifiesta que “En primer lugar, la posesión del título es requisito que por sí mismo legitima al tenedor para exigir el cumplimiento del derecho que incorpora, en los llamados títulos al portador (títulos “anónimos” o de “legitimación pura”) y ello aun en el caso de que la posesión sea de mala fe, siempre que el deudor desconozca esta circunstancia. En segundo lugar, la posesión del título es requisito indispensable para ejercitar el derecho a él incorporado, aunque no sea por sí sola suficiente, pero no es siempre condición suficiente, en los títulos a la orden y en los títulos al portador y es necesario pero suficiente por sí sola en los títulos a la orden y en los nominativos.

RAMOS PADILLA (s.f, p. 45) añade que “En una clase de títulos, títulos al portador, la posesión legitima, sin necesidad de otra prueba, sea porque el deudor no está autorizado a investigar el derecho del poseedor, sea porque el deudor no está obligado a investigar ese derecho (títulos de legitimación puros). En otra clase de títulos, títulos a la orden, la posesión legitima, unida a una prueba relativa al derecho derivado del título y que se facilita por la fuerza legitimadora formal de ciertas cláusulas. En otra clase de títulos, finalmente, títulos directos, llamados “nominativos”, la posesión no legitima por sí misma de un modo decisivo ni aun unida a pruebas suministradas por el título mismo: es necesario completar la legitimación por medio de la inscripción en un libro del deudor (títulos-valores incompletos).”

- **Legitimación pasiva**

Para GARRIGUES (1987, p. 89, 90, 93) “La legitimación en su aspecto pasivo, consiste en que el obligado se libera de su obligación por cumplir la prestación frente al tenedor del documento, siempre que éste tenga una tenencia legítima. El artículo 16 de la ley dice que el obligado que, sin dolo o negligencia, cumple las prestaciones contenidas en el título frente al legítimo poseedor, queda liberado, aunque se trate de un titular aparente y no de la persona a quien, en el fondo, pudiera corresponder el derecho a la prestación. La posesión del título Respecto del deudor, le dispensa de toda indagación sobre los extremos recién mencionados: el deudor que paga contra la presentación del documento paga válidamente; y, a la inversa: el deudor no está obligado a la prestación si no es mediante la exhibición del título. Para evitar que pueda ser obligado a pagar dos veces, se autoriza al deudor para reclamar el título una vez que pague (títulos de restitución o rescate). Los títulos-valores son títulos de legitimación que dotan al tenedor, frente al deudor, de una apariencia jurídica, de tal suerte que el deudor puede, en cierta medida confiar en ella. Así como la posesión engendra apariencia de propiedad en las cosas, en los títulos-valores la posesión, sola o unida a ciertas cláusulas legitimadoras, engendra una apariencia de titularidad legítima a favor del poseedor del documento y esta apariencia es suficiente para el comercio jurídico. La apariencia jurídica que el título valor engendra, actúa tanto a favor del deudor, le libera de la deuda si paga al que goza de la apariencia del derecho, como a favor del acreedor, a quien asegura contra la excepción de que el deudor ha pagado al anterior acreedor después de la cesión del derecho o que ha llegado con él a un arreglo.

2.4.4.4. Concepto del pagaré

Según LEÓN, (1981, p.311) “el pagaré es un documento por el cual el firmante se compromete incondicionalmente a pagar una suma cierta de dinero a determinada persona o a su orden por el plazo especificado en el mismo”.

Para VILLEGAS (1989, p.87), el pagaré “es un título valor abstracto por el cual una persona (el librador, suscriptor o firmante) promete incondicionalmente pagar cierta suma de dinero a otra (tomador o beneficiario), en el lugar o fecha indicada en su texto”.

MESSINEO (1971, p. 381-382) dice del pagaré lo siguiente: “la estructura de la promesa unilateral obligatoria, teniendo por contenido el pago de una suma de dinero; en esto, más conforme con el tipo ordinario de título de crédito, que encierra, precisamente, la promesa de un hecho (prestación propia, o sea del mismo firmante).

Aquí la relación se celebra entre dos, o sea, entre promitente llamado emitente, y el ordenatario (tomador, endosatario o cesionario). El promitente no cuenta con el hecho ni con el patrimonio de un tercero, a fin de que se haga honor al cambial; sino que se compromete directa y exclusivamente a sí mismo y a su propio patrimonio.

Esta circunstancia determina que la emisión del pagaré es más fácil, toda vez que el emitente no tiene necesidad de presuponer una relación económica preexistente o futura para poder crear el pagaré; para ello basta la voluntad del emitente y la previsión de poder, al vencimiento, hacer honor al pagaré, pagándolo.

En opinión de SANDOVAL LÓPEZ (1983, p. 163) el pagaré es un título de crédito que contiene una prestación consistente en pagar una suma de dinero. Permanece en consecuencia a la categoría de los llamados efectos de comercio, dentro de la cual se encuentra la letra de cambio, el cheque, la carta orden de crédito, la tarjeta de crédito, etc.

Este instrumento negociable permite a una persona reconocerse deudora de otra de una cantidad determinada o determinable de dinero. Se trata de un acto jurídico unilateral que se genera por la voluntad de una sola persona que confiesa adeudar la cantidad determinada o determinable de dinero. No es como la letra de cambio, un documento que este sujeto a la aceptación; basta la declaración instrumental del suscriptor que confiesa adeudar y se obliga a pagar la cantidad de dinero, los intereses y reajustes. En esencia como título de crédito basta la declaración documental contenga las exigencias de forma y de fondo para que quede obligado el suscriptor.

MUÑOZ (1973, p. 615-616) dice del pagaré “que es un valor de contenido crediticio de dinero y por consiguiente un negocio jurídico unilateral y acto de comercio que documenta una sola declaración de contenido volitivo vinculante recepticia, dirigida a persona incierta en su creación y que como título valor es probatorio, constitutivo y dispositivo, que reúne los caracteres de literal, autónomo, abstracto, completo y con poder de legitimación, en virtud del cual una parte, librador, girador o deudor, se obliga por escrito pura y simplemente, esto es, incondicionalmente, a pagar al primer tomador, o al portador o nuevo tenedor legitimado del título, una suma de dinero determinada, puesto que el derecho del acreedor queda también incorporado al título al igual que la obligación correlativa.

Acerca de la naturaleza jurídica del pagaré, GÓMEZ LEO (1991, p. 370) anota lo siguiente:

- El pagaré cambiario es del género de los títulos de crédito; por tanto, cuenta con los caracteres esenciales comunes a todos ellos (es necesario, literal y autónomo).
- Cuenta con aptitud constitutivo-dispositivo, además de probatoria; es decir, en tanto documento, su posesión resulta condición de existencia y condición de disponibilidad del derecho en él representado.
- Pertenece a la especie de los papeles de comercio, por lo que se haya informado por el carácter completo y rígidamente formal, de formalidad tasada, comportándose como negocio abstracto, en tanto el derecho cambiario que de él deriva puede ser ejercido con prescindencia del negocio extracambiario o relación subyacente por el cual se libró o transmitió el pagaré.
- El pagaré es un título de crédito esencialmente a la orden; es decir, lleva su nombre o designación en su texto esencial: “pagaré”. En su defecto debe incluir la cláusula a la orden.

2.4.4.5. Contenido del pagaré

Con arreglo a lo previsto en el artículo 158°, inciso 158.1 de la ley de títulos valores, el pagaré debe contener:

- La denominación de pagaré: “La mención de pagaré debe registrarse en el texto del título a fin que la voluntad cambiaria, en su expresión documental, no pueda dar lugar a equivoco de ninguna naturaleza. Esto según BONFANTI & GARRONE (1982, p. 807).
- La indicación del lugar y fecha de emisión. En cuanto al lugar de emisión del pagaré. PINO DEL CARPIO (1970, p. 264) refiere que “la indicación del lugar de expedición, es un dato de solo ubicación del instrumento en el espacio, que si bien es importante no es indispensable. Y concretamente referido al pagaré, igualmente, tiene por objeto dicha ubicación, por lo que su omisión no acarrearía su inexistencia. Y concretamente referido al pagaré, igualmente tiene por objeto dicha ubicación, por lo que su omisión no acarrearía su inexistencia como en el caso del dato de la fecha”. En relación a la indicación de la fecha de emisión del pagaré Pino del Carpio asevera que “la indicación de la fecha es dato indispensable en todo instrumento, ya se trate o no

de que ella sirva de base para el cómputo de un plazo o de un término, o se trate de un simple dato destinado a ubicar al instrumento en el tiempo en que se le otorga. Pues bien, tratándose del pagaré es dato de obligada observación porque él sirve para el cómputo de su vencimiento y presentación del pagaré a la persona que debe pagarlo. Esta función de la fecha hace que su emisión afecte al instrumento, pues si falta la fecha, no hay pagaré”.

Por su parte MONTOYA MANFREDI (1982, p.454) apunta sobre la fecha de emisión del pagaré que “sirve para que no haya dudas, confusiones o equivocaciones respecto al plazo del pago, caducidad, prescripción, determinación de si existía capacidad legal al tiempo de la expedición, o para establecer las consecuencias en caso de quiebra del girador.

- Para BONFANTI & GARRONE (1982, p. 809) “La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinable de este conforme a los sistemas de actualización o reajuste de capital legalmente admitidos. Lo de promesa incondicionada indica, sin ambages, que el obligado se compromete fuera de toda condición, precisamente porque es incuestionable su decisión de someterse a esa situación típica que se ha dado en llamar “rigor cambiario”. Lo de suma determinada hace referencia a una cifra, a una cantidad expresada en números bien concretamente, sin que haga referencia a ninguna otra situación como punto de apoyo. La suma debe ser suma de dinero, de moneda, no considerándose válido el pagaré mencionado la obligación de pagar determinada cantidad de otras cosas fungibles que no sean dinero. Al respecto SOTO ALVARÉS (1994, p. 262) anota que “en el pagaré hay una promesa incondicional de pagar una suma determinada; al contener el pagaré una promesa incondicional de pago, implica que es una obligación directa del suscriptor.

Por su parte SANDOVAL LÓPEZ (1983, p. 166) afirma que “la promesa no está sujeta a condición, de pagar una suma determinada o determinable de dinero, es el objeto o contenido del título de crédito pagaré. Esto permite clasificarlo en la categoría de los efectos del comercio. Es un requisito esencial que mira al fondo de esta clase de instrumentos de suerte que si la promesa no esta sujeta a condición se refiere a otra cosa que, a una cantidad determinada o determinable de dinero, no se trata de un pagaré sino de otro tipo de título de crédito o bien de otro documento.

- El nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse el pago. Sobre el particular, SOTO ALVARÉS (1994, p.262) sostiene que “el señalamiento del nombre de la persona a la que habrá de hacerse pago, nos permite asentar que el pagaré es un título esencialmente nominativo; basta con que contenga quién es el beneficiario; el tomador o beneficiario puede transmitirlo por endoso. Por su parte SANDOVAL LÓPEZ (1983, p. 262) anota que “esta cláusula es esencial y determina la forma como el pagaré va a circular. Cuando se emite en forma nominativa será transferible por el mecanismo de la cesión de créditos; si se gira a la orden circula mediante el endoso y, en fin, girado al portador se traspasa por entrega manual.
- La indicación de su vencimiento único o de los vencimientos parciales.
- La indicación del lugar de pago y/o, en los casos previstos por el artículo 53 de la Ley de títulos valores, la forma como ha de efectuarse este. El artículo 53 de la referida ley, dicho sea de paso, versa acerca de la cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria y señala: a) en los títulos valores que contengan obligaciones de pago dinerario, podrá acordarse de que dicho pago se cumplirán mediante cargo en cuenta mantenida en una empresa del Sistema Financiero Nacional, señalando el nombre de la empresa y, en su caso el número o código de la cuenta y B) que la empresa del Sistema Financiero Nacional designada deberá contar con autorización previa del titular de la cuenta para atender el pago, sea con fondos constituidos previamente o con créditos que conceda al titular de la cuenta designada.

- El nombre, el número de DNI y la firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. Según se desprende del inciso del inciso 158.2 del artículo 158 de la Ley de Títulos Valores, el pago de la cantidad indicada en el literal c) del inciso 158.1 del artículo 158 de la mencionada ley (vale decir, el pago de una cantidad determinada de dinero o de una cantidad determinable de dinero, conforme a los sistemas de actualización o reajuste de capital legalmente admitidos) podrá señalarse como pago único, o en armadas o cuotas. En este último caso, la falta de pago de una o más de ella faculta al tenedor a dar por vencidos todos los plazos y a exigir el pago del monto total del título; o, alternatively, exigir las prestaciones pendientes en las fechas de vencimiento de cualquiera de las siguientes armadas o cuotas o, inclusive, en la fecha de la última armada o cuota, según decida libremente el tenedor. Para este efecto será necesario que se logre el correspondiente protesto o formalidad sustitutoria en oportunidad del incumplimiento de cualquiera de dichas armadas o cuotas, sin que el hecho de no haber obtenido tal protesto o formalidad sustitutoria correspondiente a las anteriores o a cada una de las armadas o cuotas afecte su derecho cambiario ni el ejercicio de las acciones derivadas del título. La cláusula a que se refiere el artículo 53 de la Ley de Títulos valores que se hubiera incorporado en estos pagarés surtirá efecto respecto a la última armada o cuota.

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, de los pagos de las armadas o cuotas deberá dejarse constancia en el mismo título, bajo responsabilidad del obligado principal o de la empresa del Sistema Financiero Nacional que verifique tales pagos, sin perjuicio de su obligación de expedir la respectiva constancia o recibo de tales pagos. Así lo establece el inciso 158.3 del artículo 158 de la Ley de Títulos valores.

En relación al contenido del pagaré, debe tenerse presente, además lo dispuesto en el artículo 159 de la Ley de Títulos valores, según el cual en el pagaré podrá dejarse constancia de:

- La causa que le dio origen a su emisión. Según PINO DEL CARPIO (1970, p. 266) “ a diferencia de lo que sucede en una letra de cambio, en la que no puede consignarse la causa o razón de su emisión, por ser un instrumento cambial absolutamente autónomo y diferente del acto jurídico que le haya dado origen, en el pagaré sí puede indicarse la causa o razón de su emisión, porque normalmente, esta tiene lugar con motivo de un adeudo que no puede cancelarse por el momento; de manera que no es, como la cambial, un instrumento autónomo e independiente destinado a circular, sino tan solo una promesa de pago realizable en una fecha determinada.
- Sobre el particular, MONTOYA MANFREDI (1982, p. 458) refiere que en cuanto a la causa, debe de recordarse al respecto que el título valor abstracto es aquel que no se expresa en el documento el hecho generador de la obligación, o que, si la expresa, la enunciación es irrelevante respecto al valor obligatorio del documento, el que resulta totalmente independizado de la relación subyacente o fundamental.

En cambio, en los títulos valores causales, la indicación de la causa aparece en el documento, bien en forma completa, bien referida a un instrumento diferente que contiene la enunciación. En esta clase de títulos, se debe considerar tanto las reglas referentes a la obligación documental, como lo concerniente a la causa mencionada en el título.

Dado a que las indicaciones en el pagaré a que nos estamos refiriendo son facultativas, tendríamos que admitir que, de insertarse vincularían el derecho cartular a la operación fundamental.

- La tasa de interés compensatorio que devengará hasta su vencimiento; así como las tasas de interés compensatorio y moratorio para el periodo de mora, de acuerdo al artículo 51° de la Ley de Títulos Valores aplicándose en caso contrario referencias causales. El citado artículo 51° de la referida ley cartular regula la cláusula sobre el pago de y reajustes prescribe: A) que cualquiera que sea la

naturaleza del título valor que contenga una obligación de pago dinerario, podrá acordarse las tasas de interés compensatoria y moratoria y/o reajustes y comisiones permitidas por la ley, que regirán durante el periodo de mora; B) que en su defecto, durante dicho periodo será aplicable el interés legal; C) que si la ley o la naturaleza del título valor lo permiten, en aquellos que representen pago de suma de dinero, podrá acordarse interese compensatorios, reajustes u otra clase de contraprestaciones que admita la ley, que regirá durante el periodo comprendido entre su emisión y vencimiento; D) que si ello no consta el texto del título y en los casos en que la ley no admita tal acuerdo, el título valor tendrá al día de su vencimiento su valor nominal, sin que proceda el pago de intereses, reajustes u otras contraprestaciones hasta dicho día.

2.4.4.6. Formas del vencimiento del pagaré

El vencimiento del pagaré puede indicarse solamente de las siguientes formas previstas en el artículo 160° de la Ley de Títulos Valores:

- A fecha o fechas fijas de vencimiento, según se trata de pago único de su importe o de pago en armadas o cuotas.
- A la vista.
- A cierto plazo desde su emisión, según se trate de pago único de su importe o de pago en armadas o cuotas.

2.4.4.7. Obligaciones del emitente del pagaré

En cuanto a las obligaciones del emitente del pagaré, cabe señalar que conforme lo dispone el artículo 161° de la Ley de Títulos valores, el emitente en su calidad de obligado principal asume las mismas obligaciones que el aceptante de una letra de cambio; y el tenedor tiene acción directa contra él y sus garantes.

Sobre el particular, debe tenerse presente lo dispuesto en el inciso 127.1 del artículo 127 de la Ley de Títulos Valores, el cual establece que, por la aceptación, el girado se obliga a pagar la letra de cambio al vencimiento, asumiendo la calidad de obligado principal.

MONTOYA MANFREDI (1982, p. 459) apunta que el girador del pagaré a la orden ocupa la misma posición jurídica que la del aceptante de la letra de cambio, o sea, es el obligado principal al pago. De no cumplir con efectuarlo, procede contra él la acción cambiaria directa, así como contra su avalista, si lo tuviere. Como en esta clase de documentos no hay girado, no cabe aceptación. La promesa de pago radica en quien originó el título valor. el tenedor del documento se dirigirá contra el girado en primer término y, en caso de no obtener el pago, podrá hacer valer la acción de regreso contra los endosantes, si los hubiere.

Al respecto, PINO DEL CARPIO (1970, p. 267) enseña que en el pagaré “el emitente tiene la misma calidad que el aceptante de la letra. Es pues el obligado principal, por tanto, puede ser pasible de la acción directa. El mencionado jurista nacional agrega que “el avalista emitente, al igual que en la letra de cambio respecto del aceptante, resulta ser obligado principal en defecto del pago del pagaré por el emitente, y por tanto como este, es pasible de la acción cambiaria directa, la que en virtud de la solidaridad, puede incoarse comprendiéndose a los dos en la acción, o solo al emitente o solo al avalista, sin observarse orden alguno, pues eso queda a arbitrio del tenedor quien puede actuar como mejor convenga a sus intereses”. Pino termina diciendo que “los títulos valores de los que forman parte el pagaré, están destinados a la circulación; por tanto, puede endosársele igual que la letra de cambio. Pues

bien, si hay endosantes y avalistas de estos, serían unos y otros los obligados subsidiarios, y como tales serían pasibles de acción de regreso”.

2.4.4.8. Aplicación al pagaré de la normatividad correspondiente a la letra de cambio

A tenor de lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Títulos Valores, son de aplicación al pagaré, en cuanto no resulten incompatibles con su naturaleza, las disposiciones referidas a la letra de cambio. por otro lado, deberá tenerse presente, en cuanto sea pertinente, la normatividad que regula a la letra de cambio, es decir aquella contenida en la Sección primera del libro segundo de la Ley de Títulos Valores.

Sobre el particular ARGIERI (1982, p.311-312) señala que “si bien el pagaré es asimilado en principio a la letra de cambio, se diferencia de esta en que el pagaré es el propio emitente quien en forma directa e incondicional se compromete a pagar la suma fijada en el instrumento, mientras que en la letra de cambio el emitente ordena a un tercero el pago, quedando el obligado accesorio. Sin embargo, ambos participan de iguales caracteres jurídicos: son negocios jurídicos abstractos, con finalidad esencialmente circulatoria, donde se da la presencia de literalidad, autonomía y necesidad, propios del título de crédito.

2.4.4.9. El pago y el protesto

Para VILLANUEVA HARO (2006, p. p. 107), “el pago es el mecanismo por el cual se cumple con las obligaciones que pueda contener el título valor; cabe señalar que el tenedor del título no se puede rehusar a recibir un pago parcial por el cual le debe entregar al obligado un recibo; también se debe incorporar en el mismo título valor o en hoja adherida a él que se ha efectuado un pago parcial y, además, entregar una copia certificada notarial con la constancia de haberse pago una parte de la obligación.

Respecto a la fecha, se toma la que el título valor indique como vencimiento; si se paga antes de la fecha quedará bajo la responsabilidad del obligado a pagar, mientras que si se paga a la fecha quedará librado de su responsabilidad con la posibilidad de exigir el título cancelado o alguna constancia, salvo que se haya procedido a dolo o tenga alguna culpa inexcusable. Si se paga después de la fecha indicada, quedará obligado a pagar también la mora por los días no pagados.

El lugar de pago es el designado en título, aunque ya no se resida en el lugar, excepto que se notifique notarialmente; asimismo el lugar puede ser una empresa del sistema financiero nacional en la cual solo se debe presentar el título valor para que la empresa pague con los fondos de la cuenta. Si no se especifica lugar, se sobreentenderá el domicilio del obligado principal.

El pago se puede dar en moneda extranjera solo si se presenta la cláusula pago en moneda extranjera, según se anotó atrás; el tipo de cambio se hará según la publicación del Diario Oficial; sin embargo, si el pago se da después del vencimiento, dependerá del tenedor efectuar el pago con el tipo de cambio a la fecha.

Por otro lado, algo que debe ser tomado en cuenta cuando el obligado no realiza el pago de la obligación contenida en el título valor, es el protesto del mismo, el que es definido como “un acto notarial o, en su defecto, diligencia judicial que tiene por objeto dejar constancia fehaciente, en forma indubitable, del incumplimiento de las obligaciones contenidas de dicho título valor a su vencimiento”.

Se añade que se efectuará como diligencia judicial cuando no exista notario público en el lugar respectivo.

El lugar del protesto será el mismo que se acordó para el pago, aunque ya no esté allí el obligado; si cambió de domicilio y esto no se sabe será, entonces, en un lugar que se exprese en el título valor; sin

embargo, si esto tampoco ocurre, se notificará en la Cámara de Comercio Provincial que corresponda al lugar y, si tampoco esto existe, el fedatario dejará constancia y se continuará con el proceso.

Es preciso indicar que cada título valor tiene un plazo específico señalado por la ley, el que debe ser cumplido para que el título valor no se perjudique y por consiguiente pierda su mérito ejecutivo.

Respecto a la obligación de protestar el título valor, el artículo 71° de la Ley de títulos valores- Ley 27287 señala que:

- En los títulos valores sujetos a protesto, ni la incapacidad o la insolvencia decretada, o la muerte del obligado principal dispensan de la obligación de formalizar el protesto; salvo que se haya liberado de ello según el Artículo 81°.
- Aun cuando se haya liberado del protesto conforme a lo señalado en el párrafo anterior, el tenedor podrá obtener el protesto, siendo en ese caso de su cuenta los gastos respectivos.
- Si ha muerto la persona a quien el título debe ser presentado, el protesto que se realice contra ésta surtirá plenos efectos legales inclusive contra sus herederos.
- El protesto realizado contra el obligado principal o, en su caso, contra el girado no aceptante de la Letra de Cambio libera de la obligación de hacerlo contra los demás obligados. Es facultativo hacerlo contra dichos obligados solidarios y/o garantes.
Con ello se indica la obligación legal para realizar el protesto, a menos que en el título valor se haya pactado la cláusula de “no protesto”.

En cuanto al plazo para protestar un título valor por falta de pago de los títulos valores en general, ZAVALA (2017, p. 2) nos indica que “debe efectuarse dentro de los 15 días posteriores a su vencimiento (en los primeros ocho días se lleva el título valor al notario y éste efectúa el protesto en los siete días siguientes). Si los días ocho o 15 caen inhábiles (sábado, domingo o feriado) tales plazos se amplían hasta el día hábil siguiente.

El protesto debe efectuarse ante el notario del lugar de pago (los notarios tienen jurisdicción provincial). Cuando en el título valor no se ha consignado domicilio para el pago o éste fuese inexistente, el protesto se efectuará mediante notificación a la cámara de comercio del lugar.

El notario notificará el protesto al deudor del título valor y también al garante o fiador (esto último es facultativo). En la notificación del protesto, el notario indicará el número del protesto, lugar y fecha de la notificación, nombre o razón social del deudor, domicilio donde se dirige la notificación, clase de título valor, fecha de emisión, vencimiento, importe del TV impago, persona que solicita el protesto, etc. Si el deudor no concurre a la oficina del notario o concurriendo no paga lo que debe, el notario elabora el acta de protesto y estampa el sello “documento protestado”, el que es devuelto a quien solicitó el protesto, para efectos de su cobro judicial.

Los notarios y jueces de paz que protestan títulos valores comunican tal diligencia a las cámaras de comercio provinciales (que llevan el registro a nivel provincial). Las cámaras provinciales dentro de los cinco días del mes siguiente, comunican los protestos y moras a la Cámara de Comercio de Lima, que por mandato de la Ley N° 27287 lleva el Registro Nacional de Protestos y Moras, información que a su vez se traslada a las centrales de riesgo, cuyos antecedentes sirven para calificar a la persona natural o jurídica que solicita un crédito a los bancos o a las empresas que exigen judicialmente el pago de un título valor en la vía ejecutiva, caso en la cual el juez notifica al deudor que pague su deuda, caso contrario, en caso se haya interpuesto una medida cautelar de embargo en forma de inscripción u otra

medida cautelar que más le convenga a la entidad, sobre los bienes que el deudor posea¹⁰. Se requiere acompañar a la demanda el original del título valor protestado y en el caso del título valor en mora, que la mora haya sido inscrita previamente en la cámara de comercio del lugar, a fin de no tener problemas al demandar judicialmente el título valor impago.”

2.4.4.10. Acciones Cambiarias

En opinión de BACCARIO CASTAÑEIRA, (1980, p.166) “es el poder jurídico que se tiene, para acudir al órgano jurisdiccional, a los efectos de obtener el cumplimiento de la obligación asumida en un título cambiario”. Dicho autor precisa que “La acción es cambiaria cuando se trata de una de las que puede ejercitar el portador de un título cambiario, contra los obligados al pago, sobre la base y en razón de dicho título”.

VIGIL OLIVEROS & UCHUYPUMA TUPIA (2018, p. 111) anota que “Como podemos apreciar en el párrafo anterior, la acción cambiaria es la facultad que tiene el tenedor para exigir al deudor el pago de la obligación contenida en un título valor a través de la vía judicial, esto quiere decir que el acreedor del título podrá pedir tutela jurisdiccional (intervención del estado) para ser exigible el monto consignado en el título cambiario.

En ese mismo sentido, se debe señalar que la acción cambiaria tiene dos connotaciones: una sustancial y la otra procesal. La primera está vinculada a la pretensión cambiaria, esto quiere decir el derecho sustancial del tenedor de obtener el pago; mientras que la segunda responde a la intervención del estado, quien tutelaré la pretensión jurídica material interpuesta por el tenedor.

En ese mismo orden de ideas, mientras el tenedor mantenga la relación cambiaria, podrá exigir la obligación cartular en el Proceso Único de Ejecución, de lo contrario, tendrá que acudir a otra vía judicial.

En el Perú esta figura es recogida en la Nueva Ley General de Títulos Valores en los artículos 90°, 91°, 92°, 93° y 94°”.

A. Tipos de acciones cambiarias

Según la doctrina existen tres tipos de acciones cambiarias: la acción directa, la acción de regreso y la acción de ulterior regreso.

- **Acción cambiaria directa**

Según LEGON (1981, p 201) “la acción cambiaria directa es la que se ejercita contra el aceptante y sus avalistas”.

En ese mismo sentido, se debe señalar que esta acción la ejerce el tenedor del título valor hacia el aceptante (o librador) y sus avalistas. La acción cambiaria directa es aquella que reviste de legitimidad el reclamo del acreedor hacia su deudor y avalista.

HUMBOLDT (1968, p.166) afirma que “la acción cambiaria directa es la facultad concedida al tenedor legítimo de la cambial (acreedor cambiario) para interponer un proceso ejecutivo en contra del aceptante (deudor cambiario y/o su avalista) para conseguir la prestación debida, realizando los bienes del deudor”.

¹⁰ En caso iniciado un proceso judicial y declarado firme y consentido el auto final sin el deudor no cumpla con su obligación, se ingresará a la etapa de la ejecución forzada donde se llevará a cabo el remate judicial del bien embargado o secuestrado.

La acción cambiaria directa responde a la relación directa entre acreedor, deudor y/o avalista, ya que la relación cambiaria nació con estos tres intervinientes, y es por esta razón del nombre.

En ese orden de ideas, la acción cambial directa es aquella pretensión del acreedor cambiario de hacer exigible el cobro del monto consignado en el título a su deudor principal o avalista, quienes responderán de manera solidaria, esto quiere decir que el tenedor podrá exigir el pago a cualquiera de ellos, de manera indistinta.

Sobre el particular, SUPINO & DE SEMO (1950, citado por VIGIL OLIVEROS & UCHUYPUMA TUPIA (2018, p. 111)) apuntan que: “Si la acción directa se ejercita por el portador (último endosatario), contra el aceptante o su avalista o contra ambos, comprende: 1° el monto de la letra no pagada, con los intereses, en caso de haberse indicado; 2° los intereses a partir del vencimiento, según la tasa indicada en el título [...], o a falta de ella, según la tasa legal; 3° los gastos del protesto, avisos dados, etc. Estas son todas consecuencias de la falta de pago por parte del aceptante, y es justo ponerlas a su cargo [...]. En cambio si la acción directa se ejercita por un obligado en regreso (aunque sea el librador), que pagó la letra, tendrá por objeto: 1° la suma íntegra desembolsada; 2° los intereses sobre esa suma de acuerdo a la tasa indicada en el título [...] o a falta de ella, según la tasa legal al día del desembolso de la suma cambiaria por parte del obligado en regreso; 3° los gastos efectuados...” (Supino & De Semo, 1950, p.560-561).

Al respecto, se debe señalar que hay dos formas de ejercitar la acción directa: por el portador y el obligado de regreso. La primera es realizada por el último endosatario contra el aceptante y/o avalista, lo que podrá reclamar es el monto de la letra no pagada con los intereses respectivos; los intereses a partir del vencimiento, según la tasa indicada en el título, en caso no se haya estipulado, se aplicará el interés legal, entre otros.

- **Acción de regreso**

Según GUZMÁN (1992, p.20) “se denomina acción cambiaria de regreso la que concede contra los responsables subsidiarios del pago de la cambial, girador, endosante, así como los avalistas de estos y aquellos”.

Del párrafo anterior se desprende que la acción de regreso va dirigida contra los responsables subsidiarios, esto quiere decir, a todos los intervinientes del título valor, con excepción del acreedor y/o deudor principal, ya que se configura la responsabilidad solidaria.

“El regreso no consiste sino en el uso que hace el tenedor de la letra de la garantía que asumen el librador, el avalista y los endosantes en virtud de sus respectivas promesas indirectas de pago; y su nombre proviene sencillamente de que, al dirigirse el tenedor de la letra contra el librador, los endosantes, o los avalistas, procede en sentido inverso al curso normal de aquella, volviendo o regresando sobre personas que le preceden en la tenencia y firma del documento...” URÍA (1997, p. 882).

VIGIL OLIVEROS & UCHUYPUMA TUPIA (2018, p.112) nos dicen que “En ese mismo sentido, se puede afirmar que esta acción es ejercida por el tenedor del título cambiario contra el librador, el avalista y los endosantes, ya que, al firmar el documento, los intervinientes realizaron promesas indirectas de pago, por lo cual, deberán reembolsar al tenedor por el pago de la obligación. Esta vía se aplica en sentido inverso, esto quiere decir, que se regresa sobre las personas que anteriormente tenían y firmaron el título valor, con excepción del acreedor y/o deudor principal.”

- **Acción de ulterior regreso**

Según BONFANTI & GARRONE (1982, p. 486) “la acción de ulterior regreso (o de reembolso) es una mera forma o modalidad de la más genérica acción de regreso. Se reserva esa designación para el obligado de regreso que pagó y acciona a su vez contra los obligados que le preceden en la cadena cambiaria”.

Continúan VIGIL OLIVEROS & UCHUYPUMA TUPIA (2018, p. 112) anotando que “La presente acción también es denominada reembolso, ya que quien paga la obligación podrá ejercitar repetición contra los obligados que lo preceden en el nexo cambiario, los cuales no quedan liberados. También debemos señalar que la acción de ulterior regreso es dependiente y se da en consecuencia de la acción de regreso, esto quiere decir que para que exista la presente acción, se configurará primero el derecho de regreso. Además, que se podrá repetir con cualquiera de los intervinientes del título valor, incluso el deudor y/o acreedor principal, siempre y cuando se encuentren en la cadena cambiaria.”

B. Requisitos para ejercer las acciones cambiarias

En el artículo 91° de la nueva Ley General de Títulos Valores, menciona cuales son los requisitos para ejercer las acciones cambiarias, las cuales son:

- Que los títulos valores hayan sido protestados.
- Si se trata de títulos valores no sujetos a protesto, pero si a una formalidad sustitutoria de este, haber obtenido constancia de la falta de cumplimiento de la obligación.
- Tratándose de títulos valores no sujetos a protesto, cuyo plazo está vencido o resulta exigible la obligación según texto del documento, o de la constancia de inscripción y titularidad que expida la Institución de Compensación y Liquidación de Valores, tratándose de valores anotados en cuenta.

Al respecto, VIGIL OLIVEROS & UCHUYPUMA TUPIA (2018, p. 112), analizan la primera premisa, indicando que los títulos hayan sido protestados, el cual responde a un acto jurídico mediante el cual se hace constar fehacientemente que el deudor se niega a cumplir con el pago de la obligación del título valor. El protesto es un medio de prueba para el tenedor, ya que al encontrarse insatisfecho con el accionar del deudor, irá por la vía ejecutiva para exigir el cumplimiento, esta figura reviste al título cambiario de mérito ejecutivo.

En otro orden de ideas, el segundo supuesto establece que los títulos valores no sujetos a protesto, deberán tener otra formalidad con la finalidad de acreditar el incumplimiento de la obligación, el cual será una constancia, y así poseer el mérito ejecutivo.

Por otro lado, la tercera premisa responde a los títulos valores no sujetos a protesto, ni a formalidad sustitutoria, en este supuesto el acreedor deberá comunicar a la Cámara de Comercio Provincial para la inscripción en el registro de protestos, con la finalidad de ejercitar las acciones cambiarias derivadas del título cartular.

Al momento de ir a la vía judicial el legítimo tenedor deberá acompañar a la demanda la constancia de haber informado a la Cámara de Comercio, de lo contrario, será declarado improcedente, al no tener mérito ejecutivo.

Cabe recordar que mientras el título valor tenga la acción cambiaria, el tenedor podrá exigir el cumplimiento por el Proceso Único de Ejecución, ya que se evalúa el mérito ejecutivo.

2.4.5. Proceso único de ejecución

2.4.5.1. Evolución Histórica

El proceso único de ejecución tal y como lo conocemos actualmente, ha tenido que pasar por diversos momentos. En este sentido, debemos señalar que estuvo regulada por primera vez por El Código de Enjuiciamiento Civiles de 1852. ROMERO (1924, p. 441-443) nos dice al respecto nos comenta que el juicio ejecutivo tal como estaba regulado en la ley antes mencionada, era entrampado, complicado y lento.

Este autor menciona que los grandes rasgos del trámite del juicio ejecutivo eran:

- Presentada la demanda – entiéndase adjuntando un título que apareje ejecución – el juez dictaba un auto de solvendo con la finalidad que el ejecutado pagara la suma adeudada dentro del tercero día bajo apercibimiento de embargo.
- Durante dicho plazo, el ejecutado podía formular tres excepciones: jurisdicción, de personería y demanda inoficiosa. De dicha excepción se corría traslado por tres días. Se abría la causa a prueba por ocho días, los cuales eran prorrogables.
- Vencido dicho plazo, se expedía un auto resolutorio con fuerza de definitivo, el cual podía ser apelado en ambos efectos y contra lo resuelto en la Sala Superior – de ser el caso – se podía recurrir al recurso extraordinario de nulidad si la cuantía del caso lo permitía.
- Culminado todo este ritual, el ejecutado tenía la opción de tachar el mérito ejecutivo del título contradiciendo el requerimiento de pago, contradicción que se resolvía con un auto interlocutorio, el cual era apelable en ambos efectos y susceptible de motivar otro recurso extraordinario de nulidad.
- Hasta este momento del proceso, el embargo no se trababa sin que el acreedor pidiera que se librara mandamiento en forma y sólo entonces se procedía a la traba.
- El juez resolvería dicha oposición mediante la denominada sentencia de transa y remate, la cual era susceptible de recurso de apelación, e inclusive del recurso extraordinario de nulidad.
- Posterior a todo ello, se procedía a tasar los bienes y verificado todos los incidentes que se podía generar de dicho trámite y realizado el remate de los bienes, el adjudicatario de los bienes procedía a consignar el importe producto del remate, sin embargo, dicho importe no sería entregado al ejecutante en tanto no adjuntase fianza suficiente por las resultas del juicio ordinario que se propusiera posteriormente.”

Posteriormente al Código de Enjuiciamiento Civiles de 1852, como menciona CASASSA CASANOVA, (2011, p. 55) “entró en vigencia la Ley del 28 de septiembre de 1896, donde se aportaron notables cambios a la estructura original del juicio ejecutivo del Código de 1852. Es así que esta ley dispuso que el auto de solvendo mandara pagar dentro de las veinticuatro horas – ya no tres días – de notificado, y que, no verificándose el pago, sin necesidad de mandamiento previo, se trabara embargo y

que no se admitiera recurso alguno del ejecutado en tanto no estuviera trabado el embargo. Salvo estas modificaciones el procedimiento se mantuvo.

Con el Código de Procedimientos Civiles de 1912, el procedimiento del juicio ejecutivo cambió de la siguiente manera:

- Presentada la demanda acompañada del título, el juez debía de calificarla y de encontrarse arreglada a ley, procedía a expedir el auto de pago, a fin de que el ejecutado pagara la suma demandada dentro del día siguiente, bajo apercibimiento de embargo.
- Contra este auto de pago – inicialmente según las reglas del Código de Procedimiento Civiles, procedía interponer recurso de apelación o el de reposición. La apelación sería concedida en ambos efectos, y procedería el recurso de nulidad en tanto la cuantía de lo demandado lo permitiese. El Decreto Ley 20236 modifica esta posibilidad y limita únicamente al recurso de apelación a favor del ejecutante que ha visto desestimada su pretensión.
- El ejecutado podía formular oposición en un plazo de seis días y en este caso se podía utilizar cualquier argumento para cuestionar la ejecución, ya que no se limitaba los supuestos de defensa. Únicamente existía limitación en los casos de ejecución para el pago de letras de cambio, pagarés y vales a la orden o cheques en sentido que el ejecutado no podía deducir otras excepciones que no fueran las de incompetencia, falta de personería y las que se apoyaban en leyes especiales sobre esta clase de títulos o en las relaciones personales con el ejecutante. En este caso, la oposición no se ventilaba en cuaderno aparte, pues la oposición se consideraba como un acto del proceso ejecutivo.
- Expirados los seis días para interponer oposición sin haberse formulado; o vencido el término probatorio el Juez pronunciaría sentencia dentro de cinco días. Contra esta sentencia procedía el recurso de apelación, el cual se concedía en ambos efectos, y de ser el caso, contra lo resuelto por la Corte Superior, si el importe demandado superaba los sesenta sueldos mínimos vitales procedía el recurso extraordinario de nulidad.
- Contra lo resuelto en definitiva en este proceso, podía ser revisado posteriormente – en el plazo de dos meses - en el entonces denominado juicio contradictorio.

Posteriormente, entró en vigencia Código Procesal Civil de 1993, donde se cambian diversos actos ejecutivos:

- Presentada la demanda el juez calificará que la misma cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 424° y 425° del Código Procesal Civil y que de otro lado el título ejecutivo reúna los requisitos establecidos por ley, con lo cual el juez de ver que todos estos elementos concurran expedirá un mandato ejecutivo.
- El mandato ejecutivo contendrá la orden de pago – sin que se especifique plazo – para que el ejecutado cumpla con su obligación, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Recordemos que en nuestro Código Procesal Civil el concepto de ejecución forzada viene asociada al remate y la adjudicación.
- El mandato ejecutivo contendrá la orden de pago – sin que se especifique plazo – para que el ejecutado cumpla con su obligación, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.

Recordemos que en nuestro Código Procesal Civil el concepto de ejecución forzada viene asociada al remate y la adjudicación.

- Contra el mandato ejecutivo se formula contradicción en un plazo de cinco días. Esta contradicción procedía solamente por los supuestos taxativamente establecidos en la norma, es decir: Nulidad formal o falsedad del título, inexigibilidad de la obligación o iliquidez, extinción de la obligación y excepciones y defensas previas. Si se proponía un supuesto diferente a los antes detallados, la contradicción sería rechazada liminarmente. Sólo procedía ofrecer como medios de prueba los documentos, la declaración de parte y la pericia.
- El ejecutante podía solicitar al Juez el aseguramiento de la ejecución aplicando para tal efecto lo previsto en el Sub Capítulo I del Capítulo II del Título IV de la sección Quinta del Código Procesal Civil en lo que resultaba permanente, es decir iniciar medidas cautelares para futura ejecución forzada.
- Absuelto o no que hubiera sido el traslado a la absolución de la contradicción – tres días – se convocaba a una audiencia única para que se proceda a sanear el proceso, llegar a una conciliación – de ser posible – y en caso de no llegar a una sanear las pruebas ofrecidas.
- Contra dicha sentencia procedía recurso de apelación, la cual se concedería con efecto suspensivo, y de ser el caso, contra la resolución de vista emitida por la Corte Superior podía ser susceptible del recurso de casación¹¹.
- Contra lo resuelto en definitivo, no procede formular algún proceso revisorio ya que se le ha otorgado calidad de cosa juzgada a lo resuelto en este tipo de procesos.
- Para terminar ya con la evolución del proceso ejecutivo llegamos al 28 de junio del 2008, donde se publicó en el Diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 1069 y el cual trajo diversos cambios al proceso de ejecución por obligación de dar suma de dinero.”

Desde el punto de vista de SEVILLA AGURTO (2016, p. 53) “Uno de los cambios que nuestro legislador originó con el Decreto Legislativo N° 1069 fue la unificación del proceso de ejecución, el propio legislador señaló que: “en cuanto a los procesos de ejecución cabe anotar, que no existe justificación racional para dar un tratamiento distinto a los títulos ejecutivos, cuando la única diferenciaciones su origen, esto es, de naturaleza judicial o extrajudicial; sin que ello obligue a una tramitación distinta con plazos diferentes, esquemas distintos multiplicando innecesariamente el número de procesos, lo que provoca dispersión, confusión y costos de oportunidad.

Antes del Decreto Legislativo N° 1069 en nuestro proceso civil existían tres clases de procesos de ejecución: I) el llamado proceso ejecutivo en el cual se ejecutaban los títulos de naturaleza extrajudicial que se subdividía en ejecución de obligación de dar suma de dinero, ejecución de dar bien mueble determinado, ejecución de hacer y ejecución de no hacer; II) el proceso de ejecución de resoluciones judiciales donde –obviamente– se ejecutaban aquellas resoluciones judiciales que son pasibles de ejecución como las sentencias condenatorias, autos que homologan o aprueban las transacciones o las condiciones donde las prestaciones consisten en una prestación pasible de ejecución los laudos arbitrales, etc., y; III) el proceso de ejecución de garantías donde la mayor parte de nuestra jurisprudencia consideraba que se trataba de una acción- rectius pretensión– real.

¹¹ Siempre y cuando se cumplieran los requisitos que exige este recurso extraordinario.

Con la modificación se esclareció que todo proceso de ejecución debe iniciarse con un título ejecutivo y, por ende, no se creen títulos ejecutivos fictos que la ley no los ha establecido como tales. La intención del legislador se encuentra plenamente identificada en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 1069, la cual hasta la fecha muchos de nuestros operadores jurídicos desconocen.”

2.4.5.2. Concepto

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.11) define al proceso de ejecución como “aquella actividad con la cual los órganos judiciales tratan de poner en existencia coactivamente un resultado práctico, equivalente a aquel que habría debido producir otro sujeto, en cumplimiento de una obligación jurídica. es pues el medio por el cual el orden jurídico reacciona ante la transgresión de una regla jurídica concreta, de la cual surge la obligación de un determinado comportamiento.”

MORA G. (1973, p.37) propone la siguiente definición de proceso ejecutivo: “proceso de ejecución o de ejecución forzosa es la actividad procesal jurídicamente regulada, mediante la cual el acreedor fundamentándose en la existencia de un título documental que hace plena prueba contra el deudor, demanda la tutela del órgano jurisdiccional del Estado a fin de que este coactivamente obligue al deudor al cumplimiento de una obligación insatisfecha.”

Según DONATO (1997, p.53) “el proceso ejecutivo, a diferencia de los de conocimiento, no tiene por objeto la declaración de derechos dudosos o controvertidos, sino simplemente la realización de los que estén establecidos por resoluciones judiciales o por títulos que el legislador prevé, presumiendo existente un crédito en virtud de la peculiar modalidad que reviste al documento que lo comprueba. La eventual materia legítima no se halla representada por el derecho y sus connotaciones del “ser”, “validez”, o “eficacia”, sino y nada más que por la validez y eficacia del título (documento) en cuya virtud se lo ha promovido. Es, por lo tanto, un procedimiento para hacer efectivo un crédito que viene ya establecido o determinado en el documento, con el que se procede ejecutivamente, es decir, a ejecutar, no a discutir ni a declarar.”

PALACIO (1994, p.331-333) señala que el juicio ejecutivo es un proceso especial, sumario en sentido estricto y de ejecución, cuyo objeto consiste en una pretensión tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación documentada en alguno de los títulos extrajudiciales (convencionales o administrativos) que, en razón de su forma y de su contenido, autorizan a presumir certeza del derecho del acreedor.

Indica, además, que la sumariedad del juicio ejecutivo está dada por la circunstancia de que, en tanto el conocimiento judicial debe circunscribirse, en caso de oposición a la pretensión, a un número limitado de defensas, aquel no configura vía idónea para el examen y solución integral del conflicto suscitado a raíz del incumplimiento de la obligación cuyo cobro se persigue, de modo que la sentencia mediante la cual culmina sólo adquiere, en principio, eficacia de cosa juzgada en sentido formal. Finalmente, es el juicio ejecutivo un proceso de ejecución por cuanto : 1) su finalidad no consiste en lograr un pronunciamiento judicial que declare la existencia o inexistencia de un derecho sustancial incierto, sino en obtener la satisfacción de un crédito que la ley presume existente en virtud de la peculiar modalidad que reviste el documento que lo comprueba; 2) A diferencia de lo que ocurre, en general, con las pretensiones de conocimiento, el efecto inmediato de la interposición de la pretensión ejecutiva, previo examen de la idoneidad del título en que se funda, consiste en un acto conminatorio (intimación al pago) y, subsidiariamente en un acto coactivo sobre el patrimonio del deudor (embargo).

2.4.5.3. Legitimación en el proceso de ejecución

Para ALVAREZ JULIA, NEUSS, & y WAGNER (1990, p. 352-353) “La legitimación procesal de las partes debe resultar de la coincidencia entre quién deduce la acción (**legitimatío ad causam** activa) y quien figura en el título como acreedor y, también de la coincidencia de la persona frente a quien deduce la acción y quien figura, también en el título como deudor (**legitimatío ad causam** pasiva).”

RAMOS MENDEZ (1992, p.1124) indica al respecto que “La legitimación activa y pasiva vienen determinadas por el propio título. Desde el punto de vista activo, la legitimación viene ligada básicamente a la tenencia del título en aquellos que son transmisibles por naturaleza. Desde el punto de vista pasivo, el ejecutado será la persona que resulte deudor según el título. En ambos casos, es posible promover o dirigir la ejecución contra los sucesores o causahabientes de las personas que aparecen como legitimadas en el título, justificando tal extremo”.

En ese mismo sentido MONTERO AROCA & FLORS MATIES (2004, p.398) manifiestan que “la regla general es que la legitimación corresponderá a quienes aparezcan designados como acreedor y deudor en el propio título ejecutivo (...), lo que responde a que la posición habilitante para solicitar o soportar una ejecución no puede descansar en la mera afirmación de la titularidad de un derecho o de una obligación, sino en su constancia documentada en el título que lleve aparejada aquella consecuencia. Pero hay casos en que la ejecución puede realizarse por o dirigirse frente a persona que no aparezca en el título, lo que puede obedecer a fenómenos de sucesión universal o particular, o a vínculos jurídicos de origen legal o contractual determinantes de la extensión de la responsabilidad a otras personas, o la afección directa de determinados bienes al cumplimiento de ciertas obligaciones.”

Finalmente, HINOSTROZA MINGUEZ (2017, p.123-124) señala que el nuestro código civil regula la legitimación en el proceso de ejecución de la siguiente manera:

- “Están legitimados para promover ejecución quien en el título ejecutivo tiene reconocido un derecho a su favor, contra aquél que en el mismo tiene la calidad de obligado y, en su caso, el constituyente de la garantía del bien afectado, en calidad de litisconsorcio necesario (art. 690°-primer párrafo-del C.P.C.)
- Cuando la ejecución pueda afectar el derecho de tercero, se debe notificar a éste con el mandato de ejecución (art. 690°-último párrafo-del C.P.C.).
- La intervención de tercero se sujetará a lo dispuesto en el artículo 101° del Código Procesal Civil (art. 690°-último párrafo-del C.P.C.). El artículo 101° del código procesal civil, a que se hace referencia, versa sobre los requisitos y el trámite común de las intervenciones de terceros en el proceso. Así, pues, dicho numeral prescribe: 1) Que los terceros deben invocar interés legítimo; 2) Que la solicitud (de intervención del tercero en el proceso) tendrá la formalidad prevista en la demanda (en los art. 424° y 425° del C.P.C), en lo que fuera aplicable, debiendo acompañarse los medios probatorios correspondientes; 3) Que el Juez declarará la procedencia o denegará de plano el pedido de intervención (del tercero); 4) Que en el primer caso (declaración de procedencia del pedido de intervención del tercero en el proceso) dará curso a las peticiones del tercero legitimado; 5) Que los intervinientes se incorporan al proceso, en el estado que este se halle al momento de su intervención.
- Si se desconociera el domicilio del tercero (al que pudiere afectar la ejecución), se procederá conforme a lo previsto en el artículo 435° del Código Procesal Civil (art. 690°-in fine- del CPC). El artículo 435° del Código Procesal Civil regula el emplazamiento a demandado indeterminado o incierto o con domicilio o residencia ignorados y señala: 1) Que cuando la demanda se dirige

contra personas indeterminadas o inciertas, el emplazamiento deberá alcanzar a todos los habilitados para contradecir y se hará mediante edicto, conforme a lo dispuesto en los artículos 165°, 166°, 167° y 168° del Código Procesal Civil, bajo apercibimiento de nombrárseles un curador procesal; 2) Que cuando el demandante ignore el domicilio del demandado, el emplazamiento también se hará mediante edicto, bajo apercibimiento de nombrárseles un curador procesal; y 3) que el plazo del emplazamiento será fijado por cada procedimiento, pero en ningún caso será mayor de sesenta días si el demandado se halla en el país, ni de noventa si estuviese fuera de él o se trata de persona indeterminada o incierta.”

2.4.5.4. Fases o etapas del proceso de ejecución

A. Demanda de ejecución

GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ (1992, p.294) en cuanto a la demanda ejecutiva anota lo siguiente: ha de formularse en los términos prevenidos para la ordinaria (...), lo que evidentemente hace referencia a la estructura formal porque en relación con su contenido al centrarse sobre el título ejecutivo, resta trascendencia a la demanda como documento alegatorio que solo tiene razón de ser sobre la base de desarrollo de aquél, y su relación fáctica se refiere a las circunstancias que originaron el título, a su naturaleza a sus consecuencias definitivas que sirven de base para que se decrete la ejecución. Y en la fundamentación jurídica, tanto procesal como sustantiva, se indicará la viabilidad del título y la procedencia de la pretensión ejecutiva, por lo que la demanda se configura aquí como una declaración de voluntad de que se proceda a la ejecución del título que le sirve de base, sin que tenga como fin anticipar o plantear argumentos, sino únicamente convencer al Juez de la existencia de un título a fin de que se ordene a despachar ejecución.

Por eso la demanda ejecutiva es un documento elemental que suele incluso estar impreso en relación con determinados títulos, en cuanto se limita a consignar las circunstancias y datos del título en cuestión.

La demanda se limitará a solicitar que se despache la ejecución frente a los bienes del demandado, por una cantidad concreta y determinada deducida directamente del título presentado, e interesando ulterior sentencia de remate seguir la ejecución adelante.

El artículo 694° del Código Procesal Civil, se puede demandar ejecutivamente las siguientes obligaciones:

- Obligación de dar
- Obligación de hacer
- Obligación de no hacer

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.71-72) señala que la demanda es el acto procesal que da inicio al proceso. Contiene la pretensión procesal y materializa el derecho de acción. Este acto procesal tiene que satisfacer ciertos requisitos recogidos en los artículos 424° y 425°, en lo que corresponda. Los incisos 1° al 4° del artículo 424° hacen referencia a los sujetos del proceso.

El inciso 5° exige que el petitorio sea expresado en forma clara y concreta; en ese sentido la demanda ejecutiva debe solicitar que se ordene el pago de determinada suma de dinero, más intereses y gastos procesales. No es correcto solicitar se ordene el pago de la suma que aparece en los documentos de ejecución, sino que hay que establecer de manera expresa el monto de la pretensión. Se debe precisar

además, que la petición del ejecutante no es libre, por cuanto el título determina los límites de su petición; por citar, cuando se trata de dar suma de dinero, siempre será posible en la demanda pedir menos a lo establecido en el título.

La corte suprema en la casación N° 182-2001-Lima¹², ha indicado que el título ejecutivo establece por sí solo el hecho relevante para fundar la petición, individualizándolas de las demás, no siendo posible alegar nada distinto. En la demanda ejecutiva lo único que debe alegarse es: 1) Que se tiene y se presente un título de aquellos que la ley dice lleva aparejada ejecución; y 2) Que la obligación documentada en el título cumple con los requisitos legales. Estas dos circunstancias deben desprenderse del título ejecutivo y a partir de él nace el derecho del ejecutante a que le juez despache ejecución.

B. Calificación de la demanda

AZULA CAMACHO, (1994, p.59-60) al referirse a proceso único de ejecución menciona que: “en el proceso ejecutivo en lugar del auto admisorio de la demanda, se profiere el mandamiento de pago, el cual implica que se cumplan no solo los requisitos propios de la demanda en general, sino los específicos de ese tipo de pronunciamientos.

En consecuencia, se pueden presentar las mismas consecuencias previstas para la demanda en general, como son la inadmisión y el rechazo, sea posterior o *in limine*, y, además la negativa a proferir el mandamiento ejecutivo, en caso que el documento allegado no reúna los requisitos para constituir el título ejecutivo no reúna los requisitos para constituir el título ejecutivo y sea imposible subsanarlos.

- Inadmisión: la inadmisión se impone ante la ausencia de los requisitos como son los de redacción, anexos y presentación, pero siempre que exista título ejecutivo, por cuanto, en caso contrario, lo indicado es pronunciarse sobre el fondo y negar el mandamiento ejecutivo.
- En caso que la demanda reúna los requisitos y el documento que contiene la obligación no tenga la calidad de título ejecutivo, pero la deficiencia puede subsanarse complementándolo con otra prueba, lo indicado es inadmitir la demanda para que se alleguen durante el término que concede la ley al efecto.
- Rechazo: el rechazo *in limine* se impone por falta de competencia, jurisdicción o caducidad de la acción, y, el posterior, cuando no se subsanan las irregularidades que ocasionan la inadmisión.
- Negación del mandamiento ejecutivo. En caso que el documento que contiene la obligación cuyo pago se pretende no reúna los requisitos de título ejecutivo y sea imposible subsanarlos, lo indicado es negar el mandamiento solicitado.

GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ (1992) apunta que “presentada la demanda, el Juez examinará los documentos acompañados a la misma y en especial el título ejecutivo para probar si procede despachar o no la ejecución solicitada, y para ello deberá examinar si el título acompañado lleva aparejada ejecución. Para este autor, existen cuestiones que el juez no puede apreciar de oficio en este momento procesal, y de ahí que se permita su alegación por el ejecutado ulteriormente, y por eso la decisión judicial que ahora se produce, es provisional, en espera de que puedan producirse alegaciones de defectos que no aparecen o resultan del propio título, para después decidirse sobre esta ejecución iniciada debe continuar o no”.

¹² casación N° 182-2001-Lima

C. Mandato ejecutivo

Para PALACIO (1994, p.392) “el mandamiento ejecutivo es el documento en el que consta la orden impartida por el juez al oficial de justicia para que requiera al deudor el pago de la suma adeudada y, subsidiariamente, trabe embargo¹³ sobre bienes suficientes para cubrir esa suma.”

MONTERO AROCA (2004, p.33 (citado por GUERRA CERRÓN, p.18)) señala que “a diferencia del auto admisorio en el proceso de cognición, el inicio del debate y el contradictorio en el proceso único de ejecución hay un mandato ejecutivo. En vez de demandante, hay ejecutante; en vez de demandado, hay ejecutado. El contenido del artículo 690-C¹⁴ del Código Procesal Civil (mandato ejecutivo) es una orden de cumplimiento de la obligación contenida en el título bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada. Incluso se puede autorizar la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia. El mandato ejecutivo es una de las máximas manifestaciones del poder coercitivo. En efecto, “la actividad ejecutiva es la que comporta una verdadera injerencia en la esfera jurídica de las personas y, por tanto, es la que más precisa de que en ella se respeten los principios base de la jurisdicción (por ejemplo, juez predeterminado), del personal jurisdiccional (por ejemplo, independencia del juez) y del proceso (por ejemplo, la contradicción)”.

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.77) precisa que la norma señala que de considerar admisible la demanda dará trámite expidiendo mandato ejecutivo debidamente fundamentado, el que contendrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título; por citar, si se trata de una obligación dineraria, el mandato ejecutivo contendrá una orden de pago de lo adeudado, incluyendo intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.

El apercibimiento indica una prevención especial porque se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción también especial. Esta advertencia es intimada por la autoridad, con potestad suficiente para exigir una conducta determinada y aplicar una sanción en caso de resistencia a ella.

Señala además que a pesar que la norma no lo indique será necesario requerir al condenado señalándole un plazo para que cumpla. Este requerimiento previo y el señalamiento de plazo constituyen el inicio de la ejecución y es calificado como mandato ejecutivo. La actividad ejecutiva dependerá de la conducta que adopte el ejecutado. Si este cumple estrictamente la condena, la ejecución y el proceso concluirá; en caso contrario, como el objetivo de la ejecución no se ha logrado, se procederá a la ejecución forzada. Los actos de coacción tienen normalmente en esta etapa un carácter meramente preventivo, para luego dar paso, si hubiera contradicción, a una etapa sumaria de conocimiento, que se inserta en el procedimiento de ejecución. Esa oposición aparece regulada en el artículo 690° D del código procesal civil para brindar al ejecutado la posibilidad de hacer valer las defensas que tenga contra el título o contra el procedimiento.

En el caso de obligaciones dinerarias en el que el título contenga una parte líquida y otra ilíquida, se procederá a la ejecución de la primera sin necesidad de esperar que se liquide la segunda.

La prestación liquidable es la que puede dilucidarse numéricamente mediante operación aritmética, método que no podría ser de aplicación para las prestaciones ilíquidas porque ellas responden

¹³ Este embargo podrá interponerse fuera del proceso o dentro del mismo; de esta manera el acreedor asegura su crédito, evitando así que su deudor pueda deshacerse de su patrimonio.

¹⁴ Art. 690-C. Mandato ejecutivo: “el mandato ejecutivo dispondrá el cumplimiento de la obligación contenida en el título; bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada, con las particularidades señaladas en las disposiciones especiales. En caso de exigencias no patrimoniales, el Juez debe adecuar el apercibimiento.

a razones muy distintas. En estos casos estamos ante las llamadas sentencias de condena genérica o de condena con reserva.

D. La contradicción

Para ARIANO (1998, p. 173) manifiesta que “el proceso ejecutivo no es un verdadero proceso de ejecución. Se creó para evitar el proceso ordinario, solemne y dispendioso, como corolario de los títulos con ejecución aparejada, que permitían el ingreso a un proceso de ejecución sin una previa cognición judicial.”

Por otra parte, LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.79-81) indica que los procesos únicos de ejecución, como pretenden la satisfacción del derecho ya declarado, se inician invadiendo la esfera propia del demandado, creando por anticipado un estado de sujeción a favor del titular del título. Frente a esas circunstancias, el diseño del procedimiento ejecutivo permite al ejecutado contrarrestar la intervención recurriendo a la contradicción, bajo los diversos supuestos que regula este artículo y dentro del plazo legal que establece. La contradicción aparece la posibilidad que le asigna al demandado para hacer valer las defensas que tenga contra el título. Apréciase del contenido del artículo 690-D la contradicción nos remite a una cognición sumaria, donde los supuestos de contradicción acogidos en los diversos incisos del presente artículo solo pueden ser probados con documentos, declaración de parte y pericia.

Refiere que las causales para el contradictorio se describen en los tres supuestos que recoge la norma. Son causales cerradas, no cabe interpretación extensiva a otros supuestos que no sean los expresamente regulados en el artículo 690 D del CPC, de ahí que el texto del artículo señale : “la contradicción solo podrá fundarse según la naturaleza del título en (...)” de tal manera que el juez debe declarar liminarmente la improcedencia de la contradicción si esta se funda en supuestos distintos a los que describe la norma; sin embargo esta exigencia en la actividad judicial se muestra bastante vulnerable, cuando literalmente se invoca una de ellas, en las sumillas de sus escritos, sin embargo, esta exigencia en la actividad en la actividad judicial se muestra bastante vulnerable, cuando literalmente se invoca una de ellas, en las sumillas de sus escritos, sin embargo, la sustentación de la causal, no guarda relación con la calificación invocada. En esta circunstancias, si el juez aprecia que el ejecutado esta “etiquetando” una contradicción bajo causales que describe este artículo, sin que el contenido y desarrollo de la argumentación se ajuste a la invocada, debe proceder el rechazo liminar de la contradicción.

Como ya se ha señalado la vieja disquisición entre el acto y documento en los títulos ejecutivos, se ha zanjado en que ambos elementos integrantes del título, esto es, que para calificar un título deben concurrir dos elementos: subjetivos y objetivos de las obligaciones. Esta precisión es importante para justificar las causales de los incisos 1 y 2 para la contradicción, pues un título ejecutivo, para ser considerado como tal debe satisfacer requisitos de fondo y forma.

Por otro lado PALOMINO MONTESINOS, (2016, p.79-81) añade que El Código Procesal Civil, en su artículo 690-D, regula lo concerniente a la contradicción en el proceso único de ejecución. Del citado precepto legal (concretamente de su primer párrafo) se puede apreciar, en principio, que la oportunidad para formular contradicción en el referido proceso y proponer excepciones procesales y defensas previas, es de cinco días de notificado el ejecutado con el mandato ejecutivo. Tal plazo es aplicable al proceso único de ejecución, cuya demanda se sustenta en un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial (el art. 688° del CPC contempla los títulos ejecutivos de naturaleza judicial y extrajudicial en virtud de los cuales se puede promover ejecución).

En el proceso único de ejecución cuya demanda se basa en un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial, el ejecutado puede plantear (en su escrito de contradicción a la ejecución y según el primer

párrafo del artículo 690°-D del CPC) las excepciones procesales previstas en el artículo 446° del CPC, cuales son las siguientes: Artículo 446°.- El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones:

- Incompetencia;
- Incapacidad del demandante o de su representante;
- Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado;
- Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda;
- Falta de agotamiento de la vía administrativa;
- Falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado;
- Litispendencia;
- Cosa Juzgada;
- Desistimiento de la pretensión;
- Conclusión del proceso por conciliación o transacción;
- Caducidad;
- Prescripción extintiva; y,
- Convenio arbitral.

Por su parte, CARRIÓN LUGO (2000, citado por (VILLANUEVA HARO, 2006)) en nuestro ordenamiento civil y procesal civil existen tres modalidades para el ejercicio del derecho de defensa frente a la pretensión procesal planteada con la demanda : la defensa de fondo, la defensa de forma y la defensa previa. La primera recibe también la denominación de excepción sustantiva o material, la segunda recibe también la denominación de excepción formal o procesal.

Las modalidades para el ejercicio del derecho de defensa son:

- Excepciones sustantivas o de fondo .- “Las defensas de fondo normalmente consisten en negar y/o contradecir las pretensiones del demandante, esgrimiendo contraderechos o causales de extinción de la obligación exigida. En efecto, hay situaciones en las cuales el demandado puede esgrimir contra las pretensiones procesales planteadas por el actor contraderechos o causales extintivas de las mismas como el pago, la compensación, el mutuo disenso, la condonación, la transacción extrajudicial
- Excepciones procesales de forma .- Son de clase perentoria (persigue destruir el derecho pretendido) y dilatoria (persigue expulsar la pretensión del proceso, pudiéndose volver a proponer en otro proceso). Ej. El demandado sólo puede proponer las siguientes excepciones: Incompetencia, Incapacidad del demandante o de su representante, Representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado, Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, Falta de agotamiento de la vía administrativa, Falta de legitimidad para obrar del

demandante o del demandado, Litispendencia, Cosa Juzgada, Desistimiento de la pretensión, Conclusión del proceso por conciliación o transacción, Caducidad, Prescripción extintiva y Convenio arbitral.

- Defensas Previas .- “ Las defensas previas constituyen medios procesales a través de las cuales el demandado solicita la suspensión del proceso hasta que el actor realice la actividad que el derecho sustantivo prevé como acto previo al planteamiento de la demanda.
- Hay que mencionar, además que, según PALOMINO MONTESINOS, “en el proceso único de ejecución cuya demanda se sustenta en un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial, el ejecutado debe presentar, en el mismo escrito que contiene la contradicción a la ejecución, los medios probatorios correspondientes que acrediten lo expuesto en tal contradicción. Si no lo hiciera el órgano jurisdiccional declarará inadmisibles las contradicciones (art. 690-D- segundo párrafo del CPC).
- Por otro lado, en el proceso único de ejecución cuya demanda se basa en un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial la contradicción que formula el ejecutado solo puede fundarse en las hipótesis previstas en los incisos 1), 2), y 3) del artículo 690-D del CPC, debiendo el juez rechazar liminarmente (esto es, de plano) la contradicción cuyo sustento sea ajeno a tales hipótesis, siendo tal decisión judicial apelable sin efecto suspensivo. Las referidas hipótesis que constituyen causales de contradicción a la ejecución, son, pues, las siguientes:
- *Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título;*
- *Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo éste un título valor emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia;*
- *La extinción de la obligación exigida;*
- *Cuando el mandato se sustente en título ejecutivo de naturaleza judicial, sólo podrá formularse contradicción, dentro del tercer día, si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la obligación, que se acredite con prueba instrumental.*
- *La contradicción que se sustente en otras causales será rechazada liminarmente por el Juez, siendo esta decisión apelable sin efecto suspensivo.”*

Como bien se ha desarrollado precedentemente, el ejecutado solo podrá contradecir por las causales taxativamente previstas en el artículo 690-D del código Procesal Civil.

Para mejor entendimiento sobre el contenido de dichas causales, será necesario el desarrollo de las mismas:

- **Inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título**

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 82-83) anota que el inciso 1 del artículo 690-D hace referencia a “la inexigibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título”. Dicha causal se invoca para cuestionar el fondo del título. Aquí no hay un cuestionamiento al documento en sí, sino al acto que recoge dicho documento. Se cuestiona la ejecutabilidad del título por carecer de una prestación cierta, expresa y exigible, condiciones básicas para que un título revista ejecución. La inexigibilidad de la prestación está

referida a la naturaleza de la obligación en sí, esto es, si ella esta sujeta a una condición, plazo o modo, pues de ninguna manera puede referirse a algún requisito de procedibilidad de la acción. Se configura cuando por razones de tiempo (plazo no vencido), lugar distinto al señalado en el título, modo (condición, cargo o forma acordada que debe cumplirse) la obligación no puede ser válidamente reclamada.

La prestación es cierta cuando están perfectamente delimitados en el título los sujetos y el objeto de la prestación aunque sean de manera genérica. Esto implica que necesariamente tiene que haber un sujeto activo llamado acreedor, que es la persona a cuyo favor debe satisfacerse la prestación. También se le denomina “titular” porque es quien tiene el título para exigir del deudor el comportamiento debido. El sujeto pasivo de la obligación es la persona que tiene que satisfacer la prestación debida, es decir debe conformar su conducta al comportamiento que le exige la prestación.(...).

Indica, que las prestaciones para que sean exigibles deben estar expresamente señaladas en el título. debe constar por escrito el objeto de su prestación, esto es, aquello que el deudor debe satisfacer a favor del acreedor. la prestación consiste en una cosa, o en un hecho que habrá que ejecutar el deudor o en una abstención de algo que el deudor habría podido efectuar libremente de no mediar la existencia de una obligación que le exige un comportamiento negativo. La prestación es determinada cuando al tiempo de constituirse la obligación se conoce en su individualidad la cosa debida, o está definido, en su sustancia y circunstancia el hecho o la abstención que habrá de satisfacer el deudor. Es determinable la prestación cuando sin estar individualizado su objeto es factible de individualización ulterior. En este último supuesto, de prestaciones determinables, se ubican las prestaciones liquidables y las ilíquidas, pero con la salvedad que las liquidables se convierten en líquidas mediante operación aritmética

- **Iliquidez de la obligación**

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 83) nos dice que “La contradicción puede invocar “la iliquidez de la obligación contenida en el título. esto implica que no tiene inmediata ejecución una prestación ilíquida.

Cuando un título es ilíquido, no puede procederse a la ejecución con una simple operación aritmética porque ella responde a razones muy distintas. En estos casos estamos ante las llamadas sentencias genéricas o de condena con reserva.”

- **Nulidad formal o falsedad del título**

Continúa LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 84) “ El título en sentido formal, es el documento que contiene al acto. Este documento se cuestiona de nulo cuando no acoge la forma señalada por ley. Cuando se invoca “la falsedad del título ejecutivo” es necesario tener en cuenta que un título valor es un documento constitutivo, en cuanto al derecho contenido en el título se constituye en el mismo título, en él nace y se transmite el derecho incorporado.”

BERGEL & PAOLANTONIO (1992, p. 384) califican la falsedad “cuando se pone lo falso en el lugar que debiera estar lo verdadero; en consecuencia, el concepto de falsedad afecta la validez sustancial del negocio cambiario, a la firma en su función creadora o autenticadora de tal negocio, en tanto el concepto de falsificación presupone un negocio cambiario anterior válido y afecta a los límites de la obligación que constituye su contenido.”

La falsedad está referida a la autoría del acto cambiario; la firma falsificada puede ser la del creador del título o la de cualquier otro sujeto que posteriormente participe en el tráfico cambiario. La falsificación se refiere a un documento cambiario inicialmente auténtico, que es alterado en alguno de los elementos del contenido, es decir que el cuestionamiento se centra en el texto del acto cambiario.

- **La extinción de la obligación**

La extinción de la obligación constituye otra causal para sustentar la contradicción contenida en el inciso 3 del artículo 690-D. los hechos extintivos para invocarla no difieren de los previstos para las obligaciones del Derecho Comùn, como pago, la novación, la compensación, la consolidación, etc.

Para ROMERO ZAVALA, (2001, p.13) pueden concurrir diversos modos de extinguir las obligaciones. Estos son actos o hechos jurídicos que tienen un objetivo: disolver o extinguir el vínculo obligatorio.

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.88-89) manifiesta que como acto que extingue la obligación se tiene a la ejecución voluntaria, que puede ser directa o indirecta. En el primer caso, el deudor cumple con la prestación debida, la misma que se tuvo en cuenta al momento de la celebración; con el modo indirecto, la ejecución es producto unas veces de un acto unilateral y otras de verdaderos acuerdos como la dación en pago, la novación, compensación, la transacción y el mutuo disenso. Como hecho que extingue la obligación se tiene a la consolidación, la prescripción extintiva, el vencimiento del plazo extintivo o el cumplimiento de la condición resolutoria, la pérdida sobreviniente del bien sin culpa del deudor; la muerte del deudor o del acreedor produce también extinción de la obligación cuando se trate de obligaciones o derechos personalísimos.

El pago es el cumplimiento efectivo de la obligación. Concurren dos principios básicos: el de identidad y de integridad. La identidad se explica en que el acreedor no puede ser obligado a recibir una cosa por otra, aunque sea igual o de mayor valor; la integridad, refiere a que se debe cumplir con la totalidad de la prestación debida.

La dación en pago se presenta cuando el deudor no puede cumplir con la prestación debida, por lo que se ve en la necesidad de ofrecer al acreedor prestación diferente y solo si el acreedor la acepta se producirá la extinción. La compensación es un medio extintivo de las obligaciones. Tienen lugar cuando dos personas por derecho propio reúnen la calidad de deudor y acreedor recíprocamente, cualesquiera que sean la causa de una y otra deuda. Ella extingue con firmeza de pago las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo en que ambas comenzaron a coexistir.

La novación, definida como la extinción de una obligación por la creación de una nueva obligación destinada a reemplazarla, es la transformación de una obligación en otra. El mutuo disenso constituye un acuerdo para poder poner fin a una obligación, pues así como un acuerdo le da origen otro acuerdo lo extingue.

La consolidación se verifica cuando se reúne en una misma persona, sea por sucesión universal, o por cualquier otra causa, la calidad de acreedor y deudor.

E. Trámite de la contradicción

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 98-104) manifiesta que “El condenado en el escenario del proceso ejecutivo puede cuestionar el título ejecutivo y/o cuestionar la relación procesal entablada, a partir del título. si opta por el primero formulará la contradicción al mandato de ejecución y si opta por el segundo recurrirá a las excepciones procesales y defensas previas. Ambas no son excluyentes, esto es, se puede contradecir y a la vez interponer excepciones procesales, siendo los plazos los similares para ambas. Cuando se plantea la ejecución y se comprueba la regularidad formal del título el juez tiene el deber de despachar su ejecución y de realizar todos los actos ejecutivos para tal fin. El ejecutante no precisa más que presentar el título que cotenga derechos ciertos, expresos y exigibles sin que tenga que probar nada más. La contradicción del ejecutado no puede calificarse como una constestación de la

demanda ejecutiva, sino como una demanda incidental, de la que se corre traslado al ejecutante para que la conteste.

Esto implica que promovida la contradicción por el ejecutado este se convierte en demandante en el mismo proceso, a él le corresponde la prueba de los hechos que alegue en la contradicción; el ejecutante, en tanto demandado en la contradicción o demanda incidental puede limitarse a negar estos hechos o puede alegar otros. Cada parte deberá probar los hechos que alegue en el incidente. Si el ejecutado alega el pago, le corresponde la carga de la prueba. Lo importante es que la contradicción del ejecutado no convierte los hechos alegados por el ejecutante en controvertidos, arrojando sobre él la carga de la prueba. La causa de pedir del ejecutante es el título mismo, cuyo documento es calificado por ley como título ejecutivo, cuando reviste la necesaria credibilidad para ello. Por el contrario, en el incidente declarativo o contradicción, el ejecutado se convierte en demandante y si alega un hecho debe probarlo, exista o no contestación del ejecutante a la contradicción. El ejecutante no tiene nada que probar porque está cubierto de por la presunción de certeza del título y porque en el incidente él actúa como demandado. Los principios generales de la prueba no se refieren al proceso de ejecución, que por su propia naturaleza carece de prueba, por cuanto todos los elementos necesarios para realizar la ejecución están en el título mismo.

Otras opiniones sostienen que el ejecutante debe probar el hecho constitutivo de su pretensión y el ejecutado los impeditivos, extintivos, y excluyentes. Sostener ello supone asumir que en el título no hay presunción alguna y por tanto el procedimiento ejecutivo responde a un proceso declarativo y que el título es un documento como los demás que necesita ser probado si el ejecutado niega su contenido. Solo partiendo de la consideración de que el procedimiento ejecutivo es un proceso declarativo puede admitirse que se diga que la sentencia de ejecución es la que hace posible que los bienes embargados sean sometidos a la ejecución forzada, negando con ello que la sentencia de remate se limite a decir que siga la ejecución adelante, no que se inicie, pues la ejecución ya estaba evidentemente iniciada desde que se dictó el mandato ejecutivo.

En el caso de las excepciones procesales, el texto legal dice: “con la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas para el saneamiento procesal”. Esto implica que agotado el debate y apreciada la prueba ofrecida y admitida en relación a las excepciones y/o defensas previas propuestas, el juez emitirá una sentencia de fona, en relación con la validez de la relación procesal entablada.

Este pronunciamiento puede desarrollarse bajo cualquiera de las tres alternativas que contiene el artículo 465° del CPC; para luego terminar el saneamiento procesal declarando la validez o invalidez de la relación procesal entablada y la consecuente continuación del proceso hacia la ejecución forzada o la conclusión del proceso. La tramitación que provoca la interposición de excepciones procesales es obtener una declaración sobre la validez o no de la relación procesal entablada, según sea que se declare fundada o infundada dichas excepciones. Si las excepciones se desestiman, se declaran infundadas y se valida la relación procesal se continuará con la tramitación del proceso, esto es, se procede hacer efectivo el apercibimiento decretado en el mandato ejecutivo y se ingresa a la ejecución forzada del derecho que se quiere satisfacer.

En caso que se ampare la excepción procesal y esta no genere la suspensión del proceso sino la conclusión de este, según las reglas que señala el artículo 451 del CPC, se procederá a declarar la nulidad de todo lo actuado y la conclusión del proceso. Las excepciones se resuelven en un solo auto, como refiere el artículo 450 del CPC. Con la absolución o sin ella, de la excepción procesal previa, el juez resolverá mediante un auto, observando las reglas de saneamiento procesal. Estas reglas están contenidas en los artículos 465, 466, 467 del CPC. La declaración de saneamiento no requiere de audiencia alguna. Esta se realiza por escrito. Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la existencia de una relación jurídica procesal válida, precluye toda petición referida, directa o indirectamente, a la validez

de la relación procesal. Consentida o ejecutoriada la resolución que declara la invalidez de la relación procesal o vencido el plazo sin que el demandante subsane los defectos que la invalidan, el juez declarará concluido el proceso, imponiendo al demandante el pago de las costas y costos, según lo señalado por el artículo 467 al referirse al saneamiento procesal.

Es importante tener presente el contexto en el que se impone la excepción procesal, como es un proceso de ejecución, donde no hay ningún derecho por definir, pues ya está definido en el título ejecutivo; por tanto, no vamos a ingresar a ninguna etapa de puntos controvertidos ni actuación de pruebas, en torno al derecho contenido en el título. En un proceso de cognición, la etapa siguiente al saneamiento procesal se hubiera orientado a fijar los puntos controvertidos, a realizar el saneamiento probatorio y a emitir la sentencia de ley. Esto ya no será posible, en un trámite provocado por las excepciones procesales en un proceso de ejecución.

Situación diversa es el procedimiento que se aplica a la contradicción. Aquí el cuestionamiento no se orienta a la relación procesal en sí, sino a la validez formal del título y/o al cuestionamiento de la obligación en sí, acogida precisamente en el título. El artículo 690-D literalmente dice: “la contradicción solo podrá formularse según la naturaleza del título en: 1) Inexibilidad o iliquidez de la obligación contenida en el título; 2) Nulidad formal o falsedad del título; o, cuando siendo este un título emitido en forma incompleta, hubiere sido completado en forma contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso se debe observar la ley de la materia; 3) Extinción de la obligación exigida”.

En este escenario, al discusión de la contradicción se debe entender como una demanda incidental que opone el ejecutado al ejecutante del título; y en atención de ello, el ejecutado tiene la carga de probar los hechos que sustentan su contradicción. Aquí el ejecutante se convierte en un demandado de la oposición a la ejecución que entabla al ejecutado; por tanto, la carga probatoria recae sobre el ejecutado. Refiere el texto legal que en el mismo escrito que formula la contradicción se presentarán los medios probatorios pertinentes; de lo contrario, el pedido será declarado inadmisibile.

En relación con los medios de prueba que puede ofrecer el ejecutado en esta incidencia, tenemos a la declaración de parte, los documentos y la pericia; a diferencia de las excepciones procesales, se requiere de medios de prueba de actuación inmediata, como la prueba documental. Si el ejecutado ofreciera medios de prueba que requieran actuación, el juez señalará día y hora para la realización de una audiencia, la que se realizará con las reglas establecidas para la audiencia única, pero las referidas a la actividad probatoria. Debemos precisar que las pruebas ofrecidas en el contradictorio pueden ser controladas o impugnadas en su eficacia probatoria a través de los remedios como la tacha u oposición, según la naturaleza de cada una de ellas y en atención a lo regulado en el artículo 300 del CPC.

La regla señala que con la absolución o sin ella, el juez resolverá mediante un auto, pronunciándose sobre la contradicción propuesta”. Si ampara la contradicción no se ingresará a la ejecución forzada, pero si se desestima la contradicción, se procede hacer efectivo el apercibimiento fijado en el mandato ejecutivo, continuando con este, bajo impulso de la parte.

Tanto en el tratamiento de las excepciones procesales como en la contradicción hay actividad probatoria, pero restringida a la prueba documental, en caso de las excepciones; y a la declaración de parte, pericia y documentos a la contradicción. Como tal, en las excepciones, la prueba es de actuación inmediata (documental), en cambio en la contradicción sí se contempla la posibilidad de la actuación, como la pericia, la declaración de parte. En ambos casos los medios de prueba son sujetos a tacha u oposición.

En la actividad probatoria el juez declarará la procedencia, improcedencia e inadmisibilidad de los medios de prueba, para lo cual evaluará si los medios de prueba son conducentes, esto es si son

pertinentes y útiles al objeto de la prueba. Con ello se busca centrar el foco litigioso, procurando que el debate se concentre en lo verdaderamente útil y jurídicamente relevante. La pertinencia precisa esa íntima relación entre los hechos y la producción o actividad verificatoria. Guarda un nexo muy próximo con la idoneidad del acto, es decir, que la prueba que se pretende gestar debe tender a la demostración de los hechos que necesitan de prueba, por tanto, son impertinentes los medios dirigidos a esclarecer los hechos que no se encuentran en discusión.

Ellos no serán admitidos de plano por el solo hecho de producirse. La admisibilidad se relaciona, no con la posibilidad sino con la eficacia intrínseca de la prueba. Sobre ellas opera la actuación de tachas y oposiciones, para lo cual el juez debe actuar y valorar los medios de prueba ofrecidos ante ellas. No se aprecia plazo alguno para interponer las tachas u oposiciones; sin embargo consideramos que estas se interponen al contestar la demanda, en aplicación extensiva del artículo 552 del CPC, pues el traslado de la contradicción contiene además el traslado del ofrecimiento de medios de pruebas del ejecutado en su contradicción. Este ofrecimiento en atención al principio de bilateralidad, estará sometido al control y supervigilancia de la contraparte, la que también tiene la carga de cuestionar el medio de prueba ofrecido a través de los mecanismos remediales de las tachas, u oposiciones. Estos mecanismos se utilizarán en función al medio de prueba que se cuestiona, tal como refiere el artículo 300 del CPC.

Situación diferente es la actuación de los medios de prueba ofrecidos en las tachas u oposiciones. El artículo 553 del CPC se refiere a ello, señalando que solo se acreditarán con medios de prueba de actuación inmediata que ocurrirá en la audiencia única. Un medio de prueba que no reviste el supuesto de actuación inmediata, toda vez que aquí el juez debe designar los peritos, esperar que estos acepten el cargo, realizar la pericia, emitir el dictamen, y luego se rectifique en la pericia y se proceda al debate pericial, si hubiere, importando dicha actividad una serie de etapas imposibles de agotarse en un solo acto, de manera inmediata, como requiere la actividad probatoria de las tachas u oposiciones; sin embargo, dichos hechos pueden ser incorporados al proceso a través de un documento que contenga la apreciación del perito, a manera de informe pericial, en el que el medio de prueba no requiere de actuación.

En cuanto a la conclusión del proceso por inasistencia de las partes a la audiencia de pruebas, señala el artículo 203 del CPC “sino concurren ambas partes el juez dará por concluido el proceso”. La explicación de la necesaria presencia de las partes en la audiencia de pruebas se justifica en el principio del dispositivo que rige el proceso civil. Las partes son las únicas que tienen la posibilidad de aportar los hechos al proceso y de hacer realidad su materialización en el proceso, a través de la actuación probatoria. Es una actividad de exclusiva competencia de las partes, donde la intervención del juez no tiene natural cabida.

Por otro lado debe precisarse que si no se formula contradicción, el juez expedirá el auto sin más trámite ordenando llevar adelante la ejecución.”

Para MONTERO AROCA, (1995, p.2418) La presunción de autenticidad que se otorga a los títulos ejecutivos lleva a sostener que si no existe oposición o contradicción, el ejecutante no tiene la carga de probar nada, debiendo el juez dictar sentencia de remate simplemente con el reexamen de los presupuestos procesales. En ella no se condena al ejecutado, sino se ordena a seguir adelante la ejecución.

En ese mismo sentido ARIANO (p.372), quien sostiene que el verdadero título ejecutivo no es la sentencia sino el que se presenta con la demanda, que es calificado por el juez y que determinó el despacho de la ejecución contenido en el mandato ejecutivo.

F. Apelación de auto que resuelve la contradicción

LEDESMA NARVÁEZ (2018, p. 105-106) indica que los auto que resuelven la contradicción pueden ser objeto de apelación, como expresión del sistema de instancia plural. Tienen por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine la resolución que según el recurrente le atribuye un defecto de fondo, que le genera agravio y que se deduce para obtener su sustitución ante el juez superior. El plazo para interponer apelación contra el auto es de tres días contado desde notificada esta. Adviértase que los plazos para la impugnación son perentorios, fatales, pues legalmente no admite prórroga; y que estos plazos son extensivos para la adhesión.

Como señala la norma, el auto que resuelve la contradicción poniendo fin al proceso único de ejecución es apelable con efecto suspensivo. Empero no procede el ofrecimiento de medios probatorios con el escrito de apelación, ya que su admisión solo es procedente en los procesos de conocimientos y abreviados, mas no en los procesos ejecutivos.¹⁵

Debe asumirse bajo esta redacción que la contradicción propuesta contra el mandato de ejecución ha sido amparada totalmente, esto es, se ha declarado fundada, de tal manera que ha generado el efecto total de la conclusión del proceso; sin embargo, si la contradicción se ha declarado fundada en parte, la apelación del auto que la contiene no debería ser con efecto suspensivo porque no ha puesto fin al proceso único, como lo exige el texto legal en comentario, pues el proceso continua en ejecución.

El otro supuesto que regula este artículo es la apelación a la resolución que resuelve la contradicción, pero que no pone fin al proceso; en otras palabras nos estamos refiriendo a la contradicción desestimada. En este caso, señala el texto legal que la apelación debe concederse sin efecto suspensivo y tendrá la calidad de diferida; sin embargo, no consideramos coherente la calidad de diferida en la apelación, pues dada la trascendencia del auto que resuelve la contradicción para la propia ejecución, resulta saludable que este sea conocido por el superior jerárquico, lo más pronto posible, para lo cual sería urgente que se forme el cuaderno respectivo; sin embargo, reservar esta apelación a efectos de que sea resuelta por el superior, con el carácter diferido, conjuntamente con la sentencia u otra resolución que el juez señale, tampoco resulta atendible en este tipo de procesos, por tres razones: 1) el acto siguiente, luego que se ha definido de manera negativa la contradicción, es ingresar a la ejecución forzada (remate y adjudicación) por tanto, no se tiene a la vista el procedimiento, un acto final de fondo que justifique una futura apelación “con efecto suspensivo” para aprovechar con ella la revisión de la resolución apelada, sin efecto suspensivo; esto significaría que la resolución apelada, que resuelve la contradicción (desestimándola), se vería prácticamente truncada; 2) la resolución que define la contradicción, es de trascendencia para el mandato de ejecución y por tanto para el proceso, pues va a permitir que se prosiga con la ejecución o se concluya con ella; por tanto ingresar a la ejecución forzada sobre la base de un mandato de contradicción “no firme”, los efectos revocatorios serían fatales sobre todo si el resultado de la revisión fuere contraria a la contradicción resuelta en primer grado, y ya se hubiere concluido en el principal, la ejecución forzada y hubieren terceros involucrados en la adjudicación; 3) la contradicción encierra una demanda incidental en el proceso ejecutivo de tal manera que el efecto de la resolución que resuelve la contradicción para continuar con la ejecución, debe ser la firmeza. No se trata de la apelación de cualquier resolución, sino de la que resuelve la demanda impugnativa a mandato de ejecución; por tanto debe concluirse que la resolución que define la contradicción al mandato ejecutivo, debe permitir la continuación con la ejecución en tanto se encuentre “firme” esta es la fórmula que debería aplicarse, al margen que se estime o desestime la contradicción.

¹⁵ Casación N° 1661-1997 Lima

G. Denegación de la ejecución

Respecto a la denegación de la ejecución, LEDESMA NARVÁEZ (2018, p.106-107) indica, que en todo proceso de ejecución el juez califica el título y deniega el peticionario si considera el título inhábil, o accede a él, si el título es idóneo. Esta calificación se desarrolla bajo una concepción publicística del proceso que rompe con el viejo precepto que toda demanda interpuesta debías ser admitida a trámite, permitiendo el rechazo liminar de la ejecución, si el título no reúne los requisitos formales para ello.

La denegación de la ejecución que refiere este artículo está condicionada a las cualidades del título ejecutivo; sin embargo, al calificar la demanda, no se puede dejar de apreciar lo regulado en el artículo 690-A del CPC. Esto permite sostener que si bien la demanda inicia el proceso, ello no impide que por un déficit en las condiciones de procedibilidad de esta, el juez no le dé curso por no reputarla idónea para la prosecución. Los principios de autoridad y de economía procesal justifiquen que el juez no deba permanecer impasible ante la proposición de demandas cuya sustantación solo se traduciría en un inútil dispendio de actividad jurisdiccional. Véase el caso de la afectación de la competencia establecida en el artículo 690-B del CPC. Se rechazará la demanda interpuesta ante el juez de paz letrado si el monto de la pretensión supera las cien unidades de referencia procesal; esto no implica que el título no reúna ejecución, sino que la pretensión sea interpuesto ante un juez incompetente. En igual forma, se declara la improcedencia de la demanda cuando el demandante no tenga legitimidad para obrar; demanda el cobro de una letra quien no es el emitente ni aparece como tenedor legítimo vía endose.

El auto denegatorio de la ejecución es pasible de apelación, con efecto suspensivo. El procedimiento de la apelación será inaudita pars, pues, como señala literalmente la norma, “solo se notificará al ejecutado si queda consentido o ejecutoriado”. Esto implica que si el resultado de la impugnación confirma la denegatoria de la ejecución, esta situación se hará recién de conocimiento al ejecutado; caso contrario, si revoca la denegatoria y ordena la ejecución, también conlleva la notificación del mandato ejecutivo y no del rechazo de la ejecución. Los efectos en ambos casos son diversos. Con la denegatoria concluye el proceso y la pretensión, pues sin título no hay ejecución; a diferencia del mandato ejecutivo, que la jurisdicción comienza invadiendo la esfera propia del demandado, ocupando sus bienes y creando por anticipado un estado de sujeción a favor del acreedor.

No necesariamente todo título que se postula para su ejecución puede acogerse con dicho fin. No es suficiente que se acompañe una prueba anticipada, ni el documento privado que contenga la transacción extrajudicial, ni el testimonio de escritura pública para aceptar su ejecución. Si bien los títulos citados son calificados como títulos ejecutivos no necesariamente conllevan a su ejecución. Es necesario que los títulos de ejecución contengan los presupuestos que describe el artículo 689 del CPC, esto es, que no solo sea cierta y expresa la prestación sino exigible, caso contrario, resulta procedente denegar la ejecución. Véase el caso del mutuo contenido en una escritura pública, cuyo plazo pactado para la devolución de la prestación, aún no haya vencido, sin embargo, se procede a su cobro judicialmente.

2.5. HIPÓTESIS

Según HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO (2014, p.104) “las hipótesis son guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado”; es decir las hipótesis son suposiciones o posibles respuestas al problema encontrado, que serán verificadas como válidas o no a lo largo de la investigación.

Producto análisis de la realidad problemática que nos ocupa, nos hemos planteado las siguientes explicaciones tentativas:

2.5.1. Hipótesis General:

Para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal, se necesita que se haya estipulado en el contrato que, ante el incumplimiento de pago del deudor, la entidad financiera hará uso de la vía ejecutiva a través la liquidación de saldo deudor.

2.5.2. Hipótesis Específicas:

Debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor, porque de esa manera evitamos que, en un eventual proceso ejecutivo, la liquidación de saldo deudor reemplace al pagaré otorgado en representación del crédito.

CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO

Según CORTÉS CORTÉS & IGLESIAS LEÓN (2004, p.8) “La Metodología de la Investigación es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente el proceso de la investigación científica”, es decir, que la metodología permitirá al investigador poder dirigir su investigación, otorgándole todos los instrumentos necesarios para poder describir, recabar, evaluar y analizar un problema y con ello poder obtener resultados.

3.1. ENFOQUE

De acuerdo con HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO (2014, p.18-19) “El enfoque cualitativo (también conocido como investigación naturalista, fenomenológica o interpretativa) trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. Así mismo, añade que es una especie de “paraguas” en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. Se utiliza en primer lugar para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación. (...)”.

Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación será de enfoque cualitativo, pues nos permitirá realizar un mejor estudio al problema planteado, pudiendo identificar qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo que proviene de un contrato de préstamo personal.

3.2. DISEÑO

De acuerdo a SALGADO LÉVANO (2007, p.72) “el diseño es como un abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y abierto, y el curso de las acciones se rige por el campo, de este modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario y ambiente.”

El objetivo general de nuestra investigación será establecer qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal; es por ello que se utilizará un diseño de investigación-acción; puesto que nos permitirá observar mejor la situación problemática de este título ejecutivo; también podremos recoger información; analizar lo obtenido y poder dar una solución al problema encontrado.

3.3. NIVEL

CAZAU (2006, p. 26) indica que “El objetivo de una investigación exploratoria, es como su nombre lo indica, examinar, explorar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado nunca. Por lo tanto, sirve para familiarizarse con problemas poco estudiados.”

Este autor mismo autor se refiere a la investigación descriptiva, indicando que “a través de esta investigación se seleccionan una serie de cuestiones, conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin de describirlas”. Esto, según CAZAU (p.27)

La presente investigación es de carácter descriptivo-exploratorio. El carácter descriptivo nos ayudará a recopilar y estudiar la información sobre como las entidades del sistema financiero materializan las obligaciones a través de títulos ejecutivos para poder acceder al proceso único de

ejecución y de esa manera hacer efectivo un derecho en contra de sus clientes que incumplieron con pagar las cuotas de su crédito. Por otro lado, el carácter exploratorio nos permitirá examinar y analizar como acreditar que la obligación que se ejecuta no está representada en un título valor.

3.4. TIPO

La presente investigación será una de tipo no experimental y transversal, porque permitirá recolectar información en un solo momento. Siendo su propósito describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado.

3.5. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS

Según CALDUCH CERVERA (2014) “el método, es el conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar correctamente y en su totalidad las etapas del proceso de investigación”.

Para lograr los objetivos que guían esta investigación, los métodos científicos a utilizarse serán los siguientes:

- a) **Método Deductivo:** Toda vez que nuestra investigación irá de lo general a lo particular, es decir pretendemos determinar qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo que proviene de un contrato de préstamo personal.
Este método también será muy útil para analizar los fallos judiciales; ya que lograremos entender a cabalidad el razonamiento de los jueces, quienes han permitido que la liquidación de saldo deudor acceda a la vía ejecutiva siempre que el acreedor acompañe del contrato que originó la obligación.
- b) **Método analítico:** Por medio de este método se analizará como se materializan o representan las obligaciones que provienen de un contrato de préstamo personal; además se precisará cuál es el procedimiento que la ley ha previsto para ejecutar dichas obligaciones. Debemos mencionar que procuramos no ir en contra de la ley ni de la jurisprudencia.
- c) **Método Histórico:** A través del cual indagaremos el origen de la liquidación de saldo deudor y que uso tuvo primigeniamente en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistemas de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros-Ley N° 26702.
- d) **Método Dogmático:** En la elaboración de esta investigación se utilizará doctrina jurídica nacional sobre los procesos ejecutivos, títulos ejecutivos, pagarés, la liquidación de saldo deudor, contratos de préstamo personal; todo ello, conforme a lo regulado en el Código Procesal Civil, la Ley de títulos valores, Ley General del Sistema Financiero y del Sistemas de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Se realizará un estudio sobre la doctrina encontrada con la finalidad de realizar análisis, síntesis, deducción, inducción, en mérito a la doctrina de autores nacionales e internacionales.

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS

La técnica o instrumentos que usaremos serán aquellas que privilegien la información doctrinaria, legislativa y jurisprudencial; además recopilaremos datos de la realidad sin alterar el fenómeno en estudio.

Los instrumentos que se emplearán son los siguientes:

3.6.1. Fichaje: Por medio de esta técnica se recabará todo lo que se ha escrito en la doctrina nacional y extranjera sobre los procesos ejecutivos, títulos ejecutivos, pagarés, saldo deudor; también buscaremos toda la jurisprudencia y legislación sobre el tema. Toda esta información nos permitirá tomar una postura respecto a la investigación.

3.6.2. Recolección y Análisis de datos: Por medio de esta técnica se analizará la información doctrinaria y legislativa sobre el tema objeto de nuestra investigación.

CAPÍTULO IV

PROBANZA DE HIPÓTESIS

4.1. PROBANZA JURÍDICO - SOCIAL – DOCTRINAL

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y de diseño investigación acción, por ello ha recopilado información de la realidad financiera (por medio de contratos de préstamo personal), doctrina, jurisprudencia, normativa. Estas herramientas metodológicas nos permitirán obtener resultados.

A continuación, se efectuará la probanza jurídico, social, doctrinal.

4.1.1. Hipótesis General

Para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal, se necesita que se haya estipulado en el contrato que, ante el incumplimiento de pago del deudor, la entidad financiera hará uso de la vía ejecutiva a través la liquidación de saldo deudor.

PROBANZA:

La liquidación de saldo deudor adquiere su mérito ejecutivo porque así lo ha establecido la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, en su artículo 132°, inciso 7, el cual señala:

“Art 132°. - FORMAS DE ATENUAR LOS RIESGOS PARA EL AHORRISTA

En aplicación del artículo 87° de la Constitución Política, son formas mediante las cuales se procura, adicionalmente, la atenuación de los riesgos para el ahorrista:

(...) 7.- El mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas.”

Este es el único artículo en la legislación nacional que regula la liquidación de saldo deudor. Dicha situación ha generado varios inconvenientes en la práctica judicial.

La primera dificultad por la que atravesó este título fue la discrepancia en la jurisprudencia respecto a si debía considerarse como un título ejecutivo. Esta situación ya fue superada, pues actualmente se ha llegado a la conclusión de que la liquidación de saldo deudor sí tiene mérito ejecutivo, pero para promover un proceso único de ejecución necesita acreditar la obligación que ejecuta a través del contrato que originó dicha obligación. De este criterio son las casaciones: **CASACIÓN N° 1975-1997/LORETO, CASACIÓN N° 1990-1998/LIMA, CASACIÓN N° 2024-2000/LIMA, CASACIÓN N° 1674-2002, CASACIÓN N° 463-2004/ICA, CASACIÓN N° 4087-2009/LIMA.** Todas ellas coinciden en indicar que para proceder con la acción ejecutiva es necesaria la liquidación de saldo deudor y el contrato que originó la deuda.

Es necesario indicar que la entidad financiera celebra con sus clientes contratos de adhesión, donde la voluntad del consumidor se limita a aceptar o rechazar íntegramente el contrato. Por esta razón el Estado debe proteger a la parte débil de la relación contractual (consumidor), y para ello ha encargado a la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), la aprobación de las cláusulas generales de contratación que posteriormente serán insertadas en los contratos de adhesión que celebrará la entidad financiera y su cliente. Dichas cláusulas generales deben ajustarse a nuestro marco normativo y deben evitar que alguna cláusula genere un desequilibrio entre las partes contratantes.

Las cláusulas generales de contratación aprobadas por la SBS, se encuentran en su portal web o en las páginas web de las entidades financieras. Debemos señalar que la presente investigación está enfocada en los contratos de préstamo personal que ofrecen las Entidades Bancarias, Financieras y Cajas Municipales de Ahorro y Crédito de nuestra ciudad.

Acorde con lo anterior y verificada la página web de la SBS, se puede comprobar que en ninguna de las cláusulas generales de contratación que fijan el contenido de los contratos de préstamo personal se ha previsto el uso de la liquidación de saldo deudor como título ejecutivo. Veamos a continuación como las entidades del sistema financiero, han estipulado su ingreso al proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero.

LOS BANCOS

- **El Banco de Crédito del Perú**

En su cláusula décima regula lo concerniente al incumplimiento de pago y la resolución del contrato, señalando expresamente:

(...) El CLIENTE autoriza al BANCO a dar por vencidas todas las demás cuotas pendientes del Crédito Personal, disponiendo el cobro inmediato del íntegro del saldo adeudado en la Cuenta Crédito Personal, en cualquiera de las siguientes formas:

10.1 Requiriendo el pago del saldo deudor de la Cuenta Crédito Personal y emitiendo, en su defecto, una letra de cambio a la vista a cargo del CLIENTE de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS (Ley N° 26702), la que será protestada por falta de pago.

10.2 Completar con el importe adeudado el Pagaré a la Vista que el CLIENTE y/o sus fiadores puedan haber emitido a la firma de este contrato, en forma incompleta y conforme a la Ley de Títulos Valores (Ley N° 27287), procediendo a protestarlo si no fuera pagado por el CLIENTE y/o fiadores. El CLIENTE declara haber sido instruido sobre los alcances y finalidad de este pagaré cuya copia, en caso de haberlo emitido, declara recibir.

Protestados cualquiera de los títulos valores antes mencionados, el BANCO iniciará la respectiva acción ejecutiva (...)

Fuente: contrato de préstamo personal aprobado por Resolución S.B.S N° 1982 -2015. (Véase anexo 4)

Esta entidad ha previsto el ingreso a la vía ejecutiva por medio de una letra de cambio o un pagaré.

- **El BBVA**

La cláusula once estipula:

PAGARÉ INCOMPLETO

Al amparo de lo dispuesto por la Ley N° 27287 y la Circular SBS N° G-0090-2001, las partes acuerdan que, en representación del préstamo otorgado en virtud de este Contrato, EL CLIENTE emite y suscribe un pagaré incompleto a la orden del BANCO, el cual será completado y emitido por éste de acuerdo a las siguientes reglas: (a) El Pagaré indicará el número del Préstamo.

- (b) La fecha de emisión del Pagaré será la misma que la fecha de suscripción del Contrato.
- (c) El Banco completará el Pagaré si, por cualquier razón, Usted debe pagar de manera inmediata la totalidad del Préstamo. El Pagaré será llenado por el monto total de su deuda, según el cálculo (liquidación) efectuado por el Banco.
- (d) La fecha de vencimiento del Pagaré será la fecha en la que el Banco realice el cálculo (liquidación) de la suma que Usted deba. Desde la fecha de vencimiento del Pagaré hasta la fecha en la que Usted lo pague se seguirán generando intereses compensatorios y moratorios a las tasas pactadas. (
- e) El Pagaré será emitido con la "Cláusula Sin Protesto". Sin perjuicio de ello, el Pagaré podrá ser protestado. Usted asumirá los gastos del protesto.
- (f) El Banco podrá transferir el Pagaré.

Fuente: contrato de préstamo o crédito personal aprobado por Resolución S.B.S N° 6733 -2009 (Véase anexo 5)

Esta cláusula establece las reglas que deberán seguirse para completar un pagaré emitido de forma incompleta.

- **INTERBANK**

Por su parte, el Interbank ha establecido que:

Pagaré o Emisión de la Letra de Cambio INTERBANK podrá aplicar cualquiera de los siguientes mecanismos para realizar el cobro de lo adeudado por el Cliente:

Pagaré: Con la manifestación de voluntad o aceptación del presente Contrato, y en caso INTERBANK lo requiera, el Cliente emitirá a favor de INTERBANK un pagaré incompleto (Pagaré (...))

El Cliente podrá completar y firmar el Pagaré de manera virtual y/o física y, en consecuencia, INTERBANK podrá proceder a la ejecución de la Constancia de Inscripción y titularidad y/o el Pagaré, en cualquiera de los siguientes casos: (i) si el Cliente incumpliese con el pago debido y oportuno de las obligaciones contraídas con INTERBANK y representadas en el Pagaré, (ii) si se solicita la declaración de insolvencia del Cliente, éste es declarado insolvente o suspende sus pagos; (iii) si INTERBANK detectase falsedad en la información proporcionada por el Cliente y/o (iv) si el Cliente dejara de cumplir cualquiera de las obligaciones contraídas con INTERBANK. (...)

Letra de Cambio: INTERBANK podrá girar una letra a la vista como uno de los mecanismos pactados en la cláusula 22 (compensación) si el Cliente, en cualquier momento, incumple sus obligaciones de pago adquiridas como consecuencia del presente Contrato o si, extinguido el Contrato por cualquier motivo, el Cliente no paga la deuda total dentro del plazo concedido (...)

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 665-2018. (véase Anexo 6)

Esta entidad establece que se podrá acceder a la ejecución con un pagaré o una letra de cambio, cuando el cliente incumpliese con el pago oportuno de las obligaciones contraídas.

- **SCOTIABANK**

La cláusula tres ha previsto:

EMISIÓN DEL TÍTULO VALOR

El Banco podrá requerir al Cliente la emisión y suscripción de un pagaré emitido a la orden del Banco de manera incompleta, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Títulos Valores, habiendo obtenido del Banco una copia del mencionado título valor. Frente al incumplimiento de las obligaciones a cargo del Cliente, el Banco queda facultado a completar el pagaré antes indicado con el monto que resulte de las obligaciones vencidas o que hubieran sido dadas por vencidas, que el Cliente mantenga frente al Banco, incluidos los intereses compensatorios producto del Crédito, cualquiera sea la moneda en la cual haya sido pactada. El Cliente renuncia expresamente a su derecho a incluir en el mencionado pagaré una cláusula que limite la transferencia del pagaré, reconociendo el derecho del Banco a negociar libremente el referido título valor. El Cliente declara tener conocimiento de los mecanismos de protección que la ley permite para la emisión o aceptación de títulos valores incompletos. La firma del pagaré no afecta el derecho de cobro del Banco ni modificará o sustituirá el Crédito o el contrato. En caso el mencionado pagaré se extraviará o se dañara de cualquier forma, el Banco seguirá teniendo los mismos derechos frente al Cliente para el cobro del Crédito que resulte del presente contrato.

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 2350-2019

Scotiabank estipula que, ante incumplimiento de las obligaciones a cargo del Cliente, el Banco queda facultado a completar el pagaré con el monto que resulte de las obligaciones vencidas o que hubieran sido dadas por vencidas.

- **BANCO PICHINCHA**

La Clausula décima del contrato de préstamo personal establece:

EL PAGARÉ

A la firma del presente Contrato, y en caso EL BANCO lo requiera, el CLIENTE emitirá a favor de EL BANCO un pagaré incompleto (en adelante, Pagaré) el mismo que autoriza a EL BANCO a completar de acuerdo al artículo 10 de la Ley 27287 (Ley de Títulos Valores) y la Circular G-0090-2001 (Título Valor emitido en forma incompleta) y las normas que las modifiquen o sustituyan, y según los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

EL BANCO podrá proceder a completar el Pagaré y en consecuencia a la ejecución del mismo, en cualquiera de los siguientes casos: a) Si el CLIENTE incumpliese con el pago del Crédito; b) Si se solicita la declaración de insolvencia del CLIENTE, éste es declarado insolvente; c) Si EL BANCO detectase falsedad en la información proporcionada por el CLIENTE; d) Si el CLIENTE dejara de cumplir cualquiera de las obligaciones contraídas con EL BANCO.

- **MIBANCO;**

Señala en la cláusula décima:

EJECUCIÓN DEL PAGARÉ INCOMPLETO O LIQUIDACIÓN DE SALDO DEUDOR

A solicitud de MIBANCO, el CLIENTE emitirá un pagaré incompleto, cuya copia le será entregada, el mismo que ante el incumplimiento de sus obligaciones podrá ser completado por MIBANCO. El importe del Pagaré corresponderá a la liquidación que realice MIBANCO de las obligaciones del CLIENTE y la fecha de vencimiento corresponderá a la fecha en la que se practique dicha liquidación, comprendiéndose en esta los intereses compensatorios y moratorios o la penalidad por pago tardío, según corresponda, quedando facultado MIBANCO para protestarlo y/o ejercitar las acciones de ley que correspondan. En caso que no fuese pagado, se devengarán los intereses compensatorios más moratorios o la(s) penalidad(es) por pago(s) tardío(s) de ser el caso, aplicados sobre el importe del Pagaré.

El CLIENTE renuncia expresamente a su derecho a incluir en el pagaré una cláusula que limite su transferencia, reconociendo el derecho de MIBANCO a negociarlo libremente. El CLIENTE declara que MIBANCO ha puesto en su conocimiento los mecanismos de protección que la ley permite para la emisión o aceptación de títulos valores incompletos. La ejecución del pagare se registrará por la Ley de la materia.

Las partes acuerdan que MIBANCO podrá destruir el Pagaré una vez cumplida las obligaciones de pago del CLIENTE, prescindiendo de su devolución física, no obstante, a solicitud del CLIENTE y/o EL(LOS) FIADOR(ES) le(s) será entregada una constancia de no adeudo del préstamo respectivo.

Alternativamente y a sola decisión, MIBANCO podrá formular una Liquidación de la(s) deuda(s) que mantenga a su cargo el CLIENTE y exigir su pago por la vía ejecutiva, luego de compensar con los fondos, valores, acreencias o activos líquidos que MIBANCO decida y pueda tener en su poder a nombre del CLIENTE y/o de sus garantes. Esta Liquidación podrá ser hecha sea a cargo del CLIENTE y/o de sus respectivos garantes, dirigiéndose las acciones para su cobro a cualquiera de éstos o a ambos, sin perjuicio de comunicar las razones que motivaron esta decisión y de su facultad para interponer otras acciones legales para hacer valer sus derechos crediticios.

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 3105-2019. (Véase Anexo 7)

Conforme se aprecia solo MIBANCO ha estipulado el uso de la liquidación de saldo deudor como título alternativo al pagaré.

LAS FINANCIERAS

- **FINANCIERA CONFIANZA SAA**

Financiera confianza indica que:

¿Cómo se trata el pagaré que he emitido?

A la firma de este contrato, tú emites a favor de la financiera un pagaré incompleto (Pagaré) y a autorizas a la financiera a llenarlo a lo expresamente convenido en el acuerdo de llenado de pagaré indicado a continuación, suscrito por ti y por la financiera.

La financiera procederá a completar el pagaré y, en consecuencia, a ejecutarlo ante la ocurrencia de cualquiera de las causales que facultan a la financiera a dar por vencidos los plazos del préstamo.

Tú dejas constancia que al momento de la suscripción de este contrato recibes copia del pagaré y copia del acuerdo de llenado suscrito con la financiera. (...)

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 816-2018

- **CREDISCOTIA**

CREDISCOTIA ha pactado que:

Emisión del título valor

Frente al incumplimiento de pago a cargo del cliente, la financiera queda facultada a completar el pagaré antes indicado con el monto que resulte de las obligaciones vencidas o que hubieran sido dadas por vencidas que el cliente mantenga frente a la financiera, incluidos los intereses compensatorios, penalidades por pago tardío, comisiones y/o gastos de créditos cualquiera sea la moneda en la que haya sido pactada. Asimismo, la financiera queda facultada a completar como fecha de vencimiento la fecha que se tenga por vencidas y liquidadas las cuotas de crédito que contengan el íntegro de saldo de la deuda; y a consignar el lugar de pago, el domicilio de la financiera o en el lugar que se presente para cobro (...)

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CRÉDITO

- **CAJA AREQUIPA**

Caja Arequipa establece que, ante el incumplimiento de pago de las cuotas pactadas, la caja procederá a completar el pagaré emitido de forma incompleta por el librador, o este caso por el o los prestatarios.

Emisión de título valor incompleto

Los prestatarios autorizan irrevocablemente, conforme al artículo 10° de la Ley N° 27287 (Ley de Títulos Valores) y la Circular SBS G-0090-2001 (Título valor emitido en forma incompleta), para que la caja integre el pagaré cuando los prestatarios: i) incumplan el pago de las cuotas pactadas; ii) incumplan cualquiera de las obligaciones establecidas en este contrato o; iii) Incurren en alguna de las causales señaladas en la cláusula 11, título "Vencimiento de Plazos y/o Resolución Contractual".

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 3483-2019

- **CAJA PIURA**

Caja Piura regula el vencimiento de los créditos de la siguiente manera:

VENCIMIENTO DE EL(LOS) CRÉDITOS.

Las partes pactan que el vencimiento de el (los) crédito(s) se configura en caso de incumplimiento en el pago total o parcial de una o más cuotas establecidas en el Cronograma de Pagos, conforme al artículo 1323 del Código Civil, o en caso se configure cualquiera de las causales de resolución pactadas; en tal sentido, CAJA PIURA, , podrá dar por vencidas todas las cuotas de el(los) crédito(s) y procederá a completar el(los) pagaré(s) incompleto(s) aceptado(s) por El(los) Deudor(es) (...)

El(los) Deudor(es) autoriza(n) a CAJA PIURA de manera irrevocable a completar el(los) pagaré(s) incompleto(s), de conformidad con el artículo 10° de la Ley de Títulos Valores y la Circular SBS G-0090-2001; en caso que por incumplimiento o resolución del contrato sea necesario su ejecución, consignando como fecha de emisión aquella en la cual CAJA PIURA haya desembolsado el crédito pendiente de pago y como fecha de vencimiento la que corresponda al día en que se complete el título valor; considerando el importe del saldo del crédito más los intereses compensatorios, moratorios, comisiones y gastos (...)

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 4035-2015

- **CAJA SULLANA**

Emisión de Títulos Valores

Si Usted firmara alguna letra de cambio, pagaré u otro título valor a favor de la Caja, esta última seguirá manteniendo sus mismos derechos a cobrar el Préstamo, ya que dichos documentos no modificarán ni sustituirán el Préstamo o el Contrato. Además, si tales títulos valores se extraviaran o dañaran de cualquier forma, la Caja seguirá teniendo los mismos derechos frente a Usted para cobrar el Préstamo.

Fuente: contrato aprobado por Resolución SBS N° 3795-2016

Las cláusulas extraídas de los contratos de préstamo personal de algunas entidades financieras instaladas en Piura, nos permiten comprobar que, ante incumplimiento de pago del deudor la institución financiera procederá a hacer efectivo el cobro de su deuda a través de un título valor, que por su generalidad será un pagaré o en el caso del Banco de Crédito y Interbank un pagaré o una letra de cambio¹⁶. Conforme se aprecia, ninguna de las entidades, salvo MIBANCO, ha previsto el uso del mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor; pese a ello, se viene utilizando.

En este sentido, acceder a la vía ejecutiva con un título no estipulado en el contrato de préstamo personal origina que no se proteja al consumidor, infringiendo de este modo, el artículo 65° de la Constitución Política del Perú, el cual señala que: **“el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado”**. En ese marco, no se le está brindado la información necesaria al usuario que desea contratar un producto financiero.

¹⁶ Es necesario recalcar que cuando se haya estipulado el uso de pagaré, este será el único título que deberá adjuntarse a la demanda de obligación de dar suma de dinero, a diferencia de lo que ocurre con la liquidación de saldo deudor que necesita del contrato que origina la deuda.

Por otro lado, esta situación origina la afectación al **Derecho a acceder a información oportuna, suficiente, veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de consumo que se ajuste a sus intereses, así como para efectuar un uso o consumo adecuado de los productos o servicios.**

“El contenido esencial del derecho a la información de los consumidores es la puesta a disposición del consumidor, de manera clara, efectiva y comprensible, de todos aquellos elementos necesarios para que este tome una decisión de consumo adecuada en la adquisición de bienes o servicios, en particular; las advertencias, riesgos previsibles, precauciones, limitaciones, requisitos y condiciones relacionados con la adquisición de los productos ofertados (...). Este contenido esencial es el mínimo indispensable para que el derecho a la información de los consumidores sea reconocible (...) y no se vea vaciado de contenido”.

Asimismo, este derecho se refiere a la libre e informada elección que realiza el cliente o futuro cliente del producto activo financiero a contratar; por ello, la entidad financiera (Banco, Financiera o Caja) está en la obligación de indicar todos los términos y condiciones que rigen el crédito que concede. La información que se brinda debe estar referida al monto del préstamo, la forma en que se hará el desembolso del dinero, la tasa de interés moratorio y compensatorio, la fecha en la que debe realizarse el pago de las cuotas, la resolución del contrato y/o vencimiento anticipado de las cuotas. Además de ello, debe indicarse el título a través del cual se accederá al proceso único de ejecución de obligación de dar suma de dinero. De este modo, el usuario conocerá a cabalidad las disposiciones que regirán el contrato, posibilitando un consentimiento plenamente eficaz.

Debemos tener presente que en los contratos con cláusulas generales de contratación y por adhesión siempre existe una parte que se encuentra en desventaja, ya que carece del conocimiento necesario respecto al producto que contrata. Es por ello que el derecho a la información se convierte en el remedio legal que protege al cliente de la asimetría informativa.

Hay que mencionar que en el derecho del consumo existe el Principio de Corrección de la Asimetría, que en palabras de VILLONA CERNA (2016, p. 24) “Este principio parte de considerar que la situación de asimetría entre el proveedor y el consumidor no es solamente informativa, sino también puede ser de carácter contractual o en cualquier otra situación relevante. Esto considerando que las malas prácticas que afectan a los consumidores pueden generarse por la situación de desequilibrio del consumidor, sea de carácter informativo, en el poder de negociación, o en cualquier otra situación relevante, como podrían ser las situaciones generadas por los riesgos de los productos o servicios, o por la situación de vulnerabilidad de los consumidores. De hecho, el derecho de consumo tiene por función restablecer jurídicamente esta situación de equilibrio para corregir estas malas prácticas. En el plano contractual, este principio de corrección de la asimetría se manifiesta en la prevención y eliminación de las cláusulas abusivas de los contratos por adhesión o con cláusulas generales de contratación. El artículo 48° del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece como requisitos de este tipo de contratos no solamente aspectos de transparencia, como el que haya concreción, claridad y sencillez en la redacción, y accesibilidad y legibilidad de estos contratos, sino también de contenido como el que haya buena fe y equilibrio necesario en los derechos y obligaciones de las partes”.

En conclusión, para que exista una real protección al derecho a la información que goza el usuario, la entidad financiera debe poner en conocimiento todos los aspectos que regirán la relación contractual, y esto implica la forma en como ejecutará el crédito en un proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero.

En este sentido, el único modo donde se deja constancia de la información brindada, es en el contrato, por lo que, en este documento se debe establecer que se utilizará la liquidación de saldo deudor

como título ejecutivo. Además, deberá existir una cláusula que exprese de forma precisa y clara la fórmula para determinar la liquidación en mención.

Hay que hacer hincapié en que no buscamos que el cliente pueda eludir sus obligaciones, por el contrario, estamos tratando que exista una relación jurídica igualitaria entre las partes.

A. El principio de buena fe

Avanzando con nuestro razonamiento, encontramos que no solo el derecho a la información se encuentra vulnerado, sino también el principio de buena fe.

Debemos mencionar que este principio ha sido extraído del derecho civil, por lo tanto, para comprender a cabalidad su amplitud debe ser analizado desde donde proviene.

Para DE LA PUENTE Y LAVALLE (1993, p. 24) , “la buena fe es un elemento de la relación humana que se ha incorporado al Derecho, pero que éste no ha recibido tal como es sino dándole precisiones técnicas, lo cual ha determinado que se convierta en un concepto jurídico. En otras palabras, la buena fe no es una creación del legislador, que ha preestablecido su contenido, sino la adaptación de un principio inherente a la conducta de los hombres en la esfera más amplia de sus relaciones.”

Por otra parte, ERICH DANZ, indica que la buena fe significa “confianza, seguridad y honorabilidad basadas en ella, por lo que se refiere, sobre todo, al cumplimiento de la palabra dada; especialmente la palabra fe, fidelidad, quiere decir que una de las partes se entrega confiadamente a la conducta leal de la otra en el cumplimiento de sus obligaciones, confiando en que ésta no la engañará”. Incorpora Danz, asimismo, el criterio de “normalidad” de la actuación de los contratantes, señalando que “la buena fe prohíbe dar por querido lo que es usual o general querer. (...) el hombre cree y confía que una declaración de voluntad producirá sus efectos usuales, los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha surtido en casos iguales (...)”.

La buena fe es la lealtad al cumplimiento de la palabra dada, dicha palabra se concretiza, en este caso, en el contrato de préstamo personal. Por lo que, este principio debe estar presente en el desenvolvimiento o ejecución del contrato que regula la relación jurídica ya constituida entre la institución financiera y el cliente.

En este sentido y de conformidad a las cláusulas generales de contratación referidas al título ejecutivo a utilizarse ante incumplimiento de pago del deudor (de las cuales hemos hecho alusión al inicio de este capítulo), queda comprobado que los únicos títulos ejecutivos que se utilizarían en un eventual proceso ejecutivo¹⁷ serían el pagaré o excepcionalmente una letra de cambio; por lo tanto, si ya se pactó un título específico por qué se está utilizando otro. Esta situación implica que la propia institución financiera no cumpla con lo ella pactó en el contrato, faltando a su palabra y aprovechándose la el desconocimiento de su cliente y de la escasa regulación legal sobre cómo usar la liquidación de saldo deudor.

Para no ser ajenos a la realidad judicial, a continuación, se presentan casos donde el título a ejecutarse se trató de la liquidación de saldo deudor, pese a que, en el contrato de préstamo personal, la entidad financiera haya estipulado el uso de un pagaré. Los expedientes encontrados pertenecen Cuarto Juzgado de Paz Letrado de Piura y son los siguientes:

¹⁷ De esta afirmación debemos exceptuar a MIBANCO, pues conforme se verifica de su contrato, si ha establecido el uso de la liquidación de saldo deudor

- **Expediente N° 121-2012-0-2001-JP-CI-04.**

Este proceso único de ejecución empieza con la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra LUCIO RUMICHE CHUNGA. En la demanda se tenía como pretensión:

- a) Se cancele la suma de S/. 9, 318.59 contenida en la liquidación de saldo deudor proveniente de un contrato de préstamo personal con N° 10045500000000000568831

Con fecha 13 de noviembre del 2017 se emitió auto final declarando fundada la pretensión y teniendo como fundamentos de la decisión: “**3.4.** El artículo 132 inciso 7 de la Ley N° 26702, otorga mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldo deudor que emitan las empresas entre ellas el Banco; debiendo observar lo dispuesto en **la Resolución Casatoria** emitida en el **expediente N° 1674-2002**, en el cual la Corte Suprema ha establecido: “... que las liquidaciones del saldo deudor emitidas por las empresas del sistema financiero tienen mérito ejecutivo, siendo indispensable para que proceda la acción ejecutiva, que se presente conjuntamente con dicha liquidación del documento que dio origen a la deuda”. **3.5.** En ese sentido, la obligación derivada de la liquidación de saldo deudor ha quedado plenamente acreditada con el contrato de préstamo personal, por lo que la entidad ejecutante tiene expedita la acción ejecutiva para su cobro. (Véase anexo 8)

- **Expediente 02217-2015-0-2001-JP-CI-07**

Este proceso único de ejecución empieza con la demanda de Obligación de Dar Suma de Dinero interpuesta por BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ contra DARSY ISABEL NUNURA NAVARRO y CRISTOPHER URBINA SALDARRIAGA. La demanda contenía la siguiente pretensión:

- a) Se cumpla con el pago de la suma de **S/. 14, 856.69** contenida en la liquidación de saldo deudor que proviene del contrato de crédito N° 1004750000000454952

Con fecha 16 de marzo del 2016 se emite auto final declarando fundada la pretensión y teniendo como fundamentos de la decisión: “**9.** El presente proceso es uno de carácter ejecutivo, eminentemente formal y sustentado en el derecho contenido en la liquidación de saldo deudor, que corre a folios 30, cuyo origen de la obligación se deriva del contrato de crédito personal de folios 24 a 29, el cual tiene la calidad de título ejecutivo conforme al artículo 132° inciso 7 de la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros; asimismo reúnen los requisitos para lograr su cancelación vía proceso de ejecución, ya que la obligación contenida en la misma es cierta, expresa, exigible y liquida. **10.** Asimismo, se ha de tener presente la reiterada jurisprudencia existente al respecto como la mencionada en la **Casación N° 1990-1998/Lima** que expresa: “(...) Que, el inciso 7 del artículo 132 de la Ley 26702, da mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas comprendidas en dicha disposición legal, entre ellas los bancos, pero la sola presentación de aquella no sustenta el proceso de ejecución, pues como título aparte de reunir los requisitos que exige la ley de su creación, debe a su vez cumplir con los que establece el Código Procesal Civil, por la propia naturaleza expeditiva del proceso formal al que está sometido. Segundo. - Que en este sentido las liquidaciones de saldos deudores de las empresas financieras deben recaudarse necesariamente con el o los documentos donde conste el origen de la obligación, porque si no emanarían de un acto unilateral y por tanto arbitrario, que no califica por sí sola como títulos ejecutivos, ya que la ley y la doctrina reservan esa calidad a determinadas situaciones convencionales, en cuya formación siempre tiene intervención el obligado...”. **11.** En este tipo de procesos la carga de la prueba se invierte y obliga al deudor a probar que el importe contenido en la liquidación de saldo deudor derivada del contrato de crédito, ha sido cancelado, conforme a lo dispuesto por el artículo 1229° del Código Civil; Sin embargo, como ya se señaló, las partes ejecutadas no ha presentado documento alguno que demuestre que han cumplido con cancelar la obligación puesta a cobro, por lo que subsisten los motivos por los cuales se dictó el mandato ejecutivo”.

Con Resolución N° 6 de fecha 08/09/16 se declara firme y consentida el auto final.

- **Expediente 00808-2018-0-2001-JP-CI-04**

Partes procesales: a) Demandante: BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK. b) Demandado: LUIS ANTONIO CÓRDOVA FIOL.

Pretensión: Que el demandado cumpla con cancelar la suma de S/30,877.63 conforme a la liquidación del saldo deudor al 12/03/2018 inserto de folios 21 a 24, derivado de un contrato de mutuo.

Con fecha 15 de agosto del 2018 se emite auto final declarando fundada la pretensión y teniendo como fundamentos de la decisión: “3.3.- La accionante pretende se ejecuten la liquidación del saldo deudor, anexando un contrato de mutuo de fecha 29/12/2011 suscrito ante el notario Público de Piura Amarilis Ramírez Carranza y autorizada por el Notario Público de Piura Juan Manuel Quinde Rázuri, ello en atención al artículo 132° inciso 7 de la Ley 27602 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros establece: “(...) 7. El mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas. **3.4.-** En ese sentido y siguiendo el criterio jurisprudencial, las obligaciones derivadas de la liquidación de saldo de deudor, han quedado plenamente acreditadas con el contrato de mutuo de fecha 29/12/2011 suscrito ante el notario Público de Piura Amarilis Ramírez Carranza y autorizada por el Notario Público de Piura Juan Manuel Quinde Rázuri; reuniendo los requisitos para lograr su cancelación vía proceso de ejecución, ya que la obligación contenida en la misma es cierta, expresa, exigible y líquida; por lo que la entidad ejecutante tiene expedita la acción ejecutiva para su cobro.”

Con Resolución N° 4 de fecha 24/01/19 se declara firme y consentida el auto final.

- **Expediente 01358-2017-0-2001-JP-CI-04**

Partes procesales: a) Demandante: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ. b) Demandado: CHRISTIAN DANILO.

Pretensión: que el demandado cancele la suma de S/1,276.75 contenida en la liquidación de saldo deudor que proviene del contrato de Crédito Efectivo N°10047500000004220666.

Con fecha 18 de octubre del 2017 se emite auto final declarando fundada la pretensión y teniendo como fundamentos de la decisión: “3.3. La accionante pretende se ejecute la liquidación de saldo deudor, anexando el Contrato de Crédito Personal, ello en atención al artículo 132° inciso 7 de la Ley 27602 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros establece: “(...) 7. El mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas. **3.4.** Que, el artículo 132° inciso 7) de la Ley N°26702 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, otorga mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldo deudor que emitan las empresas entre ellas el Banco; debiendo observar lo dispuesto en la Resolución Casatoria emitida en el Expediente N°1674-2002, en el cual la Corte Suprema ha establecido “...que las liquidaciones del saldo deudor emitidas por las empresas del sistema financiero tienen mérito ejecutivo, siendo indispensable para que proceda la acción ejecutiva, que se presente conjuntamente con dicha liquidación el documento que dio origen a la deuda.” **3.5.** En ese sentido, la obligación derivada de la liquidación de saldo deudor de folios 26, ha quedado plenamente acreditada con el Contrato de Crédito Efectivo, obrante a folios 22 a 24, por lo que la entidad ejecutante tiene expedita la acción ejecutiva para su cobro.” (véase Anexo 9)

Con Resolución N° 4 de fecha 27/12/17 se declara consentido el auto final.

- **Expediente 07-2019-0-2005-JP-CI-01**

Proceso seguido en el Juzgado de Paz Letrado de Paita, tuvo como partes procesales: a FINANCIERA CONFIANZA SAA como demandante y a VICKY BEATRIZ CORONADO ZAPATA como demandada.

Pretensión: que la demandada pague la suma de S/. 13,386.91 contenida en la liquidación de saldo deudor que proviene del contrato de Crédito Personal.

De la casuística encontrada queda probado el uso de la liquidación de saldo deudor como título ejecutivo en los procesos únicos de ejecución de obligación de dar suma de dinero, a pesar de que conforme a las cláusulas generales de contratación se haya estipulado el uso del pagaré ante el incumplimiento de pago del deudor. Esta situación vulnera el derecho a la información pues el cliente no tiene conocimiento de que se utilizará este título, además vulnera el principio de buena fe porque la entidad financiera no cumple con lo que ella estipuló en el contrato.

4.1.2. Hipótesis específica

Debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor, porque de esa manera evitamos que, en un eventual proceso ejecutivo, la liquidación de saldo deudor reemplace al pagaré otorgado en representación del crédito.

PROBANZA:

Cuando se contrata un producto activo financiero, en este caso un contrato de préstamo personal, la entidad financiera a la par, hace firmar a su cliente un pagaré incompleto y/o completo. En el primer caso, ante incumplimiento de pago del deudor, el pagaré deberá ser llenado en sujeción al artículo 10° de la Ley 27287 y conforme a los acuerdos adoptados plasmados en el contrato. En el segundo caso, el pagaré ya expresará el monto exacto que el librador o firmante se compromete a pagar. Después de ello, la entidad financiera podrá exigir judicialmente el cumplimiento de la obligación accediendo a la vía ejecutiva.

Deseo acotar que, sin un título ejecutivo (pagaré), la entidad financiera tendría que exigir judicialmente el pago de su acreencia por medio de la vía ordinaria civil, que como sabemos es un procedimiento judicial más complejo y a la vez demanda de mucho más tiempo.

En cuanto al pagaré, “es un documento por el cual el firmante se compromete incondicionalmente a pagar una suma cierta de dinero a determinada persona o a su orden por el plazo especificado en el mismo”. (LEÓN, 1981). El pagaré es un título valor, que contiene un derecho patrimonial. Este título debe contener tal como lo señala el artículo 158° de La Ley de Títulos Valores, la denominación de pagaré; la indicación del lugar y la fecha de su vencimiento; La promesa incondicional de pagar una cantidad determinada de dinero o una cantidad determinable de éste, conforme a los sistemas de actualización o reajuste de capital legalmente admitidos; El nombre de la persona a quien o a la orden de quien debe hacerse el pago; La indicación de su vencimiento único o de los vencimientos; La indicación del lugar de pago y/o, en los casos previstos por el Artículo 53, la forma como ha de efectuarse éste; El nombre, el número del documento oficial de identidad y la firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal.

Por otro lado, el artículo 91° de la Ley 27287 señala que, para ejercer las acciones cambiarias que provienen del pagaré no sujeto a protesto¹⁸, es necesario que el plazo establecido en el título se halle vencido o resulte exigible la obligación según el texto del documento.

La acción directa derivada del pagaré caduca a los tres años a partir de la fecha de su respectivo vencimiento, así lo establece el artículo 96.1.a, de la ley en mención. Transcurrido este plazo, la entidad financiera no podrá ejercer la acción cambiaria directa por la vía ejecutiva; no obstante, tendrá expedita la vía causal.

Otro aspecto importante regulado por la Ley 27287, se encuentra en la sección novena. Dicha sección establece el procedimiento a seguir en caso de deterioro, destrucción, extravío y sustracción de los títulos valores. En caso de Deterioro notable o destrucción parcial se deberá proceder de acuerdo al artículo 101°, el cual señala que:

“101.1 Si un título valor se deteriora notablemente o se destruye en parte, subsistiendo los datos necesarios para su identificación, el obligado principal debe reponerlo por otro, si el tenedor lo exige mediante comunicación notarial, contra entrega del título original debidamente anulado.

101.2 Si además del obligado principal, dicho título hubiese sido suscrito por otras personas, éstas, si el tenedor lo exige mediante comunicación notarial, deberán intervenir y firmar en el nuevo título valor, con derecho a testar sus firmas en el documento original.

101.3 Si cualquiera de los requerimientos notariales señalados en los párrafos anteriores no fuese atendido en el plazo de tres días hábiles por el requerido, a petición del tenedor, el Juez ordenará el cumplimiento de las obligaciones antes señaladas, en proceso sumarísimo, por el sólo mérito de la presentación del título original; sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda por la negativa injustificada de sustituir el título o intervenir en él.”

Por su parte, BEAUMONT CALLIRGO Y CASTELLARES AGUILAR (p. 699) al comentar este artículo refiere lo siguiente: “Es conveniente procurar una definición o un concepto claro de lo que se entiende o debe entenderse por deterioro notable. Apréciase, que no solo se ha usado la expresión deterioro porque resultaría insuficiente a los fines de una regulación legislativa y un concepto eventualmente subjetivo y por tanto, arbitrario. Si el título valor por ejemplo, rasgado, o por descuido tiene una pequeña suciedad, o se le ha perforado en el margen para su conservación en un archivo de palanca, o por descuido se trazó una raya de lapicero, o finalmente se escribió algún documento pasando inadvertido que debajo de él se encontraba el título valor y por ende, aparecen huellas de letras, palabras y/o números pero no afectan en lo absoluto la presencia y la prestancia del título mismo con todos sus requisitos formales esenciales, no debería el magistrado devolver el título valor al justiciable haciéndole saber que hallándose deteriorado y existiendo regulación legislativa para la subsanación o sustitución de dicho documento, previamente debe dicho autor efectuar su trámite con arreglo a este artículo. Queda claro entonces, que esta regulación legislativa es para el caso de deterioro notable que torne inaceptable su ejecución en términos de la prestancia judicial, pero no obstante advirtiéndose del documento la presencia de los datos necesarios para identificarlos, el tenedor debe acudir a esta norma legal bajo comentario (...)”

Por otro lado, en el caso de deterioro total, extravío o sustracción del título valor, el artículo 102° de La Ley de Títulos valores prescribe lo siguiente:

¹⁸Por la generalidad en el pagaré se suscribe el deudor, se establece que el título ejecutivo en mención no estará sujeto a protesto

“En los casos que se señalen a continuación, quien se considere con legítimo derecho sobre el título valor, puede solicitar al Juez que se declare la ineficacia del título respectivo; y, que se le autorice a exigir el cumplimiento de las obligaciones principal y accesorias inherentes a dicho título valor, salvo que no resulten aún exigibles, en cuyo caso podrá solicitar se ordene la emisión de un duplicado quedando anulado el original, bajo responsabilidad del peticionario:

- a) haya desaparecido cualquier dato necesario para la identificación o determinación de los derechos que representa el título valor;
- b) el título valor haya sido extraviado;
- c) el título valor haya sido sustraído.”

Como puede observarse en los casos previstos en los literales a, b y c del artículo 102° in comendo, el interesado está facultado para ejercitar la acción examinada en este punto destinada a alcanzar:

- La declaración de ineficacia del título deteriorado totalmente o extraviado o sustraído.
- La autorización judicial para exigir el cumplimiento de las obligaciones representadas en el título de que se trate.
- La emisión de un duplicado del título y la anulación del original, en el supuesto de no ser aún exigibles las obligaciones representadas en el título valor.

JORGE WILLIAMS indica al respecto que “la pérdida comprende los casos en que se produce involuntariamente la pérdida de la posesión del título.

Por sustracción debe entenderse todos los casos en que se ha producido el despojo al portador de la posesión del título o se ha cambiado la detentación en posesión o cambiando el título de la posesión en contra de la voluntad de dicho portador. En consecuencia, resulta comprensivo de robo, hurto, estafa, extorción y abuso de confianza (...).

Por destrucción debe entenderse los casos de real destrozo del pagaré de manera que impida reconocérselos como tales. Pueden considerarse comprendidos en este supuesto los casos de destrucción de títulos en situaciones de peligro o de necesidad con el fin de evitar la sustracción de los mismos, pero debe excluirse la destrucción voluntaria con el propósito de remitir la deuda.”

Ante estos supuestos e iniciado un proceso judicial el Juez ordenará que los emplazados retengan el pago de las obligaciones representadas por el título valor y dispondrá la publicación de la solicitud, durante 5 (cinco) días consecutivos, en el diario oficial.

El artículo 105.1 señala que “El tenedor legítimo del título valor, que no hubiere sido emplazado y notificado con la demanda judicial, podrá formular oposición hasta dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del último aviso a que se refiere el Artículo 103, en el mismo proceso sumarisimo o, de estimarlo así el Juez, en proceso distinto.

Finalmente, el artículo 106.1 indica que el Juez declarará la ineficacia de un título valor, en los siguientes casos:

- a) Si el peticionario probare su derecho y transcurrido 10 (diez) días hábiles desde la última publicación del aviso de que trata el Artículo 103 no se hubiera formulado oposición; o
- b) Si formulada oposición, ésta hubiere sido desestimada en resolución firme.

Por su parte, la liquidación de saldo deudor, es un documento *sui generis*, emitido unilateralmente por la entidad financiera. En este documento se expresa el monto que el cliente debe a la entidad. Se debe añadir que, nuestro legislador no se ha preocupado por regular alguna formalidad preestablecida ni por establecer un plazo de caducidad, pese a ello este título debe contener el capital adeudado, así como la tasa y tipo de interés aplicada, indicando los periodos correspondientes donde el usuario dejó de cumplir con sus obligaciones.

De lo expuesto hasta aquí, es necesaria la elaboración de un cuadro comparativo que establezca las semejanzas y diferencias entre pagaré y liquidación de saldo deudor, ello nos permitirá un mejor entendimiento del tema. El cuadro comparativo elaborado es el siguiente:

Pagaré	Liquidación de saldo deudor
<ul style="list-style-type: none"> • Expresa una promesa incondicional de pago por parte del librador. • Es producto de la manifestación unilateral del librador o deudor. • Es un título valor que puede ser transmisible mediante el endoso, excepto que se estipule lo contrario. • Para tener eficacia debe cumplir con los requisitos contenidos en la ley. • Está sujeto a protesto, salvo que se haya exonerado de dicha formalidad. • La ley estipula que, desde la fecha de vencimiento del título, el acreedor tiene tres años para ejercer la acción cambiaria directa. • Si el pagaré se perjudica, la entidad financiera pierde la acción ejecutiva. • Si el pagaré se deteriora, extravía o es sustraído se debe iniciar un proceso judicial que busque se declare la ineficacia del pagaré o que se emita un duplicado del mismo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Señala el monto de adeudo del cliente para con la entidad financiera. • Es producto de la manifestación unilateral de la entidad financiera. • Es un documento que no está destinado a la circulación. • La ley no ha establecido que formalidad debe cumplir este título; no obstante, el VI Pleno Casatorio Civil establece que requisitos debe contener. • No requiere ser protestado ya que no es un título valor. • No se establece un plazo de caducidad. • Si la liquidación de saldo deudor se deteriora, extravía o es sustraída, la entidad financiera podrá emitir una nueva liquidación.

Los datos obtenidos nos permiten concluir que pagaré y liquidación de saldo deudor son documentos o títulos disímiles entre sí, con naturaleza jurídica y regulación legal diferente; por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, la liquidación de saldo deudor debería ser utilizada como reemplazo del pagaré que se otorgó en representación del crédito contenido en el contrato de préstamo personal. En este sentido, debería quedar prohibida la utilización de la liquidación de saldo deudor para revivir derechos fenecidos (en caso el pagaré se encuentre prescrito) o para reemplazar el pagaré cuando este se haya deteriorado, destruido, extraviado o sustraído.

De este mismo criterio es el VI Pleno Casatorio Civil, que en su considerando 57° ha establecido “solo las liquidaciones de saldo deudor son consideradas títulos ejecutivos. Sin embargo, cuando la obligación este contenida en un título valor, tal liquidación no suple al título valor, en particular porque

los derechos cartulares tienen sus propias reglas a comenzar por los plazos de prescripción que no pueden ser soslayadas con la emisión de una liquidación, por los demás hechas “como sea”.

En este sentido, el considerando 57° prohíbe que la liquidación de saldo deudor reemplace un título valor que contiene o representa una obligación, pues considera que este título ejecutivo posee sus propias reglas, en atención a su naturaleza jurídica.

En relación con lo analizado hasta aquí, ha quedado demostrado que la liquidación de saldo deudor no puede reemplazar a un pagaré que surge de un contrato de préstamo personal. Lo que sí puede hacerse, es que en dicho contrato se estipule que se usará la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor. De esta manera, la entidad financiera tendría dos títulos ejecutivos con los que podría acceder a un proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero. Ambos títulos serán excluyentes entre sí, es decir, si se ingresa al proceso ejecutivo con un pagaré ya no podrá utilizarse la liquidación de saldo deudor y si, por el contrario, se utiliza la liquidación de saldo deudor ya no podrá utilizarse el pagaré; ello porque existiría un abuso de derecho por parte de la entidad financiera al querer cobrar dos veces una misma deuda.

Ahora bien, de la comprobación de nuestra hipótesis general y específica nos permiten darnos cuenta que es necesario que en el contrato de préstamo personal se establezca la utilización de la liquidación de saldo deudor cuando el cliente incumpla con sus obligaciones. Pero para que ello se cumpla será necesaria la modificación, inciso 7° del artículo 132° de la Ley 26702 o en su defecto que la SBS emita una norma que obligue a las entidades financieras a estipular en sus contratos el uso de la liquidación de saldo deudor.

A. RESPECTO AL VI PLENO CASATORIO CIVIL

No quisiera terminar este capítulo sin referirme al VI Pleno Casatorio Civil, publicado el 24 de octubre del 2014. Este pleno reguló que documentos debe presentar el ejecutante de una garantía real de hipoteca.

Debemos precisar que, si bien nuestra investigación no desarrolló el tema de ejecución de garantías, sí desarrolló el tema de la liquidación de deudor, documento que ha sido regulado por el Pleno Casatorio.

Para una mayor comprensión, es necesario indicar que la ejecución de garantías es definida como “una acción real que corresponde al titular de un derecho real de garantía, para hacer efectiva la venta de una cosa, por incumplimiento de la obligación garantizada, lo que se despacha en virtud del título de ejecución constituido por el documento que contiene la garantía (escritura pública), conjuntamente con el estado de cuenta de saldo deudor y los demás requisitos exigidos en el artículo 720 del Código Procesal Civil”¹⁹.

En ese sentido, el VI Pleno Casatorio Civil ha establecido que documentos debe presentar la entidad financiera en su demanda de ejecución de garantías; por lo que se ha referido al ESTADO DE CUENTA DE SALDO DEUDOR²⁰, y es justo este documento el que guarda muchísima relación con el tema estudiado.

¹⁹ Cas. N° 2556-2006-Lima Norte

²⁰ Requisito regulado para que proceda la ejecución de garantías, establecido en el inciso 2 del artículo 720° del Código Procesal Civil.

Continuando con nuestro análisis, el VI Pleno define al Estado de cuenta de saldo deudor en su considerando 30, señalando que “el saldo deudor es un documento consistente en un acto unilateral de liquidación del propio ejecutante, es decir lo que a criterio del acreedor constituye lo que el deudor debería y que es una obligación líquida” y por consiguiente “es un documento no sujeto a formalidad preestablecida”.

Asimismo, el Pleno Casatorio en mención ha establecido los requisitos que debe contener el estado de cuenta saldo deudor, indicando: “El saldo deudor debe contener como mínimo la indicación del capital adeudado, así como la tasa y tipo o clase de interés aplicada, precisando los periodos correspondientes.”

El trabajo realizado en este Pleno merece reconocimiento, puesto que nuestros Jueces Supremos han establecido criterios importantes para poder ejecutar una garantía. No obstante, en el análisis desplegado incurren en un error.

El error encontrado consiste en utilizar como sinónimos los términos: liquidación de saldo deudor, estado de cuenta de saldo deudor y saldo deudor. Dichos términos tienen en común expresar un monto de deuda, pese a ello, no son lo mismo.

De este mismo criterio es PALONIMO MONTENSINOS que señala que el VI Pleno, “utilizó de forma indistinta (fundamento 30 al 35 del Sexto pleno casatorio) la terminología de estado de cuenta de saldo deudor y liquidación de saldo deudor como si se refirieran a lo mismo, cuando ello no es así, la diferencia no radica solamente en la denominación sino en lo que representa uno y otro.”

Continúa PALOMINO (pg.99) precisando que “el estado de cuenta de saldo deudor es un requisito de procedibilidad para los procesos de ejecución de garantías en mérito al numeral 2 del artículo 720° del código procesal civil, y es requerida cuando se quiere ejecutar una obligación contenida en un título ejecutivo y esta obligación esté garantizada por alguna garantía real, mientras que la liquidación de saldo deudor en un documento que tiene mérito ejecutivo y por tanto es un título ejecutivo.”

Por otra parte, la liquidación de saldo deudor, es un documento que tiene mérito ejecutivo porque así lo ha dispuesto el artículo 132, inciso 7, de la Ley 26702. Señala PALOMINO que “; la Corte Suprema en múltiple jurisprudencia ha reafirmado la calidad de título ejecutivo que poseen las liquidaciones de saldo deudor emitidas por las entidades del Sistema Financiero y lo reconoce implícitamente en el precedente segundo “b) Tratándose de una garantía real constituida para asegurar cualquier obligación que tuviera el constituyente de la garantía frente a una empresa del sistema financiero o para asegurar una obligación existente, determinable o futura, se deberá (...) b.3. Tratándose de operaciones distintas a las indicadas en los acápites anteriores, documento que contenga la liquidación de saldo deudor conforme a lo establecido en el artículo 132 inciso 7 de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, suscrito por apoderado de la entidad del sistema financiero con facultades para liquidación de operaciones, detallando cronológicamente los pagos y abonos desde el nacimiento de la relación obligatoria hasta la fecha de la liquidación del saldo deudor, con expresa indicación del tipo de operación así como la tasa y tipos de intereses aplicables para obtener el saldo deudor, asimismo, la parte ejecutante puede presentar prueba idónea y especialmente documental para acreditar la obligación objeto de la demanda, teniéndose en cuenta para ello los fines de los medios probatorios previstos en el artículo 188° del Código Procesal Civil.

Finalmente, hablar de saldo deudor es referirse únicamente a cuentas corrientes²¹ o a contratos de tarjetas de crédito²², cuando el cliente de la entidad financiera no haya cumplido con efectuar los pagos indicados ocasionando que se deba realizar el cierre de la cuenta corriente. Al respecto, el artículo 228° de la Ley 26702, establece que:

“La empresa puede, en cualquier momento, remitir una comunicación al cliente, advirtiéndole de la existencia de saldos deudores en su cuenta y requiriéndole el pago. Transcurridos quince (15) días hábiles de la recepción de la comunicación sin que hubiere observaciones, la empresa está facultada para girar contra el cliente por el saldo más los intereses generados en dicho período, una letra a la vista, con expresión del motivo por el que se la emite. El protesto por falta de pago de la indicada cambial, en la que no se requiere la aceptación del girado, deja expedita la acción ejecutiva.”

Para exigir el saldo deudor que se registre en una cuenta corriente o en contrato de tarjeta de crédito se deberá cumplir con el artículo en mención; por lo que se ingresará al proceso ejecutivo de obligación de dar suma de dinero a través de una letra de cambio que no necesitará la aceptación del deudor. En este caso el saldo deudor no tiene mérito ejecutivo.

De lo expuesto, podemos concluir que, el estado de cuenta de saldo deudor es un acto liquidativo y un requisito de procedibilidad en los procesos de ejecución de garantías; el saldo deudor, es un requisito para proceder al cierre de cuenta corrientes y contratos de tarjetas de crédito; y la liquidación de saldo deudor, es un documento que tiene mérito ejecutivo. Por lo tanto, dichos términos no pueden ser utilizados para referirse a lo mismo.

²¹ **La Cuenta Corriente**, Es la Cuenta que te permite administrar, transferir y disponer de tus fondos de manera eficiente mediante la emisión de cheques contra el saldo disponible de la cuenta.

²² **Reglamento de las Tarjetas de Crédito y Débito, 2013-Resolución S.B.S. Nº 6523 -2013**, en su artículo 3° define a la tarjeta de crédito como un instrumento que permite, de acuerdo con lo pactado entre la empresa emisora y el titular, realizar operaciones con cargo a una línea de crédito revolvable, otorgada por la empresa emisora a favor del titular.

CONCLUSIONES

- La regulación legal que se le da a la liquidación de saldo deudor en el inciso 7, del artículo 132 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y seguros-Ley 26702, es deficiente, lo que ha generado inconvenientes en la práctica judicial.
- Para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor se necesita que se haya estipulado en el contrato de préstamo personal. De esta manera se garantiza el derecho a la información del consumidor o cliente; asimismo que se evita la vulneración del Principio de buena fe.
- Estipular en el contrato de préstamo personal que se hará uso de la liquidación de saldo deudor evita que la liquidación de saldo deudor reemplace al pagaré otorgado en representación del crédito; ello porque, se estipula el uso alternativo de dos títulos excluyentes entre sí.
- El Pagaré y la Liquidación de Saldo Deudor son documentos o títulos disímiles entre sí, con naturaleza jurídica y regulación legal diferente.
- El VI Pleno Casatorio Civil incurre en un error al utilizar de manera indistinta los términos Liquidación de Saldo Deudor, saldo deudor y estado de cuenta de saldo deudor; puesto que el estado de cuenta de saldo deudor es un acto liquidativo y un requisito de procedibilidad en los procesos de ejecución de garantía; el saldo deudor, es un requisito para proceder al cierre de cuenta corrientes y contratos de tarjetas de crédito; la liquidación de saldo deudor, es un documento que tiene mérito ejecutivo.

RECOMENDACIONES

- Se sugiere al Presidente del Congreso de la República del Perú la creación de una ley respecto a la liquidación de Saldo deudor o en su defecto se realice la modificación del artículo 132, inciso 7 de la Ley la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y seguros-Ley 26702, a efectos dicho inciso contemple que para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor se requiere que se haya estipulado en el contrato. De este modo, la Entidades Financieras se encontrarán obligadas al cumplimiento estricto de la ley.
- Se sugiere a las Entidades del Sistema Financiero informar correctamente a los consumidores de sus servicios financieros. Esta información debe abarcar hasta la forma en cómo se procederá a ejecutar la obligación incumplida.
- Se sugiere a la Corte Suprema de Justicia del Perú, la elaboración de un pleno jurisdiccional, donde se establezca en qué casos específicos no se podría utilizar Liquidación del Saldo deudor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- ALFREDO GONZAINI, O. (2005). *Elementos del Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires, Argentina: Ediar Sociedad Anónima.
- ALSINA, H. (1962). *Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial*. Buenos Aires: Ediar Soc. Anon.
- ALVARADO VELLOSO, A., & GARCIA, A. (1980). El Proceso Ejecutivo. Pautas para una Reforma Integral. *Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales* , 7-29.
- ALVAREZ JULIA, L., NEUSS, G. R., & y WAGNER, H. (1990). *Manual de derecho procesal. Segunda edición* . Buenos Aires: Astrea.
- ANTELO ANTELO, A. L. (27 de 06 de 2019). *Academia* . Obtenido de https://www.academia.edu/7558740/Origen_e_historia_del_pagares
- ARANA, M. d. (14 de 06 de 2018). *INDECOPI-Revista de la Competencia y Propiedad Intelectual*. Obtenido de <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/77>
- ARGERI, S. A. (1982). *Diccionario de derecho comercial y de la empresa*. Buenos Aires: Editorial Astrea.
- ARIANO, E. (1998). *El proceso de ejecución*. Lima: Rodhas.
- ARIANO, E. (s.f.). *La tutela jurisdiccional del crédito: proceso ejecutivo, proceso monitorio, condenas con reservas*. Lima: Jurista editores.
- ASCARELLI, T. (2008). *Teoría General de los títulos de crédito*. México.
- AVELINO SÁNCHEZ, E. M., TORRES RAMÍREZ, J. B., & TIPE TOPERVISCO, R. (2016). El Boom de los Créditos de consumo en el Perú. *Revista de la Facultad de Ciencias Contables*, 11.
- AZULA CAMACHO, J. (1994). *Manual de Derecho Procesal Civil. Tomo IV, Segunda Edición* . Santa Fe de Bogotá : Temis S.A.
- BACCARIO CASTAÑEIRA, P. E. (1980). *Títulos de crédito. Letra de cambio-Pagaré-Factura conformada* . Argentina: Ediciones Meru S.R.L.
- BEAUMONT CALLIRGOS, R., & CASTELLARES AGUILAR, R. (2000). *Comentarios a la Nueva Ley de Títulos Valores*. Lima: Gaceta Jurídica.
- BELTRÁN, J. (2003). *Código Civil Comentado*. Lima: Gaceta Jurídica.
- BENITES, E. (s.f). El cumplimiento de prestaciones dinerarias . *Themis*, 175.
- BERGEL, S., & PAOLANTONIO, M. (1992). *Acciones Cambiarias y excpciones cambiarias*. Buenos Aires.
- BERMUDEZ TAPIA, M. A., & BELAUNDE BORJA, G. (2008). *Diccionario Jurídico* . Lima: San Marcos EIRL.

- BONFANTI, M. A., & GARRONE, J. A. (1982). *De los títulos de crédito. Segunda Edición*. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
- BROSETA PONT, M. (1983). *Manual del Derecho Mercantil*. Madrid : Tecnos .
- CABANELLAS DE TORRES, G. (2008). *Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual*. Buenos Aires: Heliasta S.R.L.
- CALDUCH CERVERA, R. (2014). *Métodos y Técnicas de Investigación Internacional* (2da Edición ed.). Madrid.
- CAMACHO.Walter, G., & CASTRO TRIGOSO, N. (2010). *Definición del contrato del mutuo en el Código Civil Comentado. Tomo VIII. 3era Edición*. Lima : Gaceta Jurídica.
- CANCINO VARGAS, S. (2018). *La Cosa Juzgada en el Proceso de Ejecución* . Lima.
- CARBONEL, J. (1994). *La protección al Consumidor titular de tarjetas de crédito en la comunidad Europea*. Madrid: Beramar.
- CÁRDENAS QUIRÓZ, C. (2000). Las Cláusulas Generales de Contratación y el Control de las Cláusulas Abusivas. *Revista Crítica de Derecho Inmobiliario*, 1226.
- CARRIÓN LUGO, J. (2000). *Tratado de Derecho Procesal Civil*. Lima: Grijley.
- CASASSA CASANOVA, S. N. (2011). *El Debido Proceso de Ejecución de Obligación de Dar Suma de Dinero: En Busca de un Proceso Justo*. Pontificia Universidad Católica del Perú , Escuela de Posgrado, Lima.
- CAZAU, P. (2006). *Introducción a la investigación en Ciencias Sociales*. Buenos Aires: El sicoasesor.
- CHOCRON GIRALDEZ, A. M. (2000). *Los Principios Procesales del Arbitraje*. Barcelona: Bosh.
- COLIN, A., & CAPITANT, H. (1955). *Curso Elemental de Derecho Civil*. Madrid: Instituto Editorial Reus.
- CÓRDOVA CUPITA, Y. (2012). *Las cláusulas generales de contratación en el Perú y su relación con el estado de desprotección de los derechos del consumidor* . Lima.
- CORTÉS CORTÉS, M., & IGLESIAS LEÓN, M. (2004). *Generalidades sobre la Metodología de la Investigación*. Univeridad Autónoma del Carmen.
- CORTEZ FIGUEROA, C. (s.f). Títulos Ejecutivos. *Biblioteca virtual del intituto de investigaciones jurídicas de la UNAM*.
- CUADROS VILLENA, C. V. (1997). *Derechos de contratos*. Lima : FECAT.
- DANZ, E. (1955). La Interpretación de los Negocios Jurídicos. *Revista de Derecho Privado*, 194.
- DE LA FUENTE HONTAÑÓN, R. (25 de Noviembre de 2010). *Repositorio Institucional PIRHUA*.
Obtenido de

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1658/El_mutuo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

- DE LA OLIVA SANTOS, A. (2002). *Derecho Procesal Civil (Ejecución Forzosa). Segunda Edición*. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces SA.
- DE LA PUENTE Y LAVALLE, M. (1993). *El Contrato en General*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- DE TRAZEGHEIS GRANDA, F. (2011). El código Civil de 1984: ¿Vejez prematura o prematura declaración de vejez? Reflexiones a propósito del papel del contrato en la construcción de un orden social libre. *Themis*, 24.
- DEL PRADO RODRIGUEZ, E. (s.f). EL pagaré: Marco Jurídico y vigencia en las relaciones entre los actos de la economía cubana. *Derecho y Cambio Social*, 5-6.
- DIAZ PICAZO, L., & GULLÓN, A. (1985). *Sistema de Derecho Civil, Volumen II*. Madrid : 1985.
- DICCIONARIO DEL ESPAÑOL JURÍDICO. (s.f). REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Obtenido de <https://dej.rae.es/lema/título-ejecutivo>
- DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. (2004). Contrato y Libertad Contractual. *Themis*, 8.
- DONATO, J. D. (1997). *Derecho Procesal Civil Comercial y Laboral*. Buenos Aires: Cooperadora de Derecho y Ciencias Políticas.
- DOYHARCABAL CASSE, S. (1998). Naturaleza Jurídica del Mutuo: Contrato real, Consensual o Solemne . *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso* , 202-203.
- ECHANDÍA, D. (1997). *Teoría General del Proceso*. Buenos Aires: Universidad.
- ECHEVERRI SALAZAR, V. M. (2010). Del Contrato de libre discusión. *Opinión Jurídica*.
- FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, C. A. (2014). Contratos Masivos en el Tráfico Comercial Económico . *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina Sagrado Corazón de Jesús*, 62.
- FLORES FLORES, P. (31 de Enero de 2018). *Legis.pe*. Obtenido de <https://legis.pe/contratacion-consumo-civil-apuntes-contrato-adhesion-clausulas-generales-contratacion/>
- GARCIA AMIGO, M. (1969). *Condiciones Generales de los Contratos*. Madrid.
- GARRIGUES, J. (1987). *Curso de Derecho Mercantil. Tomo III*. Bogotá, Colombia: Temis.
- GIRALDI, P. M. (1973). *Cuenta Corriente Bancaria y Cheque*. Buenos Aires: Astrea.
- GÓMEZ CONTRERAS, C. D. (1996). *Títulos Valores*. Santa Fe de Bogotá, Colombia: Temis SA.
- GOMEZ DE LIAÑO GONZALEZ, F. (1992). *El proceso civil. Segunda edición*. España: Fórum SA.
- GÓMEZ LEO, O. R. (1991). *Manual del Derecho Cambiario*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
- GONZALES CABRERA, M. L. (2017). "LA LIMITACIÓN A LA PERMANENCIA DE DATOS NEGATIVOS EN LA CENTRAL DE RIESGOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS, EL DERECHO A

LA AUTODETERMINACIÓN INFORMATIVA, Y SU INFLUENCIA EN LA PROTECCIÓN AL AHORRO DEL PÚBLICO. Lima.

- GUERRA CERRÓN, J. M. (s.f.). *Proceso Único de Ejecución: Una vía Privilegiada*. Lima : Gaceta Jurídica.
- GUZMÁN, Z. (1992). *Manual de Acciones Cambiarias*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad de Lima.
- HERNÁNDEZ SAMPIERI, R., FERNÁNDEZ COLLADO, C., & BAPTISTA LUCIO, M. d. (2014). *Metodología de la investigación*. México: Interamericana Editores SA.
- HINOSTROZA MINGUEZ, A. (2017). *Derecho Procesal Civil - Tomo XI: Procesos de Ejecución*. Lima : Jurista Editores EIRL.
- HUMBOLDT, L. (1968). *La Letra de Cambio y Pagaré*. Lima: Universo.
- JIMÉNEZ VARGAS-MACHUCA, R. (2001). *Instituciones de Derecho Privado – Contratación Contemporánea*. Lima: Palestra Editores.
- JURÍDICO, D. D. (s.f). *REAL ACADEMIA ESPAÑOLA*. Obtenido de <https://dej.rae.es/lema/título-ejecutivo>
- LAFAILLE, H. (1953). *Tratado de las obligaciones, tomo VI* (Vol. 1). Buenos Aires: Ediar.
- LAVALLE ZAGO, E. (1991). *Contratos - Contratos en general*. Lima: Ediciones Jurídicas.
- LE PERA, S. (1974). *Cuestiones de Derecho Comercial Moderno*. Buenos Aires: Astrea.
- LEDESMA NARVAEZ, M. (2009). *Jurisdicción y Arbitraje*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
- LEDESMA NARVÁEZ, M. (2018). *LA TUTELA CAUTELAR Y DE EJECUCIÓN-PROCESOS DE EJECUCIÓN*. Lima, Perú: El Búho E.I.R.L.
- LEDESMA, M. (2008). *Comentarios al Código Procesal Civil. Tomo III*. Lima: Gaceta Jurídica.
- LEGON, F. (1981). *Letra de Cambio y Pagaré*. Buenos Aires: A. Perrot.
- LEÓN BARANDIARÁN, J. (1992). *Tratado de Derecho Civil*. Lima: WG editor.
- LEÓN, F. A. (1981). *Letra de Cambio y Pagaré*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- LIEBMAN, E. T. (1980). *Manual de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- MARTÍNEZ ÁLVAREZ, C. A. (2016). Las principales características y cláusulas de contrato de mutuo dinerario. *Asesoría Empresarial*, 1-2.
- MELI MUNDI, J., & BRUZZONE, P. (2006). *El dinero y el ahorro- Un buen mañana se planifica hoy*. Argentina.

- MENDOZA LUNA, A. (2001). Desmaterialización de valores mobiliarios. Algunas reflexiones a propósito de la Ley de Títulos Valores. *Revista electrónica de Derecho Informático*.
- MERINO MERCHAN, J. F., & CHILLON MEDINA, J. M. (2006). *Tratado de Derecho Arbitral, Tomo I. Tercera Edición*. Navarra : Thomson –Civitas.
- MESSINEO, F. (1954). *Manual de Derecho Civil y Comercial*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- MESSINEO, F. (1971). *Manual de Derecho Civil y Comercial*. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América.
- MIRANDA CANALES, M. (1995). *Derechos de los Contratos*. Lima: Ediciones Jurídicas.
- MONTERO AROCA, J. (1995). *La naturaleza jurídica del juicio ejecutivo*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- MONTERO AROCA, J. (2004). *Tratado de Proceso de Ejecución Civil*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- MONTERO AROCA, J., & FLORS MATIES, J. (2004). *Tratado de proceso de ejecución civil. Tomo I y II*. Valencia, España .
- MONTOYA MANFREDI, U. (1982). *Comentarios a la ley de títulos valores*. Lima : Desarrollo.
- MORA G., N. R. (1973). *Procesos de Ejecución. Tomo I y II*. Bogotá : Temis.
- MORENO CATENA, V. (1986). Algunos problemas del juicio ejecutivo. *Documentación Jurídica, Ministerio de Justicia, Secretaría General Técnica*, 135-158.
- MUÑOZ, L. (1973). *Títulos Valores Crediticios. Segunda Edición*. Buenos Aires: Tipográfica Editora.
- MURO ROJO, M. (2016). *Contratos civiles y obligaciones*. Lima: Gaceta Jurídica.
- NORTHCOTE SANDOVAL, C. (2008). Análisis del contrato de mutuo. *Actualidad Empresarial*, 172.
- ORREGO ACUÑA, J. A. (2015). Teoría General del Contrato. *Academia*, 2.
- OSSORIO, M. (S.f). *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*. Guatemala: Datascan SA.
- OSTERLING PARODI, F. (2007). *Las Obligaciones, Octava Edición*. Lima : GRIJLEY.
- OSTERLING PARODI, F., & CASTILLO FREYRE, M. (2008). *Compendio de Derecho de las Obligaciones*. Lima: Palestra.
- PALACIO PIMENTEL, G. (2002). *Las obligaciones en el derecho peruano*. Lima: Huallaga.
- PALACIO, L. E. (1994). *Derecho Procesal Civil, Tomo VII*. Buenos Aires : Ed. Abeledo Perrot.
- PALOMINO MONTESINOS, J. J. (2016). *El Mérito Ejecutivo de la Liquidación de Saldo Deudor, en el Proceso Único de Ejecución en el Distrito Judicial de Lima*. Lima.

- PELLAS, C. (2008). *Maestro de la educación Financiera un sistema para vivir mejor- Red financiero-BAC-CREDOMATIC*. Costa Rica- San José.
- PÉREZ SOLF, Y. (s.f). Los efectos de la homologación de la transacción extrajudicial. Análisis casatorio: Casación N° 3435-2009 Arequipa. *Revista de Investigación Jurídica*, 4-5.
- PÉREZ VÁSQUEZ, C. (s.f). Derecho Mercantil II. *Foro Jurídico*, 138. Obtenido de http://gc.initelabs.com/recursos/files/r157r/w12991w/DerechoMerca%20II_2aEd_06.pdf
- PICHÓN DE LA CRUZ, J. (25 de Agosto de 2013). *Argumentos al Banquillo*. Obtenido de <http://argumentosalbanquillo.blogspot.com/2013/08/tratamiento-de-la-prueba-anticipada-en.html>
- PINO DEL CARPIO, R. (1970). *Ley Nro. 16587 sobre títulos valores*. Lima.
- PINTADO JAIME, R. (2017). *Cosa Juzgada en el Proceso Único de Ejecución en el Juzgado Comercial de Lima - Sede Petith Thouars 2016*. Universidad Cesar Vallejo, Escuela Profesional de Derecho , Lima.
- PIOX ANZUETO, B. Z. (2015). *Análisis jurídico doctrinario de los títulos de crédito del juicio ejecutivo cambiario en Guatemala*. Universidad Rafael Landívar , Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Guatemala.
- PRIETO MONROY, C. A. (2010). Acerca del Proceso Ejecutivo. Generalidades y su legitimidad en el Estado Social de Derecho. *Dialnet*, 45-46.
- RAMOS MENDEZ, F. (1992). *Derecho procesal civil*. Barcelona : José María Bosh Editor SA.
- RAMOS PADILLA, C. (s.f.). Teoría General de Títulos Valores. *Boletín virtual-Asociación Universidad Privada San Juan Bautista*, 21.
- Reglamento de las Tarjetas de Crédito y dDébito, Resolución S.B.S. 6523-2013 (Superintendencia de Banca y Seguro 30 de Octubre de 2013).
- REZZONICO, J. C. (1987). *Contratos con cláusulas predispuestas. Condiciones negociales generales*. Buenos Aires: Astrea.
- RINESSI, A. J. (2006). *Relación de Consumo y Derechos del Consumidor*. Buenos Aires: Aestrea.
- RIOJA BERMUDEZ, A. (2014). *Derecho Procesal Civil: Teoría General, Doctrina, Jurisprudencia* . Lima: ADRUS D&L EDITORES SAC.
- RODRÍGUEZ AZUERO, S. (1990). *Contratos Bancarios*. Bogotá: ABC Ltda.
- ROLDAN PEREDA, F. A. (2016). *PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR EN EL CODIGO CIVIL Y CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR FRENTE A LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS POR ADHESIÓN DE TELEFONÍA FIJA*. Trujillo.
- ROMERO ZAVALA, L. (2001). *El derecho de las obligaciones en el Perú*. Lima: Fecat.

- ROMERO, J. G. (1924). *Estudios de Legislación Procesal. Tomo IV*. Lima : Librería Francesa Científica y Casa Editorial E. Rosay.
- SALEILLES, R. (1929). *De la déclaration de volonté, contribution a l' étude de l' acxte juridique dans le Code*. París: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
- SALGADO LÉVANO, A. C. (2007). Investigación Cualitativa: Diseño Evaluación del rigor metodológico y retos. *Liberabit*, 72.
- SANCHEZ CALERO, F. (1986). *Instituciones del derecho mercantil*. Madrid: Revista de Derecho Privado .
- SANDOVAL LÒPEZ, R. (1983). *Manual del derecho civil y comercial. Tomo II*. Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- SANDOVAL LÓPEZ, R. (1983). *Manual del Derecho Comercial. Tomo II. Segunda Edición* . Chile: Editorial Jurídica de Chile.
- SEVILLA AGURTO, P. H. (2016). El Saldo Deudor y ¿El Proceso Único de Ejecución? *Actualidad Jurídica*, 54-56.
- SHREIBER, A. (1994). *Los contratos modernos-La tarjeta de crédito*. Lima: Gaceta Jurídica.
- SILVA VALLEJO, J. A. (1989). *Teoría general de los títulos valores. Libro homenaje a Ullis Montoya Manfredi* . Lima: Cultural Cuzco.
- SOLÍS ARANA, V. (2017). *Homenaje al Doctor Othion Pérez Fernández del Castillo*. México: Colegio de Profesores de Derecho Civil, Facultad de Derecho de la UNAM.
- SOTO ALVARÉS, C. (1994). *Prontuario de Derecho Mercantil*. México: Noriega Editores.
- SOTO COAGUILA, C. A. (2003). Las Cláusulas Generales de Contratación y Las Cláusulas Abusivas en los Contratos Predisuestos . *Vniversitas*, 581.
- SUPINO, D., & DE SEMO, J. (1950). *De la Letra de cambio y el pagaré cambiario*. Buenos Aires.
- TEJADA RODRIGUEZ, B. E. (2017). *Regulación de la Causal de Contradicción Basada en el Erróneo Cálculo del Estado de Cuenta de Saldo Deudor como Mecanismo de Defensa del Ejecutado*. Universidad Privada Antenor Orrego, Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Políticas, Trujillo.
- TORRES BALLESTÉ, J. e. (1913). *Enciclopedia Jurídica Española* . Barcelona : Francisco Ceix Editor.
- TORRES VASQUEZ, A. (2014). *Teoría General de las Obligaciones, tomo I*. Lima: Pacífico .
- TORRES Y TORRES LARA, C. (1984). La Mercantilización del Nuevo Código Civil Peruano. *Conferencia Sustentada en la Facultad de Derecho de la Universidad "San Luis Gonzaga"*, (pág. 7). Lima.
- URÍA, R. (1997). *Derecho Mercantil*. Madrid: 1997.

- VI PLENO CASATORIO CIVIL , Casación N° 2402-2012-LAMBAYEQUE (Corte Suprema de Justicia de la Republica 24 de octubre de 2014).
- VIGIL OLIVEROS, E., & UCHUYPUMA TUPIA, D. (2018). LAS ACCIONES CAMBIARIAS Y EXTRACAMBIARIAS DE LOS TÍTULOS VALORES. *UNIFE*, 111.
- VILELA CARBAJAL, J. E. (2010). El Derecho a la Información en la protección del consumidor. Especial referencia a la Contratación Bancaria. *Derecho y Sociedad*, 3.
- VILLANUEVA HARO, B. (2006). Aspectos Generales al Proceso Ejecutivo, La Problemática Jurídica de la Sentencia Innecesaria y Propuestas de Cambio al Pensamiento Procesal Civil . *Revista Interneta de práctica jurídica*, 23-24.
- VILLEGAS, C. G. (1989). *Manual de títulos valores*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.
- VILLOTA CERNA, M. A. (2016). AVANCES Y ORIENTACIONES DEL NUEVO CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR . *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* N° 11, 24.
- VIVANTE, C. (1936). *Tratado de Derecho Mercantil. Volumen III*. Madrid: Reus.
- YADAROLA, M. (1961). *Títulos de crédito*. Buenos Aires: Tipográfica Editora.
- ZAVALA, V. (2017). *Cámara de comercio de Lima*. Obtenido de https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r731_2/02.pdf

ANEXOS

ANEXO I

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							
AÑO	2019						
ACTIVIDADES	MAY.	JUN.	JUL.	AGOS.	SET.	NOV.	DIC.
ETAPA DE ANÁLISIS – METODOLÓGICA							
ANÁLISIS PREVIO	X	X					
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	X	X					
RECOPIACIÓN Y ORDENAMIENTO DE DATOS	X	X					
CLASIFICACIÓN DE DATOS	X	X	X				
ANÁLISIS CRÍTICO E INTERPRETATIVO	X	X	X				
ETAPA ELABORATIVA							
ANÁLISIS METÓDICO		X	X	X	X	X	
REDACCIÓN INICIAL	X	X					
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO		X					
APROBACIÓN DEL PROYECTO			X				
INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN			X	X	X		
SEGUNDA REDACCIÓN			X	X	X		
PREPARACIÓN BIBLIOGRÁFICA, CITAS, ANEXOS				X	X		
CORRECCIÓN E IMPRESIÓN DE LA TESIS						X	
SUSTENTACIÓN							X

ANEXO 2.

PRESUPUESTO

Para la elaboración de esta investigación, se proyectó los siguientes cuadros de recursos y presupuestos de gastos, los cuales detallo a continuación:

INVERSIÓN A LA INVESTIGACIÓN	S/. 5,820.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS PROPIOS

Detalle:

RUBRO	CONCEPTO	COSTO
BIENES	IMPRESORA	S/. 500.00
	CARTUCHOS Y TINTAS	S/. 250.00
	HOJAS A4 (SIMILARES)	S/. 100.00
	MATERIAL DIDÁCTICO	S/. 100.00
SERVICIOS	PASAJES Y VIATICOS	S/. 190.00
	SERVICIO DE COPIAS	S/. 120.00
	SERVICIO DE IMPRESIONES	S/. 250.00
	SERVICIO DE EMPASTADO	S/. 150.00
	INTERNET	S/. 360.00
ASESORAMIENTO		S/. 3800.00
	TOTAL	S/.5820.00

ANEXO 3.

MATRIZ BÁSICA DE CONSISTENCIA

“MÉRITO EJECUTIVO DE LA LIQUIDACIÓN DE SALDO DEUDOR QUE PROVIENE DE UN CONTRATO DE PRÉSTAMO PERSONAL”

PROBLEMA	PREGUNTAS	HIPÓTESIS	OBJETIVOS
GENERAL	¿Qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal?	Para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo deudor que proviene de un contrato de préstamo personal, se necesita que se haya estipulado en el contrato que, ante el incumplimiento de pago del deudor, la entidad financiera hará uso de la vía ejecutiva a través la liquidación de saldo deudor.	Establecer qué se necesita para utilizar el mérito ejecutivo de la liquidación de saldo que proviene de un contrato de préstamo personal.
ESPECÍFICO	¿Por qué razón debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor?	Debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor, porque de esa manera evitamos que, en un eventual proceso ejecutivo, la liquidación de saldo deudor reemplace al pagaré otorgado en representación del crédito	Determinar por qué razón debe establecerse en el contrato de préstamo personal que la entidad financiera hará uso de la liquidación de saldo deudor ante el incumplimiento de pago del deudor.

CONTRATO DE CRÉDITO PERSONAL BCP

Este contrato señala las condiciones bajo las cuales el BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (el "BANCO") podrá otorgar a la persona cuyos datos y dirección se detallan en la solicitud que antecede y forma parte de este contrato (el "CLIENTE"), un crédito denominado "Crédito Personal".

PRIMERA: DEL CRÉDITO

Una vez aprobada la solicitud del CLIENTE, el BANCO otorgará a favor de aquél un Crédito Personal por la suma inicial, plazo y finalidad indicados en la Hoja Resumen anexa a este contrato (la "Hoja Resumen"), la misma que forma parte del mismo. El desembolso se hará de acuerdo con las instrucciones que el CLIENTE indique en su solicitud.

El CLIENTE declara conocer y aceptar el derecho del BANCO a no desembolsar el Crédito Personal si por cualquier motivo varían de modo adverso las condiciones del mercado financiero, las condiciones políticas, económicas o legales, la situación financiera del CLIENTE o, en general, las circunstancias bajo las cuales el BANCO aprobó el Crédito Personal. El BANCO podrá comunicar dicha decisión al CLIENTE por escrito o a través de cualquier otro medio establecido en este contrato. El ejercicio de este derecho por parte del BANCO no generará a favor del CLIENTE derecho de reclamar para sí el pago de suma alguna por ningún concepto ni la aplicación de penalidad alguna en contra del BANCO. Del mismo modo, en caso el CLIENTE comunicara al BANCO su decisión de retractarse de su solicitud con anterioridad al desembolso del Crédito Personal, el BANCO no tendrá derecho de reclamar para sí el pago de suma alguna por ningún concepto ni de aplicar penalidad alguna en contra del CLIENTE.

Si el Crédito Personal no fuese aprobado, o por cualquier motivo no fuese desembolsado, el BANCO podrá destruir los documentos que le fueron entregados por el CLIENTE para la evaluación respectiva.

SEGUNDA: DE LA CUENTA CRÉDITO PERSONAL

La cuenta en la que se desembolse el Crédito Personal según lo señalado en el primer párrafo de la cláusula primera de este contrato será denominada "Cuenta Crédito Personal".

El BANCO podrá cargar en la Cuenta Crédito Personal el capital del crédito desembolsado, los intereses, gastos, comisiones y penalidades, si fuere el caso, a cargo del CLIENTE frente al BANCO derivados del Crédito Personal.

TERCERA: DE LOS INTERESES, COMISIONES Y GASTOS

La tasa de interés compensatorio efectiva anual fija, comisiones, gastos, tasa de interés moratorio efectiva anual fija o penalidades aplicables en caso de incumplimiento que el BANCO cobrará serán las que se señalan en la Hoja Resumen.

CUARTA: MODIFICACIONES DEL CONTRATO

El CLIENTE autoriza que, salvo las tasas de interés a que se refiere la cláusula anterior, las condiciones, las comisiones, los gastos y las penalidades pactadas en este contrato, podrán ser modificadas unilateralmente por el BANCO, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento de Transparencia, debiendo comunicar ello al CLIENTE con una anticipación de 45 días calendario, o cualquier otro plazo que las disposiciones legales establezcan.

Entre otros supuestos y sin que se pueda considerar esta lista como limitativa, las modificaciones a que se refiere el párrafo anterior podrán ser efectuadas por el BANCO –a su solo criterio– como consecuencia de (i) cambios en las condiciones de la economía nacional o

internacional; (ii) cambios en el funcionamiento o tendencias de los mercados o la competencia; (iii) cambios en las políticas de gobierno o de Estado que afecten las condiciones del mercado; (iv) impacto de alguna disposición legal sobre costos, características, definición o condiciones de los productos y servicios bancarios; (v) modificación de las características, definición, rentabilidad o condiciones de los productos por el BANCO; (vi) inflación o deflación; devaluación o revaluación de la moneda; (vii) campañas promocionales; (viii) evaluación crediticia del CLIENTE o de su empleador, de ser el caso; (ix) encarecimiento de los servicios prestados por terceros cuyos costos son trasladados al CLIENTE o de los costos de prestación de los productos y servicios ofrecidos por el BANCO; (x) crisis financiera; o (xi) hechos ajenos a la voluntad de las partes; conmoción social; desastres naturales; terrorismo; guerra; caso fortuito o fuerza mayor.

De no estar conforme con tales modificaciones, el CLIENTE podrá resolver este contrato, debiendo para ello: (i) manifestar su disconformidad por escrito, (ii) resolver expresamente este contrato, y (iii) proceder al pago de todo saldo deudor u obligación derivados del Crédito Personal que mantuviera pendiente frente al BANCO, para lo cual contará con el plazo indicado en la legislación vigente. Si las modificaciones estuvieren asociadas a la incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados al Crédito Personal y que, por ende, no constituyan una condición para contratar, la negativa del CLIENTE no implicará una resolución de este contrato. El silencio del CLIENTE constituye aceptación expresa de las modificaciones informadas por el BANCO.

El BANCO pondrá a disposición del CLIENTE la versión vigente de este contrato y las tarifas aplicables en todas sus oficinas, canales de atención al cliente y su página web (www.viabcp.com). El CLIENTE reconoce que los cambios que se introduzcan a este contrato por el BANCO le serán oponibles una vez que le hayan sido comunicados de conformidad con lo señalado en este contrato.

Para comunicar las modificaciones referidas (i) a las tasas de interés, penalidades, comisiones, gastos y cronograma de pagos que generen mayores costos al CLIENTE; (ii) a la resolución del contrato por razón distinta al incumplimiento; (iii) a la limitación o exoneración de responsabilidad del BANCO; y/o (iv) a la incorporación de servicios que no se encuentren directamente relacionados con el Crédito Personal, el BANCO usará medios de comunicación directa, tales como (a) mensajes en los estados de cuenta; (b) comunicaciones al domicilio del CLIENTE; (c) correos electrónicos; (d) llamadas telefónicas; o (e) mensajes de texto (SMS).

Para comunicar modificaciones distintas a las señaladas en el párrafo anterior, campañas comerciales y cualquier otra información relacionada con las operaciones que el CLIENTE tenga con el BANCO, así como modificaciones que sean beneficiosas para el CLIENTE, el BANCO podrá utilizar medios de comunicación tales como avisos en (i) cualquiera de sus oficinas, (ii) su página web, (iii) mensajes a través de Banca por Internet, (iv) notas de cargo, de abono o vouchers de operaciones, en tanto el CLIENTE realice operaciones y el BANCO le envíe o entregue dichas comunicaciones; (v) sus cajeros automáticos, (vi) las redes sociales, o (vii) cualquier diario, periódico o revista de circulación nacional.

En caso de existir diferencia en la información de las operaciones del CLIENTE, prevalecerá aquella que se encuentre registrada en el BANCO. De no estar conforme, el CLIENTE tiene a salvo su derecho de acudir a las instancias administrativas o judiciales para ejercer su derecho al reclamo.

QUINTA: MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SIN AVISO PREVIO

El BANCO podrá elegir modificar el contrato celebrado con el CLIENTE en aspectos distintos a las tasas de interés, comisiones o gastos, e incluso resolverlo, sin el aviso previo a que se refiere la cláusula cuarta anterior, como consecuencia de la aplicación de las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ("SBS"), tales como las referidas a la administración del riesgo de sobreendeudamiento de deudores minoristas; por consideraciones del perfil del CLIENTE vinculadas al sistema de prevención del lavado de activos o del financiamiento del terrorismo; si el BANCO advirtiese indicios de operaciones fraudulentas, inusuales, irregulares o sospechosas; si mantener vigente el contrato implicase el incumplimiento de alguna disposición legal, en especial aquellas referidas a políticas crediticias o de lavado de activos o financiamiento del terrorismo; o por falta de transparencia del CLIENTE.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se considerará que hay falta de transparencia del CLIENTE cuando, en la evaluación realizada a la información señalada o presentada por éste antes de la contratación o durante la relación contractual con el BANCO, se desprende que dicha información es inexacta, incompleta, falsa o inconsistente con la información previamente declarada o entregada por el CLIENTE al BANCO y ello pueda repercutir negativamente en el riesgo de reputación o legal del BANCO.

Si el BANCO decidiese resolver el contrato suscrito con el CLIENTE o modificar las condiciones contractuales por las causales indicadas en esta cláusula, remitirá una comunicación al CLIENTE, dentro de los 7 días posteriores a dicha modificación o resolución, en la que señalará que la resolución o modificación del contrato se realiza sobre la base de lo dispuesto en el artículo 85° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en aquellos casos en los que ésta se produzca como consecuencia de la detección de actividades que atentan contra el sistema de prevención del lavado de activos o por la falta de transparencia a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula.

SEXTA: DE LOS ESTADOS DE CUENTA

El CLIENTE podrá informarse del importe adeudado del Crédito Personal, el monto de la próxima cuota a pagar u otra información relevante, a través de los diferentes medios que el BANCO pone a su disposición, como consultas en ventanillas, banca por teléfono, Internet, etc., y en las condiciones que el BANCO determine. La liquidación periódica del Crédito Personal constará en el estado de cuenta que el BANCO emitirá al final de cada período. De haber elegido el CLIENTE la remisión de información relacionada a los pagos efectuados y aquellos que se encuentran pendientes conforme al cronograma de pagos del Crédito Personal, el BANCO enviará dicha información al domicilio del CLIENTE o, si así hubiera sido pactado entre las partes, sin costo a la dirección de correo electrónico que el CLIENTE haya señalado. Si el CLIENTE no recibiera el Estado de Cuenta antes de la fecha límite de pago establecida, deberá solicitarlo por escrito, o a través de los canales que el BANCO haya habilitado para tal fin, presumiéndose en caso contrario su oportuna recepción. Si el CLIENTE decidiera formular observaciones al estado de cuenta, podrá hacerlo directamente a través de la Banca por Teléfono (311-9898), de la página web (www.viabcp.com), de los asesores de ventas y servicios

o funcionarios de negocios del BANCO o de cualquier otro medio que el BANCO pudiera haber puesto a su disposición. La respuesta del BANCO no limita el derecho del CLIENTE a recurrir, en caso lo considere pertinente, a las instancias administrativas, judiciales y/o arbitrales correspondientes.

SÉPTIMA: DE LOS PAGOS Y SUS MODALIDADES

El CLIENTE se obliga a pagar el Crédito Personal de acuerdo con lo establecido en el cronograma de pagos del mismo.

El CLIENTE podrá realizar el pago del Crédito Personal en efectivo en las oficinas del BANCO, mediante cargo en la Cuenta Crédito Personal u otra cuenta que el CLIENTE mantenga en el BANCO, o a través de otros medios o canales de atención que el BANCO ponga a su disposición, tales como cajeros corresponsales, Banca por Internet u otros que el BANCO establezca y le informe oportunamente.

El pago se hará mediante cuotas periódicas, con la frecuencia, importe (incluidos los intereses, comisiones y gastos), en la misma moneda desembolsada y en la fecha establecida en la Hoja Resumen. El BANCO podrá conceder al CLIENTE un período de gracia para el pago del Crédito Personal, el mismo que, de ser el caso, también se detalla en la Hoja Resumen; los intereses generados durante dicho período de gracia serán capitalizados.

Los pagos que realice el CLIENTE en virtud de este contrato se aplicarán a la deuda en el orden siguiente: (i) intereses compensatorios de las cuotas vencidas y de la cuota vigente; (ii) interés moratorio o penalidad, según corresponda; (iii) gastos y comisiones; y (iv) capital del Crédito Personal.

El CLIENTE deberá entregar oportunamente al BANCO o, de ser el caso, mantener en sus cuentas, el importe necesario para atender el pago del Crédito Personal.

En caso de no cancelar las cuotas a más tardar en el día de su vencimiento, el CLIENTE incurrirá automáticamente en mora sin necesidad de requerimiento o formalidad previa alguna, y –como consecuencia de ello– el CLIENTE pagará adicionalmente los intereses moratorios o penalidad pactados, según se indica en la Hoja Resumen, los que se devengarán desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la obligación hasta el día de su pago total, más los tributos, gastos notariales y judiciales, si los hubiere.

EL CLIENTE reconoce que la falta de pago oportuno o el atraso en el pago de una cuota origina que se generen intereses compensatorios e intereses moratorios o penalidades, según sea el caso, por lo cual el importe a pagar en la fecha efectiva de pago será mayor. Si el CLIENTE no pagase los intereses o penalidades antes mencionados, el importe del capital amortizado de la cuota pagada será menor y la parte no atendida se sumará al monto de la última cuota.

Adicionalmente, en caso de retraso en los pagos del Crédito Personal, el BANCO realizará el correspondiente reporte a las centrales de riesgo, conforme a las normas vigentes.

OCTAVA: DE LOS PAGOS ANTICIPADOS

Siempre y cuando el CLIENTE se encuentre al día en el pago del Crédito Personal, podrá efectuar pagos anticipados con la consiguiente liquidación de intereses al día de pago, deduciéndose asimismo las comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales pactadas al día de pago, debiendo para tal efecto comunicar expresamente al BANCO su voluntad de realizar el pago anticipado. Por su parte y siempre que se cumpla la condición antes mencionada, el BANCO acepta el pago anticipado del Crédito Personal sin que se genere por ello penalidad, comisión o gasto alguno.

Los pagos anticipados podrán ser realizados por el CLIENTE en cualquier oportunidad y cuantas veces lo estime conveniente, por montos mayores a la cuota del periodo (pago anticipado parcial) o inclusive por la totalidad del Crédito Personal (pago anticipado total), incluidos los intereses devengados a dicha fecha y cualquier otra obligación, comisión, tributo o gasto relacionado al Crédito Personal devengado a dicha fecha y que corresponda pagar al CLIENTE

En caso de pagos anticipados parciales, el CLIENTE podrá optar por reducir el monto de las cuotas o el número de las mismas, en cuyo caso deberá indicar expresamente, por los mecanismos fijados por el BANCO, el número de cuotas en que desea pagar el saldo del capital pendiente de pago, no pudiendo ser su valor mayor al de las originalmente pactadas. En defecto de indicación por parte del CLIENTE, el BANCO procederá a reducir el número de cuotas dentro de los 15 días calendario de realizado el pago.

El CLIENTE reconoce que, una vez producido el pago anticipado, el cronograma de pagos quedará modificado, no estando obligado el BANCO a entregar al CLIENTE una copia del mismo, salvo que este lo solicite expresamente.

Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores, el CLIENTE podrá también optar por adelantar el pago de cuotas, en cuyo caso el BANCO aplicará el monto pagado en exceso sobre la cuota del periodo correspondiente a las cuotas inmediatas siguientes no vencidas, sin que se produzca la reducción de intereses, comisiones y gastos derivados de las cláusulas contractuales.

NOVENA: DEL SEGURO

Durante la vigencia de este contrato, el CLIENTE se obliga a contratar y mantener vigente un seguro de desgravamen, el mismo que podrá ser el seguro de desgravamen ofrecido por el BANCO u otro que el CLIENTE contrate con terceros, siempre y cuando cumpla –a satisfacción del BANCO- con las condiciones previamente informadas por este a través de su página web (www.viabcp.com).

En caso de fallecimiento del CLIENTE y/o de las personas aseguradas, el BANCO cobrará directamente la indemnización que deba pagar la aseguradora para aplicarlo hasta donde alcance a la amortización y/o cancelación de lo adeudado por el CLIENTE. El monto de la prima consta en el cronograma de pagos del Crédito Personal.

Si el CLIENTE acreditase ante el BANCO haber contratado por su cuenta un seguro que brinde cobertura similar o mayor al seguro ofrecido por éste, y por plazo igual o mayor, el CLIENTE no estará obligado a tomar el seguro ofrecido por el BANCO, pero deberá endosar a favor del BANCO el seguro que haya contratado por su cuenta, de conformidad con las condiciones que el BANCO establezca, comprometiéndose al pago puntual de las primas que genera esta póliza. En este caso, será de aplicación la comisión por evaluación de póliza de seguro endosada indicada en la Hoja Resumen. Si el CLIENTE no cumpliera con renovar, mantener vigente y endosado a favor del BANCO el seguro a que se refiere este párrafo, el BANCO queda autorizado a contratar por cuenta del CLIENTE el seguro de desgravamen y proceder de acuerdo al párrafo segundo de esta cláusula.

Sin perjuicio de la obligación que asume el CLIENTE, ante su incumplimiento el BANCO podrá contratar, renovar y/o mantener vigente la póliza de seguro de desgravamen antes señalada, y, en tal caso, el CLIENTE deberá reembolsarle de inmediato los pagos realizados o, en caso que el BANCO aceptara financiarla, el CLIENTE autoriza al BANCO, con su firma en el presente contrato, a incluir dentro de las cuotas del Crédito Personal el monto correspondiente a los pagos realizados por dicho concepto, siempre que este contrato

esté vigente y el CLIENTE no se encuentre en mora en el pago del Crédito Personal. En el supuesto de incumplimiento del CLIENTE a que se refiere este párrafo, la falta de contratación o renovación de la póliza por parte del BANCO no genera para éste responsabilidad alguna, aun cuando el BANCO haya renovado previamente la póliza.

Las condiciones de la póliza, cuyo único beneficiario será el BANCO, con el detalle de los riesgos y causales de exclusión, constan en el Certificado de Seguro de Desgravamen que el CLIENTE declara conocer y aceptar y cuya copia recibe a la firma de este contrato. El CLIENTE declara que conoce y acepta que el seguro solamente cubre el capital, intereses, comisiones, gastos y penalidades, si fuere el caso, adeudados por el CLIENTE al día de su fallecimiento, siendo de cargo de sus herederos los intereses, comisiones, capital y gastos que se originen a partir de ese momento y hasta el día de pago de la deuda, conforme a los términos de este contrato, con el límite de la masa hereditaria.

Si el seguro contratado por el BANCO fuera modificado o suprimido, el BANCO lo informará al CLIENTE a través de los medios de comunicación directos establecidos en el quinto párrafo de la cláusula cuarta de este contrato para que tome debida nota de ello y de sus consecuencias. Si las variaciones consistieran en nuevos requerimientos a ser cumplidos por el CLIENTE, nuevos riesgos excluidos u otros aspectos similares, el CLIENTE se obliga a satisfacerlos, en cuyo defecto quedará desprotegido del seguro.

DÉCIMA: DEL INCUMPLIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

El BANCO podrá resolver de pleno derecho este contrato, desde la fecha que señale, mediante aviso escrito al CLIENTE y sin necesidad de declaración judicial ni plazo de anticipación previo y/o dar por vencidos todos los plazos y proceder al cobro del íntegro del saldo del Crédito Personal pendiente de pago, disponiendo el pago inmediato del importe que arroje la liquidación practicada por el BANCO, en cualquiera de los siguientes casos: (i) si el CLIENTE dejase de pagar una o más cuotas del Crédito Personal o el importe total del mismo, en los plazos establecidos en este contrato; (ii) si el propio CLIENTE o un tercero solicitase el ingreso del CLIENTE a un procedimiento concursal o a cualquier procedimiento administrativo, judicial o extrajudicial que implique la suspensión de los pagos del CLIENTE; (iii) si el CLIENTE no cumpliera cualquier obligación (presente o futura) frente al BANCO como deudor directo o avalista; (iv) si mantener vigente el contrato implicase el incumplimiento de las políticas corporativas del BANCO; o (v) si el CLIENTE tuviese el control directo o indirecto, conforme a las normas emitidas por la SBS, de una persona jurídica que mantiene obligaciones vencidas e impagas frente al BANCO.

En cualquier caso de resolución de este contrato, el CLIENTE - bajo su responsabilidad- se obliga a cancelar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes o dentro del plazo adicional que le otorgue el BANCO expresamente y por escrito, el íntegro del Crédito Personal pendiente de pago según la liquidación que realice el BANCO, más los intereses compensatorios, moratorios, comisiones y gastos generados. En los casos de resolución de este contrato como consecuencia de la modificación unilateral por el BANCO, el CLIENTE tendrá 45 días calendario, contados a partir de la fecha en que manifestó al BANCO su disconformidad por escrito, para efectuar el pago total del Crédito Personal, sus intereses compensatorios, moratorios, comisiones y gastos, en forma previa a la resolución del contrato. El CLIENTE, por su parte, podrá resolver este contrato cuando así lo decida, mediante aviso expreso cursado al BANCO, con la misma formalidad utilizada para su celebración, previo pago del importe total de las obligaciones adeudadas al BANCO conforme a este contrato, según liquidación que realice el BANCO, la misma que tendrá mérito ejecutivo conforme a las disposiciones legales correspondientes.

El BANCO, en cualquier momento, producto de la conciliación de los saldos del CLIENTE, podrá requerir a éste el pago de los conceptos no contabilizados oportunamente como parte del Crédito Personal, así como los intereses que pudieran haber generado dichos conceptos.

El CLIENTE autoriza al BANCO para que, en caso de incumplimiento de aquél, proceda, sin previo aviso ni formalidad alguna distinta a esta autorización, a cargar en cualquier cuenta que el CLIENTE mantenga en el BANCO (inclusive aquella en la que recibe el pago de sus haberes) o contra cualquier depósito del CLIENTE o a retener y aplicar a la amortización o cancelación de lo adeudado, toda suma, depósito, fondos, bienes o valores de propiedad del CLIENTE que pueda tener en su poder o en el de sus subsidiarias. Si la moneda del Crédito Personal fuera distinta a la existente en las cuentas o depósitos del CLIENTE, los cargos se harán al tipo de cambio venta (si posee moneda local) o al tipo de cambio compra (si posee moneda extranjera) vigentes en el BANCO en el momento de la operación, sin responsabilidad para el BANCO por cualquier diferencia de cambio. El cargo o retención a que se refiere este párrafo será informado al CLIENTE a través del estado de cuenta correspondiente a la cuenta afectada y en el estado de cuenta del Crédito Personal.

Igualmente el CLIENTE autoriza al BANCO a dar por vencidas todas las demás cuotas pendientes del Crédito Personal, disponiendo el cobro inmediato del íntegro del saldo adeudado en la Cuenta Crédito Personal, en cualquiera de las siguientes formas:

10.1 Requiriendo el pago del saldo deudor de la Cuenta Crédito Personal y emitiendo, en su defecto, una letra de cambio a la vista a cargo del CLIENTE de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley N° 26702), la que será protestada por falta de pago.

10.2 Completar con el importe adeudado el Pagaré a la Vista que el CLIENTE y/o sus fiadores puedan haber emitido a la firma de este contrato, en forma incompleta y conforme a la Ley de Títulos Valores (Ley N° 27287), procediendo a protestarlo si no fuera pagado por el

CLIENTE y/o fiadores. El CLIENTE declara haber sido instruido sobre los alcances y finalidad de este pagaré cuya copia, en caso de haberlo emitido, declara recibir.

Protestados cualquiera de los títulos valores antes mencionados, el BANCO iniciará la respectiva acción ejecutiva que incluirá el cobro de intereses compensatorios y moratorios a las tasas efectivas establecidas en la Hoja Resumen, más las comisiones y gastos señalados en la Hoja Resumen, así como los gastos judiciales, extrajudiciales y demás en que se hubiera incurrido en la cobranza, sin perjuicio de las compensaciones de los fondos, valores, acreencias o bienes que el BANCO pueda tener en su poder o en el de sus subsidiarias, a nombre del CLIENTE y/o de sus garantes.




UNDÉCIMA: CESIÓN

El BANCO podrá ceder sus derechos o su posición contractual en este contrato a cualquier tercero, prestando el CLIENTE, en este acto, su consentimiento anticipado a la referida cesión, la misma que producirá efectos frente al CLIENTE desde que le sea notificada fehacientemente.

DUODÉCIMA: LEGISLACIÓN Y COMPETENCIA

Este contrato se rige en forma complementaria por la legislación vigente en el Perú. Para el caso de cualquier discrepancia derivada de la ejecución y/o interpretación de este contrato, las partes se someten a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad de Lima, señalando como domicilio a los indicados en la solicitud que antecede y forma parte de este contrato, adonde se harán llegar todas las citaciones y notificaciones judiciales o extrajudiciales a que hubiere lugar.

DÉCIMA TERCERA: DECLARACIONES Y FIRMAS El CLIENTE declara y reconoce que los datos y declaraciones consignados en este documento son exactos, ciertos y fidedignos. Por este acto, deja expresa constancia de que instruye y autoriza al BANCO a modificar y/o sustituir el último domicilio que éste tuviese registrado por el indicado en este documento, autorizando en consecuencia al BANCO para aplicar el nuevo domicilio a todos los demás productos o servicios que tiene o pueda tener en el BANCO.

		
Firma del titular / Representante Legal 1	Firma del cónyuge / Representante Legal 2	Arturo Johnson Banco de Crédito BCP RUC N° 20100647218
Nombre del titular / Representante Legal 1	Nombre del cónyuge / Representante Legal 2	
Tipo y N° Doc. de Identidad	Tipo y N° Doc. de Identidad	

Firmado en señal de conformidad en _____, el _____ de _____ de _____

CONTRATO DE PRÉSTAMO PERSONAL BBVA

CONTRATO DE PRÉSTAMO PERSONAL "CONTIFÁCIL"

En este documento están establecidas las condiciones del Contrato de Préstamo Personal Contifácil ("Contrato") que el Cliente (en adelante "Usted") y el BANCO BBVA PERÚ ("Banco") firman. Sus datos y los datos del Banco están indicados al final de este documento.

Este documento es un contrato. Léalo detenidamente. Su firma representa la aceptación de todas y cada una de las condiciones y acuerdos contenidos en el mismo. El Banco puede exigir el cumplimiento de estas obligaciones incluso ante el Poder Judicial.

1. FINALIDAD DE ESTE CONTRATO

Usted y el Banco firman este Contrato para que el Banco le conceda, una vez que cumpla con todas las condiciones establecidas por el Banco, un préstamo personal ("Préstamo").

IMPORTANTE: Usted pagará el Préstamo al Banco en el plazo señalado en el Numeral 17.

2. MONTO DE DINERO QUE SE PRESTA

El Préstamo es por el monto de dinero señalado en el Numeral 17 que el Banco le entrega (desembolsa) en la cuenta bancaria señalada por Usted en el Banco.

3. PARA QUÉ ES ESTE PRÉSTAMO

El Préstamo sirve (i) para que Usted pueda cubrir eventuales necesidades de dinero en efectivo o (ii) para que Usted financie la compra de algún bien o servicio. En el primer caso, Usted puede retirar el dinero de la cuenta en la que el Banco haya depositado el Préstamo. En el segundo caso (el Préstamo es concedido para que compre un bien o un servicio), Usted acepta que el importe del Préstamo sea entregado por el Banco directamente al vendedor del bien o al proveedor del servicio (que es la persona que le ofrece el servicio).

IMPORTANTE: Si usa el Préstamo para comprar el bien o servicio que elija, Usted debe asegurarse de la calidad de los mismos, pues el Banco no evalúa si el bien o el servicio tienen la calidad o las condiciones esperadas por Usted, o si el vendedor o el proveedor es el adecuado. Si el bien o el servicio tiene algún problema o si el vendedor o el proveedor incumple, Usted tendrá que presentar los reclamos correspondientes al vendedor o al proveedor. Los problemas con el bien, el servicio, el vendedor o el proveedor no cambian la obligación que Usted tiene de pagar al Banco el Préstamo.

4. CÓMO SE PAGA ESTE PRÉSTAMO Y EN QUÉ FECHAS

Usted debe pagar el Préstamo al Banco en las cuotas y fechas establecidas en el Cronograma de Pagos ("Cronograma") y en la Hoja de Resumen Informativa ("Hoja Resumen"- Anexo No. 1). El Cronograma y la Hoja de Resumen son documentos que forman parte de este Contrato.

IMPORTANTE: Lea cuidadosamente estos documentos. Su firma en este Contrato supone que está de acuerdo con el Cronograma y Hoja Resumen.

Usted debe pagar las cuotas del Préstamo ("Cuotas") en la moneda del Préstamo. Esto quiere decir que si Usted recibió el Préstamo en Soles, debe pagar las Cuotas en Soles; mientras que si Usted recibió el Préstamo en Dólares (o en otra moneda), debe pagar las Cuotas en Dólares (o en la moneda en la que recibió el Préstamo).

Si el dinero (fondos) que Usted tiene para pagar las Cuotas está en una moneda distinta a la moneda del Préstamo, el Banco podrá comprar con ese dinero (fondos) la moneda del Préstamo, aplicando el tipo de cambio que tenga vigente en el momento de la compra. Es decir, si su Cuota está en Dólares y en sus cuentas tiene Soles en cantidad suficiente, el Banco podrá comprar con esos Soles los Dólares necesarios, según el tipo de cambio que el Banco tenga establecido, para hacer efectivo el pago de su Cuota.

Usted debe señalar una cuenta en el Banco ("Cuenta de Pagos") para depositar en esa Cuenta de Pagos, los montos para el pago de las Cuotas. El Banco podrá establecer otras formas para que Usted efectúe estos pagos, informándole previamente.

IMPORTANTE: En la Cuenta de Pagos, el Banco podrá cobrar el monto de las Cuotas, que incluyen capital e intereses; así como, cualquier otro concepto establecido en la Hoja Resumen y/o en el Cronograma (por ejemplo, seguros, gastos, etc.).

Qué ocurre si no tiene dinero (fondos) suficientes en la Cuenta de Pagos

Si en las fechas de pago de las Cuotas, la Cuenta de Pagos no tiene dinero (fondos) suficiente, el Banco podrá cobrar las Cuotas, así como, cualquier otro concepto establecido en la Hoja Resumen y/o en el Cronograma, de cualquier otra cuenta que Usted tenga en el Banco, sea en moneda nacional o en moneda extranjera. Además, el Banco podrá hacer uso del derecho de compensación mencionado en la cláusula 9 (a) del presente contrato.

IMPORTANTE: Para evitar comisiones o gastos adicionales, señalados en la Hoja Resumen, Usted debe mantener en la Cuenta de Pagos o entregar al Banco hasta la fecha de vencimiento de las Cuotas, el dinero (fondos) suficiente para pagar las Cuotas en la moneda del Préstamo.

5. QUÉ DEBE PAGAR USTED AL BANCO POR EL PRÉSTAMO QUE RECIBE

Usted debe pagar al Banco el capital, los intereses compensatorios, los intereses moratorios o la penalidad (según corresponda), los seguros, las comisiones, los gastos y los demás conceptos descritos en la Hoja Resumen.

El capital es el monto que el Banco le presta. Los intereses compensatorios son los que el Banco recibe por el monto que le ha prestado. Los intereses moratorios o la penalidad, es el monto adicional que Usted pagará si se retrasa en el pago de las Cuotas. Las comisiones y los gastos son los montos que pagará por otros servicios que con relación al Préstamo Usted recibe.

6. QUÉ OCURRE SI USTED NO PAGA LAS CUOTAS EN LAS FECHA DE VENCIMIENTO

Si las Cuotas no son pagadas a más tardar en las fechas de pago previstas en el Cronograma (fecha de vencimiento), Usted tendrá que pagar, adicionalmente a los intereses compensatorios y sin necesidad de que el Banco se lo solicite, intereses moratorios o la penalidad (según corresponda conforme a la Hoja Resumen). La tasa de estos intereses figura en la Hoja Resumen.

Los intereses moratorios o la penalidad (según corresponda), se aplicará(n) automáticamente desde el día siguiente a la fecha de vencimiento de la Cuota no pagada hasta el día en que ésta sea totalmente pagada.

Adicionalmente, de ser el caso, Usted tendrá que pagar los gastos (notariales y judiciales) y las comisiones que resulten aplicables según la Hoja Resumen.

7. USTED PUEDE REALIZAR PAGOS ANTICIPADOS Y/O ADELANDO DE CUOTAS

Usted tiene derecho a efectuar pagos anticipados, en forma total o parcial. El pago anticipado es aquel pago mayor a dos (02) cuotas (que incluye la exigible en el periodo). Si lo hace, se aplicará al capital del préstamo, los intereses que el Banco cobra se reducirán proporcionalmente al día de pago y se deducirán las comisiones y gastos que pudieran corresponder a esa fecha. Si Usted decide realizar un pago anticipado parcial, debe elegir previamente, entre: disminuir el monto de la Cuotas o reducir el plazo del Préstamo, para lo cual se emitirá un nuevo cronograma de pagos en caso Usted lo solicite.

Asimismo, Usted podrá solicitar pagar su(s) Cuota(s) antes del vencimiento (adelanto de cuota) sin que esto signifique que es un pago anticipado y sin que se reduzcan intereses, comisiones ni gastos.

En caso decida adelantar su(s) cuota(s), el monto en exceso al pago de la Cuota del periodo, se aplicará a la(s) cuota(s) inmediata(s) posterior(es) a la exigible en el periodo.

Usted podrá realizar el pago anticipado o el adelanto de cuotas, siempre que, se encuentre al día en el pago de sus cuotas del cronograma y de su(s) seguro(s).

8. QUÉ BENEFICIOS LE OTORGA A USTED ESTE PRÉSTAMO

Este Préstamo le otorga a Usted el siguiente beneficio:

- * Cambiar la fecha de pago de las Cuotas del Préstamo. Las características de este beneficio son:
- ¿Cuántas veces puede solicitarlo?: (10) diez veces durante el plazo del Préstamo.
- ¿Cuántas veces al año puede solicitarlo?: (2) dos veces.
- Entre cada solicitud para hacer uso del beneficio debe haber, por lo menos, seis (6) meses.
- Este beneficio podrá ser solicitado a partir del día siguiente del desembolso del Préstamo en la cuenta del Cliente.

IMPORTANTE: Si usa este beneficio, el Banco efectuará un nuevo cálculo de intereses total y emitirá un nuevo Cronograma en reemplazo del anterior. La nueva fecha de pago de Cuota estará indicada en el nuevo Cronograma, el cual podrá recoger en cualquier Oficina a partir del segundo día hábil siguiente de solicitado el beneficio. Este nuevo cronograma formará parte del Contrato en el que el monto de las Cuotas se incrementará.

15. FIRMA DE PAGARÉ

De acuerdo a la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores, y a la Circular SBS N° G-0090-2001, Circular sobre Título Valor emitido en forma Incompleta, Usted firma un pagaré incompleto ("Pagaré") a favor del Banco. El Pagaré será completado por el Banco siguiendo estas reglas:

- (a) El Pagaré indicará el número del Préstamo.
- (b) La fecha de emisión del Pagaré será la misma que la fecha de suscripción del Contrato.
- (c) El Banco completará el Pagaré si, por cualquier razón, Usted debe pagar de manera inmediata la totalidad del Préstamo. El Pagaré será llenado por el monto total de su deuda, según el cálculo (liquidación) efectuado por el Banco.
- (d) La fecha de vencimiento del Pagaré será la fecha en la que el Banco realice el cálculo (liquidación) de la suma que Usted deba. Desde la fecha de vencimiento del Pagaré hasta la fecha en la que Usted lo pague se seguirán generando intereses compensatorios y moratorios a las tasas pactadas.
- (e) El Pagaré será emitido con la "Cláusula Sin Protesto". Sin perjuicio de ello, el Pagaré podrá ser protestado. Usted asumirá los gastos del protesto.
- (f) El Banco podrá transferir el Pagaré.

IMPORTANTE: No firme este documento si Usted no ha recibido una copia del Pagaré o si no ha sido informado por el Banco acerca de los mecanismos legales que lo protegen.

16. OTORGAMIENTO DE GARANTÍAS A FAVOR DEL BANCO

Firman este Contrato, la(s) persona(s) natural(es) y/o jurídica(s) que se constituyen como fiador(es) Solidario(s), en consecuencia, asumirá(n) la obligación de pagar al Banco todas las sumas que Usted deba o pueda deber al Banco por el Préstamo y por este Contrato.

El(los) fiador(es) acepta(n) desde ya las prórrogas (ampliación del plazo del vencimiento del Préstamo) y renovaciones que el Banco pueda concederle a Usted, sin necesidad que esas prórrogas o renovaciones les sean comunicadas.

El(los) fiador(es) renuncia(n) a la facultad de pedir al Banco que, antes de proceder al cobro de la deuda contra él(ellos), realice la gestión de cobro con Usted (renuncia al Beneficio de Excusión). Asimismo, el(los) fiador(es) renuncia(n) a pedir al Banco que haga efectivo su derecho iniciando una demanda contra Usted (renuncia a la facultad otorgada por el Artículo 1899 del Código Civil).

El Banco también tiene el derecho de compensar frente al(los) fiador(es). Por lo tanto, si Usted deja de pagar el Préstamo, el Banco podrá proceder en la forma indicada en el Numeral 9 a, empleando el dinero de las cuentas, depósitos y/o cualquier otro bien que el(los) fiador(es) mantenga(n) o pudiera(n) mantener en el Banco para hacer efectivo el pago del Préstamo.

Las garantías constituidas a favor del Banco benefician al Banco y no al(los) fiador(es).

Las eventuales dudas, disputas o controversias entre el Banco y el(los) fiador(es) se resolverán de la misma forma en que deben resolverse las disputas entre el Banco y Usted (Numeral 14 e).

IMPORTANTE: La firma de el(los) fiador(es), constituye la presente Fianza Solidaria conforme a las condiciones indicadas en este Numeral 15, siendo aplicable las demás disposiciones legales vigentes.

ANEXO 6

CONTRATO DE PRÉSTAMO INTERBANK

14. Tributos: Todos los tributos presentes y futuros que graven el otorgamiento del Crédito, la expedición y uso de los mecanismos disponibles para disposición de efectivo, en caso corresponda, y pagos del mismo y, en general, todos los servicios de INTERBANK al Cliente según el Contrato, serán de cargo del Cliente y sus importes podrán ser financiados, a juicio de INTERBANK, en el Crédito.

15. Autorización para grabar Conversaciones: El Cliente autoriza a INTERBANK a grabar cualquier tipo de conversación, solicitud, autorización, instrucción, adquisición y en general cualquier otro tipo de orden o manifestación de voluntad, relacionado con el Crédito, comprometiéndose a mantener absoluta reserva de las mismas.

16. Pagos en exceso: En el supuesto que el Banco haya realizado cobros en exceso mediando dolo o culpa, éstos le serán restituidos al Cliente según los mecanismos establecidos por INTERBANK conforme a la ley aplicable. En estos casos, devengarán los intereses compensatorios que se hayan pactado para la operación crediticia o, en su defecto, el interés legal.

17. Representantes: INTERBANK reconocerá como representantes o apoderados del Cliente, únicamente a quienes éste hubiera registrado debidamente ante INTERBANK, presentando la documentación correspondiente. La revisión de dicha documentación está sujeta al pago de las comisiones y gastos establecidos en la Hoja Resumen del Contrato, para mayor información al respecto se podrá consultar en www.interbank.pe.

18. Ley y Competencia: El presente Contrato se rige por las leyes de la República del Perú. Toda discrepancia derivada del presente Contrato se somete a la competencia de los jueces y tribunales de la ciudad en la que se suscribe la Solicitud. Todas las notificaciones extrajudiciales o judiciales a que hubiere lugar en virtud del Contrato se realizarán, a elección de INTERBANK, en el domicilio, lugar de trabajo o domicilio de correspondencia del Cliente indicado en la Solicitud.

19. Otorgamiento del Crédito: INTERBANK otorgará al Cliente, sujeto a la evaluación y calificación crediticia que

adelante, el Saldo Deudor), en la moneda, periodicidad, oportunidad de pago y plazo que se detallan en el Contrato y en la Hoja Resumen. INTERBANK podrá conceder al Cliente periodos de gracia para el pago del Crédito y/o diferir el pago de las cuotas próximas a vencer, en casos excepcionales, a solicitud del Cliente o cuando represente un beneficio para éste. Los intereses que se generen durante dichos periodos de gracia serán capitalizados.

20.2 El Cliente se encuentra facultado para cumplir con sus pagos programados a través de la Red de Agencias de INTERBANK o de cualquier otro canal que INTERBANK ponga a su disposición, de lo contrario incurrirá en incumplimiento de conformidad con lo indicado en la Hoja resumen, sin necesidad de requerimiento o intimación por parte de INTERBANK.

20.3. Los pagos que realice el CLIENTE en virtud del Contrato se aplicarán en el orden siguiente: a) intereses compensatorios; b) interés moratorio o penalidad por incumplimiento, en caso corresponda; c) Gastos y comisiones; d) capital.

20.4. El importe adeudado por el Cliente como consecuencia del otorgamiento del Crédito devengará diariamente el interés compensatorio a la tasa efectiva detallada en la Hoja Resumen. Adicionalmente, en caso existan una o más cuotas del Saldo Deudor que se encuentren parcial o totalmente vencidas, INTERBANK podrá aplicar sobre el importe no cancelado oportunamente el interés moratorio o penalidad por incumplimiento fijado en la Hoja Resumen. El Cliente incurrirá en mora o incumplimiento en forma automática, sin necesidad de requerimiento por parte de INTERBANK.

21. Pagaré o Emisión de la Letra de Cambio INTERBANK podrá aplicar cualquiera de los siguientes mecanismos para realizar el cobro de lo adeudado por el Cliente:

1. Pagaré: 21.1 Con la manifestación de voluntad o aceptación del presente Contrato, y en caso INTERBANK lo requiera, el Cliente emitirá a favor de INTERBANK un pagaré incompleto (Pagaré) el mismo que podrá ser desmaterializado ante cualquier Institución de Compensación y Liquidación de Valores, quien podrá emitir una constancia de inscripción y titularidad que será completada de acuerdo a la Ley Aplicable y según los

términos y condiciones establecidas en el presente Contrato.

21.2 El Cliente podrá completar y firmar el Pagaré de manera virtual y/o física y, en consecuencia, INTERBANK podrá proceder a la ejecución de la Constancia de Inscripción y titularidad y/o el Pagaré, en cualquiera de los siguientes casos: (i) si el Cliente incumpliese con el pago debido y oportuno de las obligaciones contraídas con INTERBANK y representadas en el Pagaré, (ii) si se solicita la declaración de insolvencia del Cliente, éste es declarado insolvente o suspende sus pagos; (iii) si INTERBANK detectase falsedad en la información proporcionada por el Cliente y/o (iv) si el Cliente dejara de cumplir cualquiera de las obligaciones contraídas con INTERBANK.

21.3 INTERBANK queda autorizado a completar la Constancia de Inscripción y titularidad y/o el Pagaré en los términos siguientes: (i) La fecha de emisión será, a criterio de INTERBANK, la fecha en la que se efectuó el desembolso, o aquella en la cual INTERBANK proceda a hacer uso de las facultades otorgadas por el presente documento, (ii) La fecha de vencimiento será, a criterio de INTERBANK, la fecha de vencimiento del Crédito representado en el Pagaré, a la vista o la fecha en que INTERBANK dé por vencidos todos los plazos de acuerdo a lo señalado en el presente Contrato, (iii) El importe total que INTERBANK deberá consignar será, a decisión de INTERBANK, el equivalente al: (a) saldo del capital del monto adeudado por el Crédito y/o por los financiamientos adicionales, de ser el caso, en la fecha de emisión del Pagaré; (b) el importe total adeudado por el Cliente en virtud de este Contrato, entiéndase por el Crédito y/o por los financiamientos adicionales, de ser el caso, en la fecha del llenado del Pagaré; y, (iv) Las tasas de interés compensatorio y moratorio del Crédito y financiamientos adicionales serán fijadas por INTERBANK en la Hoja(s) Resumen que forma(n) parte del presente Contrato o en los documentos que suscriben las partes en fecha posterior a éste. En caso estas tasas difieran entre sí, INTERBANK tiene la facultad de aplicar la más alta de ellas.

21.4 El Cliente: (i) acepta y da por válidas todas las renovaciones y prórrogas totales o parciales que se anoten en el Pagaré, sea desmaterializado o no; (ii) deja expresa constancia que a la firma del presente Contrato ha recibido en su correo electrónico registrado en su solicitud, el Pagaré firmado digitalmente y/o una copia física del Pagaré incompleto; y, (iii) renuncia expresamente a la inclusión de una cláusula que impida o limite la libre negociación del Pagaré, sea que se encuentre desmaterializado o no.

2. Letra de Cambio: INTERBANK podrá girar una letra a

la vista como uno de los mecanismos pactados en la cláusula 22 (compensación) si el Cliente, en cualquier momento, incumple sus obligaciones de pago adquiridas como consecuencia del presente Contrato o si, extinguido el Contrato por cualquier motivo, el Cliente no paga la deuda total dentro del plazo concedido, INTERBANK podrá girar una Letra de Cambio a la vista, a la orden de sí mismo y a cargo del Cliente, con indicación de su origen, por el importe total adeudado. La Letra de Cambio se girará luego de transcurridos quince (15) días hábiles de la recepción por el Cliente de la respectiva notificación de pago, sin que hubieran observaciones. La notificación de pago será emitida al Domicilio del Cliente. Esta Letra de Cambio no requerirá la aceptación del Cliente y, de ser protestada por falta de pago, dará lugar a la respectiva acción ejecutiva, conforme a ley. En la emisión o transferencia de la Letra de Cambio, INTERBANK podrá sustituir la firma autógrafa de sus representantes por su firma impresa, digitalizada o por cualquier otro medio de seguridad gráfico, mecánico o electrónico.

22. Compensación: De conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 132º de la Ley N° 26702 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), INTERBANK podrá cobrar (compensar) en forma parcial o total el monto adeudado (obligaciones vencidas y exigibles) por Cliente, quedando autorizado a debitar de cualquier cuenta de este último o a liquidar cualquier bien que se encuentre en custodia de Interbank. Con la finalidad de cancelar la deuda en la moneda en que ha sido contraída, INTERBANK podrá proceder a la conversión de moneda de acuerdo al tipo de cambio vigente para INTERBANK a la fecha en que se realice la operación. Asimismo, INTERBANK podrá tomar las siguientes acciones:

1. Terminar de manera anticipada el Contrato, en cuyo caso, la consecuencia inmediata será que el Cliente se encuentre obligado a pagar el total de la deuda que tenga con Interbank.
 2. Bloquear temporal o definitivamente la cuenta.
 3. Abrir una cuenta corriente (sin chequera) a nombre del Cliente bajo los términos y condiciones generales que para la apertura de dicha clase de cuentas tenga aprobados en esa ocasión INTERBANK, cargando en esa cuenta los saldos deudores o requerir el pago de su acreencia, según las liquidaciones que practique, de conformidad con la ley aplicable.
- En cualquiera de los casos antes señalados, INTERBANK comunicará en un plazo posterior no mayor a 15 días la aplicación del supuesto correspondiente mediante los mecanismos de comunicación directos establecidos en la cláusula 2.

CONTRATO DE PRÉSTAMO PERSONAL MIBANCO



indicada en el presente contrato; con facultad de proceder a la integración del(los) Pagaré(s) que haya(n) sido emitido(s) por EL CLIENTE, sin perjuicio de ejecutar la(s) garantía(s) real(es) y/o personal(es) constituida(s) a su favor.

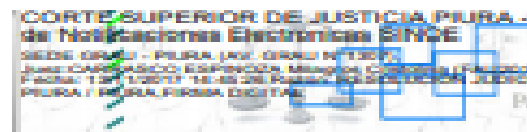
De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 26702, MIBANCO podrá aplicar su facultad de compensar la deuda vencida y exigible de EL CLIENTE, EL CODEUDOR y/o EL(LOS) FIADOR(ES), sin asumir responsabilidad en caso de no hacerlo, comprendiéndose capital, intereses, comisiones, gastos, e impuestos de ser el caso, contra todos los saldos acreedores que pudieran existir en las cuentas que estos mantengan en MIBANCO, (con excepción del monto intangible de las Cuentas de Compensación por Tiempo de Servicios) así como todo valor en custodia y/o toda cantidad de dinero que, por cualquier concepto MIBANCO tenga o pudiera llegar a tener en su poder, que esté destinada a serle entregada o abonada a EL CLIENTE, EL CODEUDOR y/o EL(LOS) FIADOR(ES), sin reserva ni limitación alguna; autorizando a MIBANCO en forma inmediata e irrevocable a cargar los importes adeudados en dichas cuentas y en cualquier otra cuenta que estos tengan en MIBANCO, para lo cual MIBANCO podrá realizar la operación de cambio de monedas al tipo de cambio que tenga establecido al momento de realizar la operación. En caso la amortización y/o cancelación de la deuda vencida y exigible de EL CLIENTE con MIBANCO se realice con cargo a un depósito a plazo fijo, EL CLIENTE faculta a MIBANCO a poder abrir un nuevo depósito a su nombre por el saldo resultante de esta operación luego de realizado el cargo, y si este importe lo amerita, por el mismo plazo faltante aplicándole la tasa de interés compensatoria efectiva anual que corresponda conforme a la Cartilla de Información y al Tarifario de MIBANCO el día de la apertura. Se le informará a EL CLIENTE respecto a dicho hecho en la comunicación de compensación. La información respecto de la compensación, será comunicada a EL CLIENTE, dentro de los quince (15) días posteriores a su realización, mediante cualquiera de los medios de comunicación directa indicados en la cláusula cuarta.

SÉPTIMA.- Ejecución del préstamo a través del Pagaré Incompleto o de la Liquidación de Deuda: EL CLIENTE a solicitud de MIBANCO, emitirá un Pagaré Incompleto, cuya copia le será entregada a la suscripción del presente Contrato. La emisión del pagaré incompleto constará indicada en la HOJA RESUMEN, declarando en este caso EL CLIENTE renuncia expresa a su derecho de agregar una cláusula que limite la circulación del pagaré, autorizando a MIBANCO para que en caso de dar por vencidos todos los plazos conforme a lo previsto en la Cláusula sexta, proceda al cobro del íntegro de lo adeudado y de las acreencias que resulten a su favor, en cualquiera de las siguientes formas u otras permitidas por la Ley N° 27287, Ley de Títulos Valores y sus modificatorias, a libre decisión de MIBANCO:

- 7.1 MIBANCO queda facultado por EL CLIENTE para integrar el Pagaré Incompleto en cuanto a su fecha de vencimiento, a su importe y a las tasas de interés compensatorio y moratorio o penalidad(es) por pago(s) tardío(s), según corresponda. El importe de este Pagaré corresponderá a la liquidación que practique MIBANCO de las obligaciones que sean de cargo de EL CLIENTE, y la fecha de vencimiento corresponderá a la fecha en la que se practique dicha liquidación. Una vez completado de ese modo, el Pagaré será presentado a EL CLIENTE para su pago. En caso que no fuese pagado, se devengarán los intereses compensatorios más moratorios o la(s) penalidad(es) por pago(s) tardío(s) de ser el caso, aplicados sobre el importe del Pagaré, y MIBANCO procederá de ser el caso a protestarlo y ejercitará las acciones de ley que correspondan; todo ello conforme al Art.10 de la Ley N° 27287 Ley de Títulos Valores y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que EL CLIENTE declara conocer y haber recibido explicación de parte de MIBANCO en sus alcances y uso de este Pagaré incompleto.
- 7.2 Alternativamente y a sola decisión de MIBANCO sin que ello implique desconocer las condiciones pactadas o la contratación de servicios adicionales no pactados, esta podrá formular una Liquidación de la(s) deuda(s) de cargo de EL CLIENTE en favor de MIBANCO y exigir su pago por la vía ejecutiva, de acuerdo al Art.132.7 de la Ley N° 26702, luego de las compensaciones con los fondos, valores, acreencias o activos líquidos que MIBANCO decida y pueda tener en su poder a nombre de EL CLIENTE y/o de sus garantes. Esta Liquidación podrá ser hecha sea a cargo de EL CLIENTE y/o de sus respectivos garantes, dirigiendo la acción ejecutiva para su cobro, ya sea a EL CLIENTE, o a sus garantes, o a ambos, según decida MIBANCO, sin perjuicio de comunicar las razones que motivaron esta decisión. Alternativamente y a sola decisión de MIBANCO, podrá ejercer sus derechos crediticios e interponer las acciones legales que correspondan a través de otras vías que la ley le faculte.
- 7.3 Las partes acuerdan que MIBANCO podrá destruir el Pagaré una vez cumplida las obligaciones de pago de EL CLIENTE, prescindiendo de su devolución física, no obstante a solicitud de EL CLIENTE y/o EL(LOS) FIADOR(ES) le(s) será entregada una constancia de no adeudo del préstamo respectivo.

ANEXO 8

AUTO FINAL-EXPEDIENTE 121-2012



4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Grau

EXPEDIENTE : 00121-2012-0-2001-JP-CI-04
MATERIA : OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARRASCO ESPINOZA MILAGROS CRISTOLINA
ESPECIALISTA : RIVERA CASTILLO AMELIA
DEMANDADO : RUMICHE CHUNGA LUCIO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

AUTO FINAL

Resolución Número: Diez (10)

Piura, trece de noviembre
De dos mil diecisiete.-

I.- ASUNTO:

AUTOS Y VISTOS; en el proceso seguido por Banco de Crédito del Perú, contra Rumiche Chunga Lucio sobre obligación de dar suma de dinero; **Y CONSIDERANDO:**

II.- ANTECEDENTES:

Argumentos de la parte ejecutante

- 2.1. Mediante escrito de folios 24 a 26, la entidad demandante **Banco de Crédito del Perú**, interpone demanda en la vía del proceso único de ejecución sobre obligación de dar suma de dinero contra **Rumiche Chunga Lucio** en calidad de obligado principal, a fin que le cancelen la suma de **S/9,318.59 Nueve Mil Trescientos Dieciocho con 59/100 Soles**, cantidad que constituye el monto del petitorio según la Liquidación de Saldo deudor que se adjunta.
- 2.2. Que al demandado, la entidad demandante le otorgó un crédito efectivo signado con N°100455000000000000568831, el mismo que registra como saldo deudor moroso, el importe de **S/9,318.59 (Nueve Mil Trescientos Dieciocho Con 59/100 Nuevos Soles)**, suma que el demandado ha incumplido en pagar. Este saldo deudor, incluye los intereses compensatorios y moratorios al día 02 de Febrero del 2011 la que se detalla en la liquidación de deuda que se adjunta a la presente demanda.

Consideraciones del Trámite

- 2.3. Admitida a trámite la demanda por Resolución número seis de folios 72 a 74 se dicta mandato ejecutivo, notificándose a la parte ejecutada con las formalidades de ley, conforme a los cargos de notificación que obra de folios 79 a 80, quien pese a estar debidamente notificado no ha formulado contradicción.

III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

- 3.1. La tutela jurisdiccional efectiva, conforme lo ha establecido nuestra Constitución Política, es un derecho fundamental que tiene toda persona, quien para hacerla efectiva, debe ejercitarla cumpliendo la garantía del debido proceso.
- 3.2. Según lo establece el artículo 590-B del Código Procesal Civil introducido por la modificatoria del Decreto Legislativo N°1069, el Juez de Paz Letrado es competente para conocer las pretensiones ejecutivas cuya cuantía no sea mayor de cien unidades de referencia procesal, y en el caso de autos, el monto puesto a cobro, no excede la cuantía antes señalada.

- 3.3. La accionante pretende se ejecute la liquidación de saldo deudor, anexando el Contrato de Crédito Personal, ello en atención al artículo 132° inciso 7 de la Ley 27602 – Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros establece: “[...] 7. *El mérito ejecutivo de las liquidaciones de saldos deudores que emitan las empresas.*”
- 3.4. Que, el artículo 132° inciso 7) de la Ley N°26702 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, otorga mérito ejecutivo a las liquidaciones de saldo deudor que emitan las empresas entre ellas el Banco; debiendo observar lo dispuesto en la Resolución Casatoria emitida en el Expediente N°1674-2002, en el cual la Corte Suprema ha establecido **“...que las liquidaciones del saldo deudor emitidas por las empresas del sistema financiero tienen mérito ejecutivo, siendo indispensable para que proceda la acción ejecutiva, que se presente conjuntamente con dicha liquidación el documento que dio origen a la deuda.”**
- 3.5. En ese sentido, la obligación derivada de la liquidación de saldo deudor de folios 17, ha quedado plenamente acreditada con el Contrato de Crédito Efectivo, obrante a folios 11 a 12, por lo que la entidad ejecutante tiene expedida la acción ejecutiva para su cobro.
- 3.6. Es así, que el presente proceso es uno de carácter ejecutivo, eminentemente formal y sustentado en el derecho contenido en la liquidación de saldo deudor, contenida a folios 17, cuyo origen de la obligación se deriva del Contrato de Crédito Efectivo de folios 10 a 14, el cual tiene la calidad de título ejecutivo conforme al artículo 132° inciso 7 de la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros; asimismo reúnen los requisitos para lograr su cancelación vía proceso de ejecución, ya que la obligación contenida en la misma es cierta, expresa, exigible y líquida.
- 3.7. La parte ejecutada no ha formulado contradicción al mandato de ejecución, por lo que entonces es de tener en cuenta la parte *in fine* del artículo 690-E del Código Procesal Civil, incorporado por el Decreto Legislativo N° 1069, que establece: *“Si no se formula contradicción, el Juez expedirá un auto sin más trámite, ordenando llevar adelante la ejecución”*.
- 3.8. En este tipo de procesos la carga de la prueba se invierte y obliga al deudor a probar que el importe contenido en la liquidación de saldo deudor derivada del contrato de crédito, ha sido cancelada, conforme a lo dispuesto por el artículo 1229° del Código Civil; sin embargo, como ya se señaló, la parte ejecutada no ha presentado contradicción al mandato ejecutivo, lo que permite concluir que no tiene nada que objetar a la obligación contenida en la liquidación de saldo deudor derivado del contrato de crédito cuyo pago se exige mediante Resolución número seis, por lo que subsisten los motivos por los cuales se dictó el mandato ejecutivo, debiendo por tanto continuarse con el desarrollo del proceso hasta la cancelación total de la obligación disponiendo se lleve acabo la ejecución forzada.
- 3.9. En cuanto a la pretensión de pago de los intereses compensatorios y moratorios, de la cláusula quinta del Contrato de Crédito Personal que corre de folios 11 a 12 debidamente suscrito por el demandado, se señala que: *“ El crédito será pagado por el Cliente mediante cuotas periódicas, con la frecuencia, importe (...)En caso de no cancelar las cuotas en el día de su vencimiento, el Cliente, pagará adicionalmente los intereses moratorios pactados a que se refiere la Hoja Resumen y/o el tarifario de El Banco (...)”* ; tasas de intereses que se visualizan de la Hoja Resumen de Crédito Personal que obra a folios 15.

- 3.10. En tal sentido la tasa establecida resulta ser liquidable conforme al artículo 689 del CPC y en concordancia con el artículo 9 de la Ley N° 26702, que señala: *"Las empresas del Sistema financiero pueden señalar libremente las tasas de interés, para el caso de la fijación de las tasas de interés deberán observar los límites que para el efecto señale el Banco Central (...)"*; por lo que corresponde amparar el extremo pretendido debiendo proceder a su liquidación en ejecución de sentencia.
- 3.11. Finalmente con respecto a las costas y costos del proceso, teniendo en cuenta que no existen elementos objetivos para eximir del pago de los costos y costas del proceso a la parte vencida se debe condenar al pago de los mismos, los cuales se liquidaran en ejecución de sentencia en la forma prevista en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil.

IV. DECISIÓN:

Por estos fundamentos y estando a lo dispuesto por los artículos 1219° y 1220° del Código Civil, concordante con los artículos 688° inciso 11, y 690-E Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo 1069; **SE RESUELVE:**

- 4.1. **LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN** hasta que la parte ejecutada **Rumiche Chunga Lucio CUMPLA** con cancelar a la entidad ejecutante **Banco De Crédito del Perú** la suma de **S/9,318.59 (Nueve Mil Trescientos Dieciocho con 59/100 Soles)**.
- 4.2. **Disponer** el pago de los intereses compensatorios, moratorios; costos y costas del proceso; los que serán liquidados en ejecución de sentencia.

Consentida o ejecutoriada que sea cúmplase y en su oportunidad archívese.
Notifíquese con las formalidades de ley. –

ANEXO 9

AUTO FINAL- EXPEDIENTE 1358-2017



4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - Grau

EXPEDIENTE : 01358-2017-0-2001-JP-CI-04
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : CARRASCO ESPINOZA MILAGROS CRISTOLINA
ESPECIALISTA : RIVERA CASTILLO AMELIA
DEMANDADO : ROJAS MERINO CHRISTIAN DANILO
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

AUTO FINAL

Resolución Número: Tres (03)

Pura, dieciocho de octubre

De dos mil diecisiete.-

I.- ASUNTO:

AUTOS Y VISTOS; en el proceso seguido por **Banco De Crédito del Perú**, contra **Rojas Merino Christian Danilo** sobre obligación de dar suma de dinero; **Y CONSIDERANDO:**

II.- ANTECEDENTES:

Argumentos de la parte ejecutante

- 2.1. Mediante escrito de folios 28 a 33, la entidad demandante **Banco De Crédito del Perú.**, interpone demanda en la vía del proceso único de ejecución sobre obligación de dar suma de dinero contra **Rojas Merino Christian Danilo** en calidad de obligado principal, a fin que le cancelen la suma de **S/1,276.75 Un Mil Doscientos Setenta y Seis con 75/100 Soles**, cantidad que constituye el monto del petitorio según la Liquidación de Saldo deudor al 30 de junio del 2015, el mismo que no fue cancelado a la fecha de vencimiento.
- 2.2. Que el demandado adeuda a la entidad demandante, la suma de **S/1,276.75 Soles**, toda vez que con fecha 09 de octubre del año 2013 contrato con la ejecutante el Crédito Efectivo N°100475000000004220666, conforme se acredita con la solicitud y el contrato de crédito de folios 21 a 25; que ante el incumplimiento del pago de su obligación, el banco recurrente cursó la Carta Notarial, dando por terminado el contrato de Crédito Efectivo y por vencidos todos los plazos acordados a favor del demandado. Asimismo y a efectos de entablar la correspondiente demanda vía proceso único de ejecución, se procedió a emitir la correspondiente Liquidación del Saldo deudor.

Consideraciones del Trámite

- 2.3. Admitida a trámite la demanda por Resolución número uno de folios 34 a 35 se dicta mandato ejecutivo, notificándosele a la parte ejecutada con las formalidades de ley, conforme a los cargos de notificación que obra de folios 37 a 38, quien pese a estar debidamente notificado no ha formulado contradicción.

III.- FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN:

- 3.1. La tutela jurisdiccional efectiva, conforme lo ha establecido nuestra Constitución Política, es un derecho fundamental que tiene toda persona, quien para hacerla efectiva, debe ejercitarla cumpliendo la garantía del debido proceso.

no ha sido adjuntado por la entidad ejecutante, siendo que la carga de la prueba recae sobre la parte que afirma los hechos que configuran su pretensión; por lo tanto al no haber demostrado la tasa de interés pactada sobre los cuales se debe liquidar los mismos, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 1245 del Código Civil es decir se debe abonar el interés legal, concepto que se calculará en ejecución de sentencia.

- 3.10. Finalmente con respecto a las costas y costos del proceso, teniendo en cuenta que no existen elementos objetivos para eximir del pago de los costos y costos del proceso a la parte vencida se debe condenar al pago de los mismos, los cuales se liquidaran en ejecución de sentencia en la forma prevista en los artículos 417° y 418° del Código Procesal Civil.

IV. DECISIÓN:

Por estos fundamentos y estando a lo dispuesto por los artículos 1219° y 1220° del Código Civil, concordante con los artículos 688° inciso 11, y 690-E Código Procesal Civil, modificado por el Decreto Legislativo 1069; **SE RESUELVE:**

- 4.1. **LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN** hasta que la parte ejecutada **Rojas Merino Christian Danilo CUMPLA** con cancelar a la entidad ejecutante **Banco De Crédito del Perú** la suma de **S/1,276.75 (Un Mil Doscientos Setenta y Seis con 75/100 Soles)**; más el pago de intereses legales, costos y costas del proceso, conceptos que serán liquidados en ejecución de sentencia.

Consentida o ejecutoriada que sea cúmplase y en su oportunidad archívese.
Notifíquese con las formalidades de ley. –